



UNIVERSIDAD NACIONAL
AUTÓNOMA DE MÉXICO

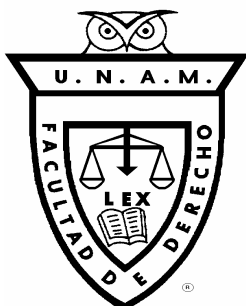
FACULTAD DE DERECHO
SEMINARIO DE DERECHO PENAL

***“HACIA EL NUEVO FRAUDE
PROCESAL”***

T E S I S

QUE PARA OBTENER EL TÍTULO DE
LICENCIADO EN DERECHO PRESENTA

CHRISTIAN BERNAL PORRAS



ASESOR: LIC. JOSÉ HÉCTOR FRANCO MEJÍA

MÉXICO D.F.

2008.



Universidad Nacional
Autónoma de México



UNAM – Dirección General de Bibliotecas

Tesis Digitales

Restricciones de uso

DERECHOS RESERVADOS ©

PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL

Todo el material contenido en esta tesis esta protegido por la Ley Federal del Derecho de Autor (LFDA) de los Estados Unidos Mexicanos (México).

El uso de imágenes, fragmentos de videos, y demás material que sea objeto de protección de los derechos de autor, será exclusivamente para fines educativos e informativos y deberá citar la fuente donde la obtuvo mencionando el autor o autores. Cualquier uso distinto como el lucro, reproducción, edición o modificación, será perseguido y sancionado por el respectivo titular de los Derechos de Autor.

Gracias a DIOS.

A mi madre Maria Eugenia Virginia Porras García †
quien me dio la vida y base de mi educación
y de mis valores y que siempre creyó en mi.

A mi padre Narciso Bernal Huerta †
que se fue con la ilusión de verme titulado y que me apoyo
hasta su ultimo día ¡Gracias!.

A la UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO
quien me acogió como uno de sus hijos desde hace mas de siete años
y a quien siempre le deberé mi formación y mi éxito que como profesionista
llegue a tener.

A la FACULTAD DE DERECHO que le debo los momentos
mas felices de mi vida quien con gran generosidad me dio
una excelente formación como abogado y como persona.

A Denisse Gómez Velasco quien me acompaño
a lo largo de mi carrera, a quien siempre le estaré
eternamente agradecido.

A mi hermano Pablo Bernal Porras que espero
sea una motivación para su superación.

A Carmen García Morales por su apoyo.

A Enrique Porras García y su familia por su apoyo
cuando lo necesite.

A Rita Flavia Porras García, Alicia Porras García
y Mariana Vargas Porras por estar siempre pendiente de mi.

A la Familia Bernal Huerta.

Al Maestro Héctor Franco Mejía, quien me permitió
ser mas que su alumno y quien para mi es un amigo
incondicional y que me a apoyado en mi desarrollo
académico como profesional y que es un ejemplo para mi.

A Héctor Sámano López de Llergo
quien mas que un amigo es un hermano para mi.

A Javier Romo Michaud.

Al Maestro Andrés Linares Carranza
por su amistad y apoyo.

A mi amigo Diego Armando Guerrero García,
ejemplo de amistad y de lealtad.

A mis compañeros Consejeros Rodrigo Guerrero,
Ricardo Vázquez, Ixchel Alzaga y Sergio Méndez.

A Gerardo Agustín Penilla Landeros
Presidente de la Sociedad de Alumnos.

A Moisés Rojas, quien me apoyo con sus consejos
y que es un amigo incondicional para mí.

Al Dr. Fernando Serrano Migallón,
Lic. Oscar Vázquez del Mercado Cordero
y a la maestra Martha Rábago Murcio.

A José Antonio Aguilar Villanueva.

A Moisés Reyes.

Al Dr. Baltasar Cavazos Flores por ser una motivación en mi carrera.

Al Sr. Leonel Olicon.

A todos mis maestros de la Facultad de Derecho.

A todos mis compañeros de la Facultad de Derecho.

HACIA EL NUEVO FRAUDE PROCESAL

ÍNDICE

INTRODUCCIÓN.....	I
--------------------------	----------

CAPÍTULO I

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS DEL DELITO DE FRAUDE PROCESAL ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 310 DEL CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL

.....	1
--------------	----------

CAPÍTULO II

EXPOSICIÓN DE LOS ELEMENTOS Y CONSTANTES DEL TIPO PENAL.

.....	11
2.1 Bien jurídico protegido.....	13
2.2 Conducta.....	19
2.3 Sujetos.....	27
2.4 Cosas.....	37
2.5 Resultado.....	40
2.6. Elementos objetivos del tipo.....	43
2.7. Elementos subjetivos del tipo.....	44
2.8. Elementos normativos del tipo.	47

CAPÍTULO III

CUERPO DEL DELITO DE FRAUDE PROCESAL ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 310 DEL CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL SEGÚN LOS ELEMENTOS Y CONSTANTES DEL TIPO.

.....	50
3.1 Bien jurídico protegido.....	52
3.2 Conducta.....	58
3.3 Sujetos.....	66
3.4 Cosas.....	72
3.5 Resultado.....	73
3.6. Elementos objetivos.....	77
3.7. Elementos subjetivos.....	81
3.8. Elementos normativos.	86

CAPÍTULO IV

EL NUEVO FRAUDE PROCESAL, ELEMENTOS Y CONSTANTES.

.....	112
4.1 Bien jurídico protegido.....	113
4.2 Conducta.....	115
4.3 Sujetos.....	118
4.4 Cosas.....	121
4.5 Resultado.....	123
4.6. Elementos objetivos.....	125
4.7. Elementos subjetivos.....	130
4.8. Elementos normativos.....	132
 CONCLUSIONES.....	 144
 PROPUESTA.....	 147
 BIBLIOGRAFÍA.....	 150

INTRODUCCIÓN

La conducta típicamente descrita en el supuesto del fraude procesal, pretende ser una garantía de seguridad jurídica en el ámbito procesal de todas y cada una de las ramas del Derecho, ya que pretende evitar el hecho de que las personas acudan ante las autoridades, ya sean judiciales o administrativas, con el fin de obtener la declaración de un derecho, valiéndose en todo caso y como lo establece el delito en comentario, De la simulación de un acto o escrito judicial, es decir, puede darse el supuesto de obtener una sentencia o resolución administrativa por parte de una autoridad o Juez utilizando como herramienta al Derecho, aunque dicha resolución no cumple con uno de los fines últimos del Derecho como lo es la Justicia. Por lo que desde este punto es criticable la redacción del artículo 310 de nuestro Código Penal para el Distrito Federal, la cual establece entre otras cosas que serán analizadas, cuestionadas y perfeccionadas elementos normativos de difícil comprobación como lo es el **animus** de obtener una sentencia favorable o la condicionante respecto de la necesidad de que la sentencia o resolución sean contrarios a la ley “(...) con el fin de obtener sentencia, resolución o acto administrativo **contrario a la ley** (...)”, ya que si bien es cierto que como lo he establecido la Sentencia o Acto Administrativo resultante de la valoración que le de la autoridad (judicial o administrativa) al acto o escrito judicial que se presente a esa autoridad administrativa podría ser injusta, pero no será contraria a la ley la resolución en sí.

La herramienta esencial del Abogado es la ley, y por lo tanto en el mismo orden de ideas, el legislador debe ser cuidadoso respecto a las leyes que crea, garantizando en todo momento su cumplimiento, refiriéndome con esto a la falta de técnica legislativa con que formula las leyes, ya que la aplicación del Derecho Penal conlleva *per se*, lo establecido en nuestra Constitución Política, la aplicación exacta de la ley. Limitando con esto la interpretación a lo estrictamente establecido en la norma penal.

Aunado a la falta de técnica legislativa en la elaboración de nuestro Código Penal, y desde luego en el caso que nos ocupa se encuentra que la falta de aplicación de la ley se debe en muchas ocasiones por la falta de conocimientos por parte de los Agentes del Ministerio Público, quienes en muchos casos desconocen la correcta integración de la Averiguación Previa cuando esta versa sobre un tipo penal como el de Fraude Procesal, por lo que cuando se acude con ellos es recurrente el argumento de la falta de elementos típicos en la conducta realizada por el sujeto activo, es decir, se dice que no se ha colmado la hipótesis normativa.

Toda vez que de una simple lectura del artículo 310 del Código Penal para el Distrito Federal, se inferiría que la simple presentación del documento elaborado por la contraparte actualizaría la hipótesis típicamente descrita en el numeral en comentario. Algunos Agentes del Ministerio Público se reservan el ejercicio de la acción penal, hasta en tanto no se resuelva de fondo del asunto, argumentando en algunos casos la falta de daño patrimonial que sufra el pasivo, por lo que como se expondrá en la presente tesis, es cuestionable el argumento de la falta de daño patrimonial, en virtud de que a diferencia del fraude genérico el cual tutela el bien jurídico del patrimonio, este fraude sui generis tiene por objeto tutelar la correcta administración de justicia, por lo que se cuestionará la penalidad establecida en dicho artículo, toda vez que plantea una penalidad en base al daño patrimonial, es decir, cuantificable en dinero, en virtud que el mismo artículo nos remite a las penas establecidas para el delito de fraude (genérico) por lo que si el beneficio que pretende obtener no es cuantificable en numerario se le establecerá una penalidad de seis meses a seis años de prisión, por lo que establezco a reserva de que es abordado en el presente trabajo, que es cuestionable dicha penalidad, en virtud de que no todos los procedimientos en los que se acude ante una autoridad sea judicial o administrativa, conllevan un beneficio económico, como podría ser el caso de la materia familiar en un juicio que verse sobre la pérdida de la patria potestad o la guardia y custodia de los menores hijos, donde perfectamente se podría dar el supuesto en el cual de forma dolosa cualquiera de los litigantes (en el sentido estricto de la palabra), a efecto de obtener una resolución favorable alterara elementos de prueba y en consecuencia obtuviera la guardia y custodia, o su

contraparte perdiera la patria potestad, por el solo hecho de no ser cuantificable en numerario, de llegarse a acreditar el tipo de fraude procesal únicamente se le impondría la pena mínima establecida para ese delito, siendo cuestionable en todo caso la mayor importancia que le ha dado el legislador al daño patrimonial, que el que sufrirá el padre privado de sus hijos de forma injusta.

Aunado a lo anterior en la práctica la víctima del fraude procesal, se encuentra en gran parte limitado, ya que si bien es cierto que el Código de Procedimientos Civiles no utiliza el término de fraude procesal, si establece medidas a efecto de poder combatir un documento que consigne un acto falso presentado en el juicio como se encuentra en el artículo 386 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, en el cual se establece el procedimiento a efecto de poder objetar de falso un documento presentado en el Juicio, con la característica de que el Juzgador **únicamente** puede resolver hasta que resuelva el fondo del asunto, es decir, hasta la sentencia definitiva respecto del valor y alcance **probatorio** del mismo, sin que por esto se tenga que vincular al campo del Derecho Penal, ya que si bien es cierto que nuestro Código de Procedimientos Penales establece en los siguientes preceptos:

“Artículo 482.- Cuando en un negocio judicial, civil o mercantil, se denuncien hechos delictuosos, el juez o Tribunal de los autos inmediatamente los pondrá en conocimiento del Ministerio Público adscrito al mismo juzgado o tribunal, para los efectos del artículo siguiente.”

Por lo que en relación con el artículo 386 del Código de Procedimientos Civiles, el Juez Civil al momento de que un litigante realice la objeción de falso de un documento, en donde obviamente se realiza la imputación directa de un litigante a otro respecto de la falsa elaboración del documento y en relación a la hipótesis normativa del fraude procesal, este debería dar cabal cumplimiento a la obligación establecida en el artículo 482 del Código de Procedimientos Penales, cosa que en la realidad no sucede, ya que este únicamente resolverá como lo he manifestado hasta la sentencia definitiva la impugnación del documento objetado de falso, por lo que resulta únicamente una norma vigente mas no positiva y en consecuencia el siguiente precepto del Código de Procedimientos Penales sigue la misma suerte:

“Artículo 483.- El Ministerio Público, dentro del término de diez días, practicará desde luego las diligencias necesarias para poder determinar si se hace consignación de los hechos a los tribunales o no; en el primer caso y siempre que estos hechos sean de tal naturaleza que si se llegare a dictar sentencia, con motivo de ellos, ésta debe necesariamente influir en las resoluciones si pudieran dictarse en el negocio, el Ministerio Público pedirá y el juez, o tribunal ordenará que se suspenda el procedimiento civil, hasta que se pronuncie una resolución definitiva en el asunto

Penal.”

Ya que como se desprende de la mera lectura del citado precepto, este únicamente le otorga al Agente del Ministerio Público diez días para poder determinar si consigna ante el Juez o no por lo que en la práctica resulta casi imposible que se integre una averiguación en ese lapso. Aunado a lo anterior y debido a la ambigüedad con que ha sido formulado el tipo penal del Fraude Procesal, el Ministerio Público se encontrará imposibilitado a cumplir con los extremos establecidos por el artículo 122 del Código de Procedimientos Penales.

Por lo que afirmo que no ha sido plasmada de forma correcta la voluntad del legislador, en virtud de que la descripción en abstracto, ha sido redactada de forma poco afortunada, ya que como se demostrará en el desarrollo de la presente tesis, el tipo de Fraude Procesal adolece de la correcta redacción, para garantizar su aplicación y en consecuencia el legislador ha creado una norma vigente pero no positiva (eficaz) a efecto de garantizar la seguridad jurídica que todo gobernado merece dentro de un procedimiento, esto debido al principio de estricta aplicación de la ley penal derivada de la fracción Tercera del Artículo 14 Constitucional como lo ha sostenido nuestro máximo tribunal.

Como prueba de lo anterior se puede observar el bajo número de consignaciones hechas por el Delito de Fraude Procesal:

“Consignaciones hechas en el año de diciembre de 2003 a noviembre de 2004 por el delito de Fraude Procesal en Juzgados de Primera Instancia: 41 (cuarenta y uno).

Consignaciones hechas en el año de diciembre de 2003 a noviembre de 2004 por el delito de Fraude Procesal en Juzgados de Paz Penal: **NO HUBO INGRESADOS**

Consignaciones hechas en Juzgados de Primera Instancia de Diciembre de 2004 a Noviembre de 2005 por el Delito de Fraude Procesal: **58 (cincuenta y ocho).**

Consignaciones hechas en el año de diciembre de 2004 a noviembre de 2005 por el delito de Fraude Procesal en Juzgados de Paz Penal: **2 (dos).**

Consignaciones hechas en Juzgados de Primera Instancia de Diciembre de 2005 a Noviembre de 2006 por el Delito de Fraude Procesal: **60 (sesenta).**

Consignaciones hechas en el año de diciembre de 2005 a noviembre de 2006 por el delito de Fraude Procesal en Juzgados de Paz Penal: **7 (siete).** “¹

Por lo que este trabajo no pretenderá limitarse a realizar una simple crítica, si no que después de analizar de una forma minuciosa, la *ratio legis*, es decir la exposición de motivos del Fraude Procesal, en la cual desahogaremos la verdadera voluntad del legislador, para posteriormente someter a un análisis exhaustivo la viabilidad de la aplicación del supuesto del Fraude Procesal, distinguiendo para ello los elementos y las constantes del tipo.

Concluyendo con una propuesta de nueva redacción del tipo de Fraude Procesal, que permita cabalmente su aplicación y que sea un medio a través del cual se prevenga y se erradique la práctica de exhibir documentos falsos o argumentar la existencia de actos jurídicos inexistentes a efecto de darles certeza y garantía de seguridad jurídica al proceso.

¹ Oficina de Acceso a la Información Pública del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal.

CAPÍTULO I

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS DEL DELITO DE FRAUDE PROCESAL ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 310 DEL CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL

1.- EXPOSICIÓN DE MOTIVOS DEL DELITO DE FRAUDE PROCESAL ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 310 DEL CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL.

El antecedente histórico del artículo 310 del Código Penal Para el Distrito Federal se encuentra en el artículo 387, fracción X, del anterior Código Penal Vigente en el Distrito Federal (Código Penal para el Distrito Federal en Materia de Fuero Común y para toda la República en materia de Fuero Federal).

El artículo 387 del anterior Código Penal Vigente en el Distrito Federal establecía la siguiente hipótesis delictiva:

Artículo 387. Las mismas penas señaladas en el artículo anterior, se impondrán:

X. Al que simulare un contrato, un acto, o escrito judicial con perjuicio de otro o para obtener cualquier beneficio indebido.

En un breve análisis de esta hipótesis, diré que el sujeto activo del delito es cualquier persona, es decir, no se requiere ninguna calidad para serlo. Por conducta como verbo rector se tiene a la palabra simular, por lo que se constituyen tres posibles hipótesis

Simular un contrato.

Simular un acto judicial.

Simular un escrito judicial.

Por simular, se entiende imitar, fingir lo que no es. Por lo que en la primera hipótesis, la de simular un contrato, se entendería como fingir lo que no es un acuerdo de voluntades para crear o transferir derechos y obligaciones, por tanto desde el punto de vista civilista se estaría ante la ausencia de un contrato, por

adolecer del elemento esencial es decir del consentimiento de las partes, con lo que se destruye la hipótesis, además de que deja sin contemplar los convenios en el sentido estricto de la palabra (modificar o extinguir derechos y obligaciones).

Respecto de las dos hipótesis Simular un acto judicial o un escrito judicial, esto es presentar una promoción o comparecer ante la autoridad para obtener de la autoridad lo que correspondería obtener, si lo alegado fuera cierto, podría darse el caso de una persona que manifiesta en una denuncia de intestado que no existen más herederos a sabiendas de que sí existen.

Y un aspecto que es de resaltar lo dice el epígrafe del artículo 387, las penas que se aplicarían son las correspondientes al fraude genérico establecidas en el artículo 386 del Código Anterior Vigente en el Distrito Federal, y todas estas se basan para imponer la penalidad en base al valor económico de lo defraudado, por lo que este tipo no contaría con sanción tratándose de beneficios no estimables pecuniariamente, como sería el caso de la pérdida de la patria potestad, la guardia y custodia de los menores, un divorcio, etc.

Por lo que respecta a los antecedentes legislativos del Código Penal para el Distrito Federal, el cual en su momento fue conocido como el Nuevo Código Penal para el Distrito Federal:

El 14, 28 y 30 de noviembre del año 2000, los Partidos Políticos Revolucionario Institucional, de la Revolución Democrática y Acción Nacional, presentaron ante el Pleno de la Asamblea Legislativa, sendas Iniciativas de Código Penal para el Distrito Federal. En las referidas fechas la Mesa Directiva de este Órgano Legislativo, turno (sic) las Iniciativas para su análisis, discusión y en su caso aprobación, a la Comisión de Administración y Procuración de Justicia.

Al presentar las iniciativas respectivas los partidos políticos esgrimieron los siguientes argumentos:

Partido Revolucionario Institucional: Necesidad de un nuevo Código Penal para el Distrito Federal. La función del legislador, lleva implícito el deber y la responsabilidad de crear leyes que garanticen la adecuada regulación de los bienes jurídicos que constituyen el sustento y la base de la sociedad a la que representamos. Nuestra labor debe estar orientada a buscar modelos normativos capaces de corregir las limitaciones de las instituciones jurídicas vigentes y adecuarlas a las condiciones sociales, económicas, culturales, políticas, etc., que prevalezcan.

Es innegable afirmar que el incremento desmedido de la delincuencia con las nuevas formas que esta ha ido adquiriendo, ha determinado que la normatividad penal haya quedado a la zaga, ya que el marco teórico que sirve de base al actual Código Penal, ha sido rebasado por el progreso de la ciencia penal y de la política criminal, además de ser evidente la ineficacia de su aplicación y los alcances de la misma.

Desde otra perspectiva; el tema de la delincuencia se ha convertido en un verdadero debate público, sin embargo, no hemos logrado condensar en un cuerpo normativo las tendencias, doctrinas y opiniones que al respecto han sido vertidas tanto por la opinión pública, así como por los estudiosos y litigantes de la materia, que día a día, en su actuar, se enfrentan a la vaguedad de las disposiciones existentes en la materia penal.

El nuevo ordenamiento penal ha de ajustarse a los principios que deben regir en un sistema de justicia penal dentro de un Estado de Derecho; principios fundamentales que se derivan de la propia Ley Suprema y de los instrumentos internacionales suscritos por México.

Lo anterior en cuanto al Código Penal para el Distrito Federal, la iniciativa contemplaba al delito de fraude procesal, que estaba tipificado en el artículo 314 y se incluía en el Capítulo II del Título sexto, cuya denominación era “Delitos contra la

veracidad necesaria para la adecuada administración de justicia”, planteando el proyecto de tipo penal de Fraude Procesal de la siguiente manera:

“Al que, para obtener una resolución judicial o administrativa de la que derive algún perjuicio o beneficio indebidos, simule algún acto jurídico o altere algún elemento de prueba o realice cualquier otro acto tendiente a inducir a error a la autoridad, se le impondrá prisión de uno a cinco años y de cincuenta a cuatrocientos días multa.”

El proyecto del Partido Revolucionario Institucional para el delito de fraude procesal, es innovador entre otras cosas en cuanto a que lo incluye ya no como una figura equiparable del fraude genérico, por lo que en consecuencia en el uso de la lógica, cambiaría la concepción del bien jurídico protegido ya que al incluirlo dentro del Capítulo II del Título sexto “Delitos contra la veracidad necesaria para la adecuada administración de justicia”, inferiríamos que el bien jurídico protegido es la veracidad necesaria para la adecuada administración de justicia, lejos del patrimonio como se establecía en el Código Penal Vigente en el Distrito Federal anterior. Lo que se reafirma al no contemplar como criterio para la graduación de la pena la valoración pecuniaria respecto del daño que se cause. Como crítica diré que este proyecto no dispone la hipótesis que el beneficio pudiera ser para otra persona y además es perseguible por oficio.

Partido de la Revolución Democrática: El Código Penal vigente es reflejo de muchas tendencias y doctrinas a veces coincidentes, pero en otra, confrontadas, por eso vemos necesario entrar a una revisión integral y es en este marco que presentamos esta Iniciativa de Código Penal para el Distrito Federal, sin dejar de insistir en que estamos abiertos a otros puntos de vista y que buscamos, con todas y todos los diputados que conforman este órgano de gobierno, dar respuesta a la sociedad capitalina. En este orden de ideas, surgen algunas cuestiones fundamentales que tendríamos que reflexionar: ¿Por qué un nuevo Código Penal para el Distrito Federal? ¿Qué tipo de Código Penal es el que requiere esta gran

ciudad? ¿Uno que responda a exigencias democráticas o uno de corte autoritario o elitista? ¿Cuál debe ser su orientación filosófico-política? ¿Qué nuevas alternativas político-criminales contendrá?

En atención a ello, el Código debe precisar con nitidez los presupuestos de la pena, las medidas de seguridad y los criterios político-criminales para la individualización judicial de las penas. Asimismo, resulta imperativo revisar el catálogo de delitos, para determinar por una parte, que nuevas conductas habrá de penalizar y cuáles se deben excluir del Código Penal, partiendo de la base de que únicamente deben regularse aquellas conductas que revisten gravedad y buscando una mayor racionalización de las penas.

La atención central y definitoria del bien jurídico que se trata de proteger y a la gravedad de su afectación, debe evitar tanto las penas que son ridículas como las penas sumamente elevadas. La Iniciativa contempla como mínimo la pena de tres meses de prisión y como máximo la de cincuenta, en la inteligencia de que penas menores o mayores traicionan el fin de prevención general al que está llamada la punición.

Del mismo modo, se planteó la necesidad de dar origen a un Código Penal que respete los derechos humanos en su misión fundamental de proteger los bienes jurídicos (individuales, colectivos o estatales) de mayor importancia para la vida ordenada en comunidad y, por tanto, que no se le utilice únicamente como un medio de represión y de sujeción de la persona, sino como un instrumento a su servicio. No se trata de una reforma simple. El Código Penal de 1931, con sus adiciones y reformas, es fruto de la reflexión de muchos penalistas destacados y tiene, sin duda, aspectos encomiables que se retoman en la Iniciativa que presentamos ante esta Soberanía.

Ese Derecho Penal, por tanto, que debe regir en un Estado democrático de Derecho, debe estar en su contenido acorde con esas concepciones características

del Estado al que sirve de instrumento para el cumplimiento de sus funciones. Es decir, debe adecuarse a los postulados Constitucionales que contienen esas concepciones y, por ello, reconocer y respetar la dignidad y las libertades humanas, especialmente en el ámbito en el que los bienes jurídicos que entran en juego son más vulnerables, sobre todo por la gravedad de las consecuencias jurídicas que su lesión o inminente peligro trae consigo.

Consecuentemente, una importante tarea legislativa como la que ahora emprende esta Segunda Legislatura de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, consistiría en plantear cambios substanciales al Derecho Penal para hacerlo más funcional. La delincuencia debe ser enfrentada con normas jurídicas que garanticen la tranquilidad de la sociedad, que permitan separar las conductas antisociales de la vida pública y que logren reparar los daños causados a quienes demandan justicia y buscan la protección del Estado.

El Partido de la Revolución Democrática incluyó al Delito de Fraude Procesal dentro del artículo 269 fracción X en el Capítulo relativo al Fraude, en el Capítulo II, el cual establecía:

Artículo 269. Las mismas penas señaladas en el artículo anterior, se impondrán:

X. Al que simulare un contrato, un acto, o escrito judicial con perjuicio de otro o para obtener cualquier beneficio indebido.

Este proyecto no modifica, ni innova en nada lo que contemplaba la descripción establecida en el anterior Código Penal vigente en el Distrito Federal.

Partido Acción Nacional: La legitimidad del Derecho Penal se sustenta en la protección de los bienes jurídicos fundamentales. El Sistema Penal no es ni debe

ser el único medio utilizado para resolver el problema de la inseguridad pública que actualmente padecemos, esta tiene causas estructurales y responde a problemas integrales, por tanto, las respuestas también deben ser de la misma naturaleza.

En el ámbito de la democracia, el Derecho Penal se vincula conceptualmente con la aplicación estricta de la Constitución y de la ley. Analizar y proponer reformas en materia penal desde la óptica de la democracia, exige trascender la noción puramente procedimental de esta, la cual se le identifica con aquellos procesos por los que la mayoría llega a decisiones específicas sobre determinados temas, para asumir la democracia en el sistema penal es indispensable el estricto respeto de los derechos fundamentales y los principios del Estado de Derecho contemporáneo. En otro orden de ideas, estamos absolutamente conscientes que el Código Penal es únicamente una parte de lo que el Estado debe impulsar como política criminológica preventiva, la cual debe ser elaborada y construida con el consenso y el respaldo de la sociedad.

No existe política pública alguna que tenga eficacia sin que la sociedad comparta los objetivos que se persiguen. En la medida que el individuo interiorice esos objetivos y valores hasta el punto de aceptarlos como propios y que en sus relaciones sociales se comporte conforme a dichos valores, la reacción punitiva será menos necesaria.

Presentamos una iniciativa que surge de las diversas propuestas en las diferentes disciplinas del conocimiento tanto del ámbito académico como de investigación. Nos propusimos crear un instrumento claro y sencillo de entender, interpretar y aplicar para la sociedad, así como para los encargados de procurar y administrar justicia, pero que al mismo tiempo no abrirá la puerta a la posibilidad de violaciones a los derechos humanos o se atente contra las garantías del debido proceso. Creemos que esa pluralidad que hoy se expresa en la sociedad debe incorporarse a los textos legales, eliminando los residuos de la arbitrariedad o la posibilidad de interpretar a capricho de la autoridad los conceptos de la ley.

La presente iniciativa es una propuesta elaborada con detenimiento, a partir del Derecho Comparado y de las opiniones de expertos en la materia e incluso con observaciones de compañeros diputados de diversos partidos; no se pretende darle un matiz político a los diversos tipos penales, porque incluso algunos permanecen como actualmente se encuentran plasmados en el Código Penal vigente. El Código Penal forma parte de una reforma política criminológica integral, la cual debe abarcar no solamente reformas legislativas sustantivas, sino también procedimentales y ejecutivas, e incluso, la modificación y creación de instituciones que hagan efectivas tales disposiciones jurídicas.

Esta Iniciativa contemplaba al delito de fraude procesal en el Título Octavo el cual se llamaba “Delitos cometidos en contra del adecuado desarrollo de la justicia penal”, dentro de este en el Capítulo Cuarto el cual se denominaba “Fraude Procesal” y en el artículo 289 se describía la hipótesis normativa:

“Al que por cualquier medio para obtener un beneficio indebido para sí o para otro simule un acto jurídico o administrativo, altere elementos de prueba o realice cualquier otro acto tendiente a inducir a error ante autoridad judicial o administrativa con el fin de obtener sentencia, resolución, o acto administrativo se le impondrá de seis meses a seis años de prisión y de cincuenta a doscientos cincuenta días multa. “

Me parece que la denominación del título en el que se encontraba el delito de fraude procesal era poco afortunada, toda vez que hace referencia expresa a la justicia penal, siendo contrario a lo establecido en el proyecto de fraude procesal, por que no únicamente se contempla la justicia penal, sino la justicia ante toda clase de autoridades sean judiciales, administrativas, penales o no.

Por lo demás es muy similar a la que actualmente se encuentra vigente, excepto que tal vez de forma afortunada y con mejor técnica legislativa no hace

referencia a que la sentencia o acto administrativo sea contrario a la ley y tampoco se gradúa la severidad de la sanción en base al valor pecuniario del posible beneficio obtenido, además de que también es perseguible por querrela.

Una vez que las iniciativas fueron turnadas a la Comisión de Administración y Procuración de Justicia, dicha Comisión presentó el Dictamen al pleno de la Asamblea Legislativa, para que fuera aprobado por el pleno lo cual se discutió el 30 de abril de 2002 quedando en lo relativo al fraude procesal de la siguiente manera:

“Título vigésimo primero, Delitos contra la administración y procuración de justicia, cometidos por particulares, que se integra con seis Capítulos, aquí se considera que resulta adecuado distinguir las conductas de los particulares en el ámbito de la justicia de las de los funcionarios públicos, lo que permitirá una adecuada individualización al imponer las sanciones, de conformidad con la participación en la conducta precisa, que la ley reconoce como punible y con la adecuada descripción, se contienen en este rubro, Fraude procesal, Falsedad ante autoridades, Variación del nombre o domicilio, Simulación de pruebas, Delitos de abogados, patronos y litigantes Encubrimiento por favorecimiento.”

“ARTÍCULO 310. Al que para obtener un beneficio indebido para sí o para otro, simule un acto jurídico, un acto o escrito judicial o altere elementos de prueba y los presente en juicio, o realice cualquier otro acto tendiente a inducir a error a la autoridad judicial o administrativa, con el fin de obtener sentencia, resolución o acto administrativo contrario a la ley, se le impondrán de seis meses a seis años de prisión y de cincuenta a doscientos cincuenta días multa. Si el beneficio es de carácter económico, se impondrán las penas previstas para el delito de fraude.

Este delito se perseguirá por querella, salvo que la cuantía o monto exceda de cinco mil veces el salario mínimo general vigente en el Distrito Federal, al momento de realizarse el hecho.”

Aprobándose en lo general y en lo específico, con 46 votos a favor y cero en contra con cero abstenciones turnándose al Jefe de Gobierno del Distrito Federal para su Promulgación y Publicación, el Jefe de Gobierno devolvió con observaciones el proyecto, las cuales fueron discutidas y aprobadas en sesión extraordinaria el 3 de julio del 2002. Entrando en vigor el 12 de noviembre de 2002.

2



² Lo anterior puede confrontarse con los Diarios de Debates de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal del 30 de abril de 2002, 3 de julio de 2002.

CAPÍTULO II

EXPOSICIÓN DE LOS

ELEMENTOS Y CONSTANTES

DEL TIPO PENAL.

.....	11
2.1 Bien jurídico protegido.....	13
2.2 Conducta.....	19
2.3 Sujetos.....	27
2.4 Cosas.....	37
2.5 Resultado.....	40
2.6. Elementos objetivos del tipo.....	43
2.7. Elementos subjetivos del tipo.....	44
2.8. Elementos normativos del tipo.	47

2.- EXPOSICIÓN DE LOS ELEMENTOS Y CONSTANTES DEL TIPO PENAL.

A efecto de analizar los elementos y constantes del tipo penal, empezare por conceptuarlo, por lo que utilizando el método deductivo, partiré de la premisa mayor, es decir, de los conceptos jurídicos fundamentales, la mayoría de los autores coinciden en aceptar como conceptos jurídicos fundamentales y como fuente de ellos a la estructura lógico formal de la norma, es decir, la consideran un común denominador en todas y cada una de las ramas del Derecho.

Dicha estructura se integra por el Supuesto que se conceptúa como la descripción en abstracto que realiza el legislador de un hecho que de verificarse en el mundo fáctico, traerá una consecuencia de Derecho, el Hecho como la actualización de la hipótesis normativa descrita en abstracto por el legislador, y la Consecuencia que puede consistir en una sanción, un Derecho subjetivo o un deber jurídico.

Por lo que partiendo de la premisa de la estructura lógico formal de la norma como concepto jurídico fundamental se establece como género al Supuesto, siendo especie del mismo en el campo del Derecho Penal el tipo penal, el cual es un concepto de aplicación exclusiva en el campo del Derecho Penal, por lo que se establece como regla general que todos los tipos penales son Supuestos, pero no todos los Supuestos son tipos penales. Es así como esquematizo dentro de la estructura lógico formal de la norma al Tipo Penal, al Cuerpo del delito como el Hecho y la Pena, las Medidas de Seguridad o las Consecuencias Jurídicas para las Personas Morales como la consecuencia de Derecho.

“Una norma de derecho es una norma penal cuando su sanción asume carácter retributivo (la disminución de un bien jurídico del transgresor).”³

³ SOLER, Sebastián, *Derecho Penal Argentino*, ed. Tipográfica Editora Argentina Buenos Aires, Argentina, 1992, p.3.

Una vez determinando al tipo penal como un concepto jurídico de aplicación exclusiva en el campo del Derecho Penal y estableciendo como género de este al Supuesto de la estructura lógico formal de la norma diré que éste proviene etimológicamente del latín *typus* que significa modelo o ejemplo y lo defino como una descripción en abstracto que realiza el legislador de un hecho que de verificarse en el mundo fáctico, traerá una consecuencia de Derecho Penal (pena, medidas de seguridad o consecuencias jurídicas para las personas morales), es decir, de la misma forma en que he definido al Supuesto de la estructura lógico formal de la norma.

Sin embargo y toda vez que como lo he dicho se esta frente a un concepto jurídico de aplicación exclusiva en el campo del Derecho Penal, por lo que sería limitado no intentar definirlo, es decir, no agotar los elementos que engloba este concepto.

Por tal motivo cito algunas definiciones de notables juristas:

El maestro José Héctor Franco Mejía, afirma que tipo no es un término exclusivo del Derecho Penal, y que puede ser utilizada en cualquier rama del Derecho, ya que en sí consiste en una descripción letrística, que ya puede ser de conducta o de hechos, siendo la primera la relevante para el Derecho Penal, aunque no limitativamente. Para el Maestro Franco Mejía el tipo penal es la descripción letrística sancionada por la ley penal.

La maestra Irma Griselda Amuchategui define al tipo como: “la descripción legal de un delito, o bien, la abstracción plasmada en la ley de una figura delictiva⁴”.

Para el maestro Arturo González Quintanilla:

“Por tipo debemos captar: la descripción de comportamientos que de llevarse a cabo, serán acreedores de penalidad. (...). Para efectuar un

⁴ AMUCHATEGUI REQUENA, Irma. Derecho Penal, 3ª ed. OXFORD, México. 2005, pág. 61.

análisis completo de los tipos, es indispensable estudiarlos en relación a una estructura valedera para todos, por lo cual se deben de buscar las constantes que aparezcan en cada uno de ellos por igual, o sea, aquellos aspectos, situaciones o puntos básicos, ineludiblemente existentes en cualquier hipótesis o descriptiva delictual”⁵.

Por lo que como lo sostiene el maestro Arturo González Quintanilla, es indispensable estudiar al tipo desde una estructura que sea común a todos y cada uno de los tipos penales, por lo que es indispensable detectar cuales son las constantes que se encuentran presentes en el tipo penal, que son: el Bien Jurídico Protegido, la Conducta, los sujetos, las cosas y el resultado. También identificare los elementos que integran a las descriptivas penales siendo estos: Elementos objetivos del tipo, Elementos subjetivos del tipo, Elementos normativos del tipo. Por lo que en el presente Capítulo analizare en qué consisten cada uno de los elementos y constantes del tipo penal a efecto de dar las bases, para poderlo aplicar en el siguiente Capítulo, en concreto al tipo de Fraude Procesal.

El tipo penal es el presupuesto lógico del delito:

“Para Carrara, delito es la infracción de la ley del Estado promulgada para proteger la seguridad de los ciudadanos, resultante de un acto externo del hombre, positivo o negativo, moralmente imputable.”⁶

2.1 Bien jurídico protegido.

Para poder llegar a un concepto del “Bien Jurídico protegido”, me remitiré a las fuentes del Derecho, bajo la premisa de que la mayoría de los autores coinciden en afirmar que las fuentes del Derecho son: fuentes formales, materiales o históricas, y reales, entendiendo a las primeras como los procesos de creación de la norma

⁵ GONZÁLEZ QUINTANILLA, Arturo. *Derecho Penal Mexicano*, 7ª ed., PORRÚA, México, 2004, pág. 647.

⁶ ONECA, José, *Derecho Penal*, 2ª ed. Akal S.A. España, 1986, p. 153.

jurídica, por lo que en consecuencia en nuestro País son fuentes formales del Derecho la ley, la jurisprudencia y la costumbre, las fuentes materiales o históricas, se entienden como los medios objetivos en los cuales se contienen las normas jurídicas, como lo es el Corpus Iuris Civilis, las Doce Tablas, etcétera, y las fuentes reales, las cuales se conceptúan como la causa que hace necesaria la creación de la norma, es decir, son los acontecimientos del mundo fáctico los cuales son observados por el legislador, y hace necesario que tenga que regular dicho acontecimiento, un ejemplo de esto es que hace cien años no existían los avances en el campo de la computación, como existen ahora, por lo que hoy en día es importante que el legislador una vez que ha observado el fenómeno, tenga la necesidad de regularlo, ya que tendrá que adecuar algún tipo penal que sancione los fraudes electrónicos, o regule el acceso a determinados sitios no aptos para los menores.

Aunque muchos autores sostienen que la única fuente del Derecho Penal es la Ley, partiendo de la garantía de legalidad establecida en el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la cual se traduce en la máxima: “no hay crimen, ni pena, sin ley”. En lo personal considero que la ley no es una fuente, sino el resultado de un proceso, que es la fuente, ya que desde una visión meramente positivista, el Derecho (la ley), se encuentra aislada de cualquier otra cosa, es decir, no depende su existencia de nada más, idea con la que no me identifico, toda vez que el Derecho no se encuentra de manera estática, sino que por el contrario es cambiante, tan dinámico como la misma sociedad, por lo que de quedarnos con la idea notablemente positivista de que el Derecho Penal únicamente puede tener como fuente a la ley, nos dejaría sin entender porqué el Derecho Penal ha regulado aspectos que antes no regulaba y deja de regular otros que antes sí regulaba, y esto es comprobable, ya que de nuestro Código Penal del Distrito Federal han desaparecido figuras que simplemente ya no van con la realidad existente como lo era el delito de abigeato, ya que en la actualidad, sería innecesario regularlo, debido al cambio de las condiciones sociales de nuestra ciudad en donde difícilmente se encuentra ganado, y a su vez se han regulado nuevas situaciones que hace años

no eran reguladas, como lo es la manipulación genética, y en otros casos ha puesto mayor énfasis al sancionarlos con mayor severidad, como el secuestro, el robo de auto partes, etc. Por lo que sostengo que el legislador, tiene la obligación de que una vez que ha observado la realidad, regularla, y en el campo del Derecho Penal, si esa realidad representa un acto reprochable por la sociedad, imponerle una pena.

Es precisamente por lo anterior que nuestro Código Penal del Distrito Federal, protege bienes que el legislador ha considerado indispensable preservar y proteger, como la vida, la salud, la libertad, el patrimonio, etc., por lo que esos bienes que el legislador protege fungen como la sustancia de las descriptivas penales, es decir, son la parte toral del tipo penal, ya que no se podría entender la existencia de un tipo penal, sin que tuviera como objeto proteger los bienes que el legislador preserva al imponer una sanción a las conductas que los vulneren. Es así como se deduce la máxima que no existe un tipo penal sin un bien jurídico protegido. Cabe aclarar que algunos autores también llaman al bien jurídico protegido como objeto jurídico o bien jurídico tutelado.

Para el maestro González Quintanilla el bien jurídico es: “todo interés vital del individuo o de la colectividad protegido por la ley.”⁷

El maestro Eduardo López Betancourt se refiere al objeto jurídico como: “el bien o el derecho que es protegido por las leyes penales.”⁸

“Concepto de bien jurídico protegido.- la necesidad de la convivencia condensada en la idea freudiana de que la sociedad frustra, pero satisface al mismo tiempo las necesidades humanas individuales, supone la protección de esa convivencia, pues solo en ella pueda la persona individual autorrealizarse. La autorrealización humana necesita de unos presupuestos existenciales que, en tanto son de utilidad para el hombre, se denominan bienes y, concretamente, en tanto son objeto de protección

⁷ Ibidem, pág. 648.

⁸ LÓPEZ BETANCOURT, Eduardo. *Teoría del Delito*, 11ª ed., PORRÚA, México, 2003, pág. 58.

por el derecho, bienes jurídicos. Así pues bienes jurídicos son aquellos presupuestos que la persona necesita para la autorrealización en la vida social.”⁹

Nuestra legislación penal vigente en el Distrito Federal es omisa al dar una definición o concepto del bien jurídico protegido, objeto jurídico, aunque en algunos preceptos se refiere a ellos, como es el caso de la fracción III del artículo 29 del Código Penal del Distrito Federal que establece como causa de exclusión del delito el consentimiento del titular del bien jurídico afectado:

“Artículo 29.- El delito se excluye cuando (...):

(...) III.) Se actúe con el consentimiento del titular del bien jurídico afectado, o del legitimado legalmente para otorgarlo, siempre y cuando se cumplan los siguientes requisitos:

- a) Que se trate de un bien jurídico disponible;
- b) Que el titular del bien jurídico, o quien esté legitimado para consentir, tenga la capacidad jurídica para disponer libremente del bien; y
- c) Que el consentimiento sea expreso o tácito y no medie algún vicio del consentimiento.

Se presume que hay consentimiento, cuando el hecho se realiza en circunstancias tales que permitan suponer fundadamente que, de haberse consultado al titular del bien o a quien esté legitimado para consentir, estos hubiesen otorgado el consentimiento. (...)”¹⁰

Por lo que deja a la interpretación, lo que se entiende por bien jurídico, y qué bienes jurídicos son disponibles. Siendo violatorio en todo caso del principio de legalidad.

⁹ MUÑOZ, Francisco, *Introducción al Derecho Penal*, 2ª ed. Casa Editorial B de F, Argentina, 2003, pp. 90-91.

¹⁰ Código Penal para el Distrito Federal.

En la práctica se determina en la mayoría de los casos cual es el bien jurídico protegido únicamente observando el título en el que se encuentra comprendido el tipo penal objeto de estudio, es decir, si se quiere saber cuál es el bien jurídico protegido del homicidio se observa que se encuentra comprendido en el Título Primero del Libro Segundo, de nuestro Código Penal del Distrito Federal el cual se denomina “DELITOS CONTRA LA VIDA Y LA INTEGRIDAD CORPORAL”, por lo que se deduce que el objeto jurídico del tipo penal que sanciona el homicidio es la Vida, sin embargo si se pretende determinar el bien jurídico protegido del tipo penal que sanciona la operación con recursos de procedencia ilícita, que se encuentra comprendido en el artículo 250 del Código Penal del Distrito Federal y que se encuentra ubicado en el Título Décimo Sexto del Libro Segundo de nuestro Código Penal del Distrito Federal, y es denominado como “OPERACIONES CON RECURSOS DE PROCEDENCIA ILÍCITA” en este caso no se podrá llevar a cabo la misma deducción que en el caso del homicidio, toda vez que este título no utiliza el criterio de la clasificación de los delitos en base al bien jurídico tutelado, sino que sale de dicho criterio y utiliza como base de clasificación al objeto material del delito y en este caso tendré que analizar las hipótesis que plantea este tipo a efecto de determinar el o los bienes jurídicos tutelados; al respecto el maestro Fernando Castellanos Tena se refiere:

“El legislador de 1931 pretendió, en términos generales, hacer la división de los delitos teniendo en cuenta el bien o el interés protegido. Con acierto sostiene Fernández Doblado que el Código Penal vigente, a veces se aparta del criterio científico de clasificación de los delitos por orden al bien o interés jurídico tutelado (...).”¹¹

Por lo que en síntesis diré que el legislador, en base a la realidad y su ideología, establece cuales son los bienes, derechos o intereses de la colectividad y del individuo que debe proteger y en consecuencia sancionar en la ley penal, por lo que

¹¹ CASTELLANOS TENA, Fernando, *Lineamientos Elementales de Derecho Penal*, Ed. Porrúa, México, 2001, Pág. 146.

el bien jurídico protegido no es otra cosa sino los bienes, derechos o intereses de la colectividad y del individuo que son protegidos por las leyes penales.

“Una vez definido el bien jurídico protegido podemos enlistar algunas de las características y funciones que debe cumplir en el campo del Derecho Penal:

- a) Son un importante instrumento para la interpretación de la Ley Penal: esto toda vez que como hemos dicho la protección del bien jurídico tutelado es el fin último del tipo penal, además de que como hemos establecido no existe tipo penal sin bien jurídico protegido.
- b) Ser un criterio para la clasificación de los delitos: el objeto jurídico, tradicionalmente determina la clasificación del delito, dando lugar a la clasificación legal, es decir, nuestro Código Penal del Distrito Federal, con las excepciones que mencionamos retoma la clasificación por el criterio del bien jurídico tutelado.
- c) Podemos distinguir tres clases de bienes jurídicos: los de la colectividad como son: la falsificación de moneda, la traición a la patria, Terrorismo, etc. Los del particular verbigracia: la vida, la libertad, el patrimonio, etc. Y los altamente personales como la integridad corporal, el honor, etc.
- d) Debemos distinguir entre el objeto jurídico y el objeto material: cuando analicemos el concepto de cosas estableceremos la distinción.
- e) Todo delito lesiona un bien jurídico: la actualización del tipo penal sea cualquiera que fuere conlleva a la lesión de un bien jurídico tutelado (cuando analicemos el resultado haremos la distinción entre ponerlo en peligro o dañarlo).
- f) Existen categorías entre los bienes jurídicos protegidos: sin duda no es lo mismo la vida que el patrimonio. El legislador ha jerarquizado a los bienes jurídicos al imponer sanciones distintas a los tipos penales. ”¹²

¹² cfr. GONZÁLEZ QUINTANILLA, Arturo, Op.Cit., págs. 311 y 649.

Por último mencionaré que el legislador ha condicionado la existencia del delito a la lesión o puesta en peligro del bien jurídico tutelado, tal y como se observa en el artículo 4 del Código Penal Vigente en el Distrito Federal:

“Artículo 4.- Para que la acción o la omisión sean consideradas delictivas, se requiere que lesionen o pongan en peligro, sin causa justa, al bien jurídico tutelado por la ley penal.”¹³

2.2 Conducta.

Existe una diversidad de formas en que los juristas se refieren a este elemento del tipo penal, las denominaciones más destacadas sin incluir “Conducta” son: acción, hecho y acto. El Doctor Miguel Ángel Granados Atlaco analiza el tema citando a diversos juristas:

“(…) existen en la doctrina iuspenalista diversas denominaciones para la conducta.

El maestro PORTE PETIT se adhiere a considerar a este elemento como conducta o hecho, dándole al mismo tiempo un primer lugar dentro de la prelación lógica del delito; los delitos se constituyen, según este autor, por una conducta o un hecho humano.

Por otra parte JIMÉNEZ DE ASÚA se inclina por la expresión acto arguyendo que dicho vocablo designa todo acontecimiento, ya sea que provenga del hombre o se presente por caso fortuito.

A su vez, el jurista español CUELLO CALÓN prefiere la expresión Acción, considerándola en un sentido amplio y consistente en la conducta exterior encaminada a la producción de un resultado.

¹³ Código Penal para el Distrito Federal.

Al respecto, PAVÓN VASCONCELOS considera que lo adecuado es hablar de hecho, aunque no por ello se debe soslayar a la conducta, sobre todo en aquellos delitos en los que no existe un resultado material que el tiempo exija su concreción, de aquí que el maestro citado asevere que estima acertada la opinión de Porte Petit. (...)”¹⁴

Sin embargo considero que el término adecuado es el de “Conducta”, para lo cual cito al maestro Castellanos Tena: “Dentro del concepto conducta pueden comprenderse la acción y la omisión; es decir el hacer positivo y el negativo; el actuar y el abstenerse de obrar.”¹⁵, nuestro Código Penal del Distrito Federal en su artículo 15 dispone lo siguiente:

“Artículo 15.- El delito sólo puede ser realizado por acción o por omisión.”¹⁶

Por lo que tal y como lo sostiene el maestro Castellanos Tena el concepto forzosamente debe de abarcar tanto el aspecto positivo (actuar), como el aspecto negativo (dejar de actuar o actuar contra una prohibición).

La maestra Irma Griselda Amuchategui define la Conducta como: “un comportamiento humano voluntario (a veces una conducta humana involuntaria puede tener, ante el Derecho Penal, responsabilidad culposa o preterintencional), activo (acción o hacer positivo) o negativo (inactividad o no hacer), que produce un resultado.”¹⁷

De las anteriores definiciones y del artículo 15 del Código Penal para el Distrito Federal se desprende que la conducta se divide en: Acción (positivo) y Omisión (negativo).

¹⁴ GRANADOS, ATLACO, Miguel Ángel, *Derecho Penal Electoral Mexicano*, Editorial Porrúa, México, 2005. Pág. 160.

¹⁵ CASTELLANOS TENA, Fernando, Op. Cit., Pág. 147.

¹⁶ Código Penal para el Distrito Federal

¹⁷ AMUCHATEGUI REQUENA, Irma. Op. Cit., pág. 53.

I.- **Acción.**- Por lo que al referirse a la Acción, como la realización de uno o varios movimientos corporales, para la obtención de un resultado, para el Maestro Castellanos Tena la Acción es: “todo hecho humano voluntario, todo movimiento voluntario del organismo humano capaz de modificar el mundo exterior o de poner en peligro dicha modificación.”¹⁸

Se identifican como elementos de la acción:

“Voluntad. Es el querer por parte del sujeto activo, cometer el delito. Es propiamente la intención.

Actividad. Consiste en el hacer o actuar. Es el hecho positivo o movimiento corporal humano encaminado a producir el ilícito.

Resultado. Es la consecuencia de la conducta; el fin deseado por el agente y previsto por la ley penal.

Nexo de causalidad. Es el ligamen o nexo que une la conducta con el resultado el cual debe ser material. Dicho nexo es el que une la causa con el efecto, sin el cual este último no puede atribuirse a la causa.”¹⁹

II. La omisión.- implica la inactividad del sujeto, es decir, cuando la ley establece la obligación de un actuar y el sujeto no lo hace o lo deja de hacer, es decir, es el sentido negativo de la conducta, la omisión a su vez se subdivide en dos: la omisión simple y la comisión por omisión, el maestro Miguel Ángel Granados Atlaco los define de la siguiente manera:

¹⁸ CASTELLANOS TENA, Fernando *Op. Cit.* Pág. 152.

¹⁹ AMUCHATEGUI REQUENA, Op. Cit., pág. 54.

“Omisión simple (...) los delitos que se incluyen en este tipo de conducta, colman sus tipos a través de la falta de actividad, la cual es ordenada jurídicamente, ello sin que se requiera de la presencia de un resultado material. (...)”

La comisión por omisión u omisión impropia: esta encuentra su esencia en la transgresión de una norma prohibitiva o mandato de abstenerse en virtud de la inactividad voluntaria del sujeto, actitud que produce un resultado material o típico. La comisión por omisión se diferencia también de la omisión simple en que no se sanciona por la omisión en si, sino por el resultado producida por ella, constituyendo con ello la violación de la norma prohibitiva.”²⁰

El Código Penal Para el Distrito Federal establece en que casos es sancionable la Comisión por Omisión u Omisión impropia:

“ARTÍCULO 16 En los delitos de resultado material será atribuible el resultado típico producido a quien omita impedirlo, si éste tenía el deber jurídico de evitarlo, si:

- I. Es garante del bien jurídico;
- II. De acuerdo con las circunstancias podía evitarlo; y
- III. Su inactividad es, en su eficacia, equivalente a la actividad prohibida en el tipo.

Es garante del bien jurídico el que:

- a). Aceptó efectivamente su custodia;
- b). Voluntariamente formaba parte de una comunidad que afronta peligros de la naturaleza;
- c). Con una actividad precedente, culposa o fortuita, generó el peligro para el bien jurídico; o
- d). Se halla en una efectiva y concreta posición de custodia de la vida, la salud o integridad corporal de algún miembro de su familia o de su pupilo.”²¹

²⁰ GRANADOS, ATLACO, Miguel Ángel, Op. Cit., Pág. 162.

²¹ Código Penal para el Distrito Federal.

“Ciertos ejemplos se han hecho clásicos por su reiterada consagración en los textos de tratadistas, aun sustentadores de principios opuestos, como el de la madre que deja de amamantar a su hijo con el fin de matarlo.”²²

Por lo que en conclusión se identifica a la conducta en los tipos penales, como el verbo (núcleo), que determina la conducta reprochable por el Derecho Penal, haciendo la aclaración que en una misma descriptiva se puede encontrar uno o varios verbos, por ejemplo:

El artículo 287 del Código Penal del Distrito Federal únicamente contiene un verbo (conducta), la cual es fácilmente identificable:

“Artículo 287. Al que **ultraje** a una autoridad en el ejercicio de sus funciones o con motivo de ellas, se le impondrá de noventa a ciento ochenta días de semilibertad.”²³

Por lo tanto, la conducta establecida en el numeral anterior es el verbo “Ultrajar”.

Mientras que en el artículo 250 del Código Penal se enlistan más de una conducta siendo cualquiera de ellas suficiente para colmar la hipótesis normativa:

“Artículo 250. Al que por sí o por interpósita persona **adquiera, enajene, administre, custodie, cambie, deposite, dé en garantía, invierta, transporte o transfiera** recursos, derechos o bienes de cualquier naturaleza que procedan o representen el producto de una actividad ilícita, con alguno de los siguientes propósitos: ocultar, encubrir o impedir conocer el origen, localización, destino o propiedad de dichos recursos, derechos o bienes, o alentar alguna actividad ilícita, se le impondrán de cinco a quince años de prisión y de mil a cinco mil días multa.

Las penas previstas en el párrafo anterior serán aumentadas en una mitad cuando el delito se cometa por servidores públicos; además, se impondrá a dichos

²² DAMIANOVICH, Laura, *Derecho Penal*, ed. Argentina, Argentina 1972, p. 167.

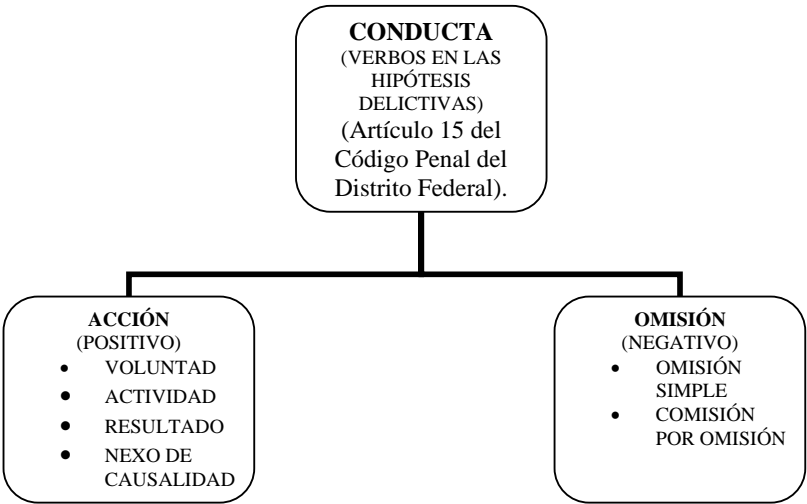
²³ Código Penal para el Distrito Federal.

servidores públicos, destitución e inhabilitación para desempeñar empleo, cargo o comisión hasta por un tiempo igual al de la pena de prisión impuesta.”²⁴

Por lo que en el artículo anterior se identifican como conducta (verbos) ocho posibles hipótesis:

Adquiera, enajene, administre, custodie, cambie, deposite, dé en garantía, invierta, transporte o transfiera.

En el siguiente cuadro se esquematiza la división de la “Conducta”:



En la fracción primera del artículo 29 del Código Penal del Distrito Federal se establece como causa de exclusión del delito la ausencia de la voluntad del sujeto:

“ARTÍCULO 29.- El delito se excluye cuando:

²⁴ ídem

I. La actividad o la inactividad se realice sin intervención de la voluntad del agente;”²⁵

A este respecto tradicionalmente se sostiene que el elemento negativo de la conducta es la ausencia de la voluntad del sujeto activo del delito, por lo que en consecuencia se han establecido las siguientes situaciones en las cuales habrá ausencia de conducta:

a). Vis Absoluta.- Implica que el sujeto ha sufrido el ejercicio de una fuerza humana exterior irresistible, en la aparente conducta delictiva. Esto significa que el sujeto únicamente fue “utilizado” como medio para la comisión del delito y por lo tanto se encuentra libre de cualquier responsabilidad penal, el ejemplo clásico de esta situación es quien presiona la mano del sujeto en el gatillo y priva de la vida a otro.

En este caso sin duda debe existir una sanción pero no será para el sujeto víctima del ejercicio de la fuerza exterior irresistible, sino en todo caso la sanción será para el que ejerció la fuerza, tal y como lo establece el artículo 22 del Código Penal del Distrito Federal en su fracción tercera (autoría mediata):

“Artículo 22. Son responsables del delito, quienes:

I. Lo realicen por sí;

II. Lo realicen conjuntamente con otro u otros autores;

III. Lo lleven a cabo sirviéndose de otro como instrumento;(...)”²⁶

b). Vis Maior.- También implica el ejercicio de una fuerza exterior irresistible, sólo que en este caso la fuerza proviene de la naturaleza. Como podría presentarse el caso de un tornado en el cual la persona que tiene en la mano un lápiz involuntariamente y producto del impulso del tornado lesiona con el lápiz a otro, o

²⁵ ídem

²⁶ ídem

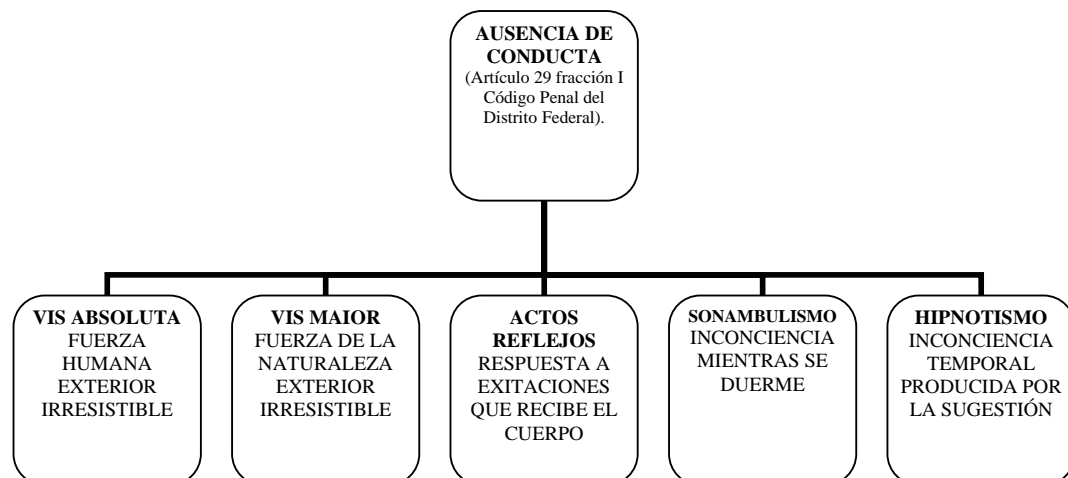
en el caso de la omisión, en el caso de un huracán, una persona no puede alimentar a su hijo, debido a que no hay forma ni medios para conseguir alimentos y el niño muere.

c). Actos Reflejos.- Son una respuesta a excitaciones que recibe el cuerpo humano, como ejemplo, en un salón de clases un estudiante con su bolígrafo en la mano escucha un trueno y al exaltarse se lo entierra al compañero de enfrente.

d). Sonambulismo.- Se hace referencia a la inconciencia que presentan las personas mientras duermen, y por lo tanto no son conscientes de las acciones que realizan durante ese periodo, un ejemplo es el caso de los cónyuges que mientras duermen uno inconcientemente golpea al otro ocasionándole lesiones.

e). Hipnosis.- Es una forma de inconciencia temporal producida por la sugestión, a este respecto si el hipnotizado cometiere una conducta que constituya delito, producto de la influencia del hipnotizador, nos encontraríamos con que el primero es solo un mero instrumento y el segundo sería autor mediato del delito, colocándose en la hipótesis de la fracción tercera del artículo 22 del Código Penal para el Distrito Federal.

En el siguiente esquema se representa el aspecto negativo de la Conducta:



2.3 Sujetos.

El centro de imputación del Derecho, es la persona, término dado por los romanos y que fue tomado del teatro romano, debido a la utilización de las máscaras, ya que precisamente el término persona quiere decir máscara, esto debido a que los romanos sostenían que los seres humanos a lo largo de la vida interpretamos distintos papeles, por ejemplo una persona que acude a la escuela, en ella toma el papel de alumno, al llegar a su casa, toma el papel de hijo, de padre de familia, de hermano, etc., si trabaja tomará el papel de empleado. Es así como el Derecho también nos considera en la interpretación de papeles, y es así como el Código Civil nos puede colocar en el papel de vendedores y compradores, arrendadores y arrendatarios, comodantes y comodatarios, etc. La Ley Federal del Trabajo nos coloca como patrones o trabajadores, el Código de Comercio como endosatario, endosante, tenedor, depositante, depositario, etc. En el Derecho Penal dentro de las hipótesis normativas, también otorga a las personas una calidad.

Es así como en el Derecho Penal nos encontramos con el sujeto activo o sujeto pasivo del delito.

I).- El sujeto activo, es la persona física que comete el delito, para el maestro Eduardo López Betancourt, el sujeto activo del Delito “es el hombre cuando realiza la conducta o el hecho típico, antijurídico culpable y punible, o bien, cuando participa en la comisión del delito.”²⁷

Considero esta definición acertada, toda vez que no se limita a establecer como Sujeto Activo del Delito al que realiza la conducta delictiva, ya que el Código Penal, reconoce otras formas de participación, como el encubridor.

²⁷ Cfr. LÓPEZ BETANCOURT, Eduardo. Op. Cit. págs. 34 y 35.

Es importante hacer hincapié en el hecho de que únicamente el ser humano puede ser sujeto activo del delito, toda vez que ha sido superada la práctica de castigar a los animales, al ser considerados sujetos activos del delito, una persona puede ser sancionada, por utilizarlos como medio para la comisión del delito, esto se desprende, de la premisa de que exclusivamente los seres racionales tienen la capacidad de delinquir, por lo que resultaría ilógico considerar a un animal como sujeto activo del delito, ya que no es un ser racional. A este respecto el maestro Castellanos Tena sostiene: "Sólo la conducta humana tiene relevancia para el Derecho Penal. El acto y la omisión deben corresponder al hombre, por que únicamente es posible sujeto activo de las infracciones penales; es el único ser capaz de voluntad. Este principio, indiscutible en nuestro tiempo, carecía de validez en otras épocas. Según enseña la historia, antaño se consideró a los animales como delincuentes, distinguiéndose tres periodos o etapas: fetichismo (se humanizaba a los animales equiparándolos a las personas); simbolismo (se entendía que los animales no delinquían, pero se les castigaba para impresionar; y, por ultimo, solamente se sanciona al propietario del animal dañoso."²⁸

Al hacer referencia a que el sujeto activo del delito es una persona física, resulta ilógico pensar que una ficción jurídica pueda cometer un injusto, ya que podría parecer que una institución comete un delito, pero siempre será cuando menos una persona física la que ejecute el delito, ya que como ha sido expuesto al analizar el elemento de la Conducta, para la existencia de esta es necesario la presencia de la voluntad del agente, en este caso la persona moral carece de voluntad propia, ya que inclusive, todos sus actos son realizados a través de sus órganos de representación, que son personas físicas.

Lo anterior encuentra sustento legal en lo establecido por el artículo 27 en relación con el artículo 32 del Código Penal del Distrito Federal los cuales establecen lo siguiente:

²⁸ CASTELLANOS TENA, Fernando, Op. Cit. Pág. 149.

“ARTÍCULO 27 Para los efectos de este Código, **sólo pueden ser penalmente responsables las personas físicas**. Sin embargo, cuando **un miembro o representante de una persona moral**, con excepción de las instituciones públicas del Distrito Federal, **cometa algún delito** con los medios que para tal objeto la misma persona moral le proporcione, de modo que el delito resulte cometido a su nombre, bajo el amparo o en beneficio de aquélla, el Juzgador impondrá en la sentencia, previo el procedimiento correspondiente y con intervención del representante legal, las consecuencias jurídicas accesorias previstas en los artículos 68 y 69 de este Código para dichas personas, independientemente de la responsabilidad en que hubieren incurrido las personas físicas por los delitos cometidos.”²⁹

“ARTÍCULO 32 Las consecuencias jurídicas accesorias aplicables a las personas morales que se encuentren en los supuestos previstos en el artículo 27 de este Código, son:

- I. Suspensión;
- II. Disolución;
- III. Prohibición de realizar determinadas operaciones;
- IV. Remoción; y
- V. Intervención.”³⁰

Es así cómo de la interpretación del artículo 27 citado, se desprende que el delito lo comete **un miembro o representante de una persona moral**, es decir, siempre se trata de una persona física y como lo dispone el artículo 32 del Código sustantivo Penal del Distrito Federal, en relación con el 27 del mismo Ordenamiento, si el delito se cometió a nombre, con recursos o en beneficio de la persona moral, el juez podrá imponer consecuencias jurídicas a la persona moral, quien por exclusión del

²⁹ Código Penal para el Distrito Federal

³⁰ Ídem

artículo 27 no pueden ser responsables penalmente. El maestro Franco Mejía afirma que en el representante legal, siempre recaerá la responsabilidad final penal.

De la definición del maestro López Betancourt, se desprende que es sujeto activo del delito, los que realicen la conducta o participen en ella, a este respecto nuestro Código Penal del Distrito Federal en el artículo 22, establece quiénes son los responsables del delito y en consecuencia quiénes son los sujetos activos.

“ARTÍCULO 22 Son responsables del delito, quienes:

- I. Lo realicen por sí;
- II. Lo realicen conjuntamente con otro u otros autores;
- III. Lo lleven a cabo sirviéndose de otro como instrumento;
- IV. Determinen dolosamente al autor a cometerlo;
- V. Dolosamente presten ayuda o auxilio al autor para su comisión; y
- VI. Con posterioridad a su ejecución auxilien, al autor en cumplimiento de una promesa anterior al delito.

Quienes únicamente intervengan en la planeación o preparación del delito, así como quienes determinen a otro o le presten ayuda o auxilio, sólo responderán si el hecho antijurídico del autor alcanza al menos el grado de tentativa del delito que se quiso cometer. La instigación y la complicidad a que se refieren las fracciones IV y V, respectivamente, sólo son admisibles en los delitos dolosos. Para las hipótesis previstas en las fracciones V y VI se impondrá la punibilidad dispuesta en el artículo 81 de este Código.”³¹

De la lectura del artículo anterior se desprende que el legislador ha considerado como sujetos activos del delito:

³¹ Ídem

- a) Al autor material.- Que es quien físicamente realiza la conducta delictiva, es decir el que ejecuta directamente el delito. Por ejemplo quien aprieta el gatillo de una pistola y priva de la vida a otro.
- b) Coautor.- Es aquél que en unión de otros autores responsables actualiza la hipótesis normativa penal. En este caso todos son igualmente responsables. No es necesario que el coautor agote en su totalidad los elementos típicos del delito, puede darse el caso de que se distribuyan las funciones para cometer el injusto, como sería el caso del secuestro, donde una persona investigue a la víctima, otra la prive de la libertad y otro cobre el rescate.
- c) Autor Mediato.- Que es aquél que no realiza directamente la conducta delictiva, sino que utiliza a otro como instrumento para cometerla, puede ser que se valga de un inimputable, como un niño, al cual se le ordena que en su escuela venda drogas.
- d) Autor Intelectual.- Es aquel que provoca o induce a otro a la comisión del delito, este último es al autor material, es decir, quien lo realiza por sí mismo, volviendo al ejemplo del homicidio el autor material es el que aprieta el gatillo y priva de la vida a otro, pero el que lo indujo a hacerlo es el autor intelectual.
- e) Cómplice.- Puede participar moralmente, instruyéndolo en la realización del delito, u otorgarle los medios materiales para la realización del injusto, como darle la pistola para el homicidio, realiza actividades secundarias.
- f) Encubridor.- Es quien con conocimiento del delito cometido, al haber hecho una promesa anterior, lo oculta, u oculta los objetos del delito, es decir auxilia al autor del delito, como sería el caso del propietario de un terreno que ha prometido que una vez que un sujeto prive de la vida a otro le permitirá enterrarlo en su terreno.

En principio cualquier persona física puede ser sujeto activo del delito, pero en algunos casos la ley exige una calidad al sujeto activo del delito, como es el caso del delito de tráfico de influencia previsto en el artículo 271 del Código Penal del Distrito Federal:

“ARTÍCULO 271.- Al **servidor público** que por sí o por interpósita persona, promueva o gestione la tramitación de negocios o resoluciones públicas ajenas a las responsabilidades inherentes a su empleo, cargo o comisión, se le impondrán de dos a seis años de prisión y de cien a quinientos días multa.

Si la conducta anterior produce un beneficio económico, la sanción se aumentará en una mitad.”³²

En este caso la calidad exigida por el legislador para el sujeto activo del delito es la de Servidor Público, por lo tanto, para la aplicación de esta hipótesis, será necesario que se determine qué es lo que entiende el legislador por servidor público, por lo que en el mismo ordenamiento se determina el concepto de Servidor Público en el artículo 256:

“ARTÍCULO 256. Para los efectos de este Código, es servidor público del Distrito Federal toda persona que desempeñe un empleo, cargo o comisión de cualquier naturaleza en la Administración Pública del Distrito Federal, en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal y en los órganos que ejercen la función judicial del fuero común en el Distrito Federal.”³³

En otros supuestos normativos del Código Penal del Distrito Federal, es necesario recurrir a otros Ordenamientos a efecto de poder establecer el sujeto activo del delito, toda vez que no son determinados por el Código Sustantivo Penal como es el caso del artículo 200 del Código Penal del Distrito Federal, en donde en apariencia

³² Ídem

³³ Ídem

no se requiere calidad del sujeto activo, pero que de la lectura del artículo se desprende que al hacer referencia al sujeto pasivo como cónyuge, concubina o concubinario, evidentemente se deduce que el sujeto activo es quien guarda la misma relación en sentido contrario con el pasivo, por lo que para determinar que se entiende por cónyuge, concubina o concubinario, para efectos penales, es indispensable recurrir al Código Civil.

El sujeto activo del delito, puede dar lugar a una clasificación del delito en: unisubjetivo y plurisubjetivo, dependiendo de cuantos sujetos activos se requieran según el tipo penal, para la comisión del delito.

II.- Sujeto pasivo.-

Con anterioridad hice referencia a que el legislador, ha dispuesto como condicionante de la existencia del delito, que se lesione o ponga en peligro el bien jurídico tutelado, por lo que una vez determinado que el sujeto activo es quien realiza o participa en la comisión del delito, también se debe entender que es la persona que lesiona o pone en peligro el bien jurídico tutelado, por lo que el sujeto pasivo se identifica como el titular del bien jurídico protegido que se lesiona o se pone en peligro, con la comisión del delito. Para el Maestro Eduardo López Betancourt “el sujeto pasivo en la perpetración de un delito es quien sufre directamente la acción, es sobre quien recaen todos los actos materiales utilizados en la realización del ilícito, es el titular del derecho dañado o puesto en peligro.”³⁴

“Sujeto pasivo o víctima del delito es, en sentido amplio, la sociedad, por que todo delito importa un atentado a sus condiciones normales de existencia; y, en sentido propio, lo es el titular del bien jurídico lesionado o puesto en peligro por la acción delictiva.”³⁵

³⁴ LÓPEZ BETANCOURT, Eduardo. *Op.Cit.* 52 y 53.

³⁵ LABATUT, Gustavo, *Derecho Penal*, 9ª ed., Editorial Jurídica de Chile, Chile, 1992, p. 159.

A este respecto es oportuno hacer la aclaración que no siempre es la misma persona el sujeto pasivo de la conducta y del delito; la maestra Irma Griselda Amuchategui Requena realiza la distinción de la siguiente forma:

“DE LA CONDUCTA. Es la persona que de manera directa resiente la acción por parte del sujeto activo, pero la afectación en sentido estricto la recibe el titular del bien jurídico protegido.

DEL DELITO. Es el titular del bien jurídico tutelado que resulta afectado”³⁶

Esta distinción se verifica cuando a una persona se le arrienda un automóvil y resulta que cuando él goza de la tenencia del mismo, se lo roban, en consecuencia el arrendador será la víctima (sujeto pasivo del delito) y el arrendatario sólo será el sujeto pasivo de la conducta.

También se identifica al ofendido, que es quien indirectamente resiente el delito, como en el caso de los familiares de una persona víctima de homicidio.

Tratándose del Sujeto Pasivo, se afirma que las personas colectivas (morales), a diferencia de lo que sucede en el caso del sujeto activo, sí pueden ser sujetos pasivos del delito, ya sean personas del Derecho Público o del Derecho Privado, como es el caso de los delitos contra la seguridad de las instituciones del Distrito Federal, en el caso de las de Derecho Público o en el caso de las de Derecho Privado podrían ser víctimas (sujetos pasivos) del delito de robo, de fraude, etc.

También existe entre los autores la discusión respecto de si el producto de la concepción, es decir, el no nacido puede ser sujeto pasivo del delito, como lo sería en el caso del aborto, mi postura es que desde la concepción el sujeto es titular de

³⁶ Cfr. AMUCHATEGUI REQUENA, Irma. *Op. Cit.* pág. 38.

derechos y sobre todo el de la vida, por lo tanto es titular del bien jurídico protegido de la vida.

Otra discusión es respecto de si los cadáveres pueden ser sujetos pasivos del delito, a este respecto mi opinión es que utilizando el mismo criterio que para el no nacido, el cadáver carece de vida a diferencia del concebido, por lo que exclusivamente es titular de derechos el ser humano vivo, y sólo puede ser considerado como sujeto pasivo, en el delito de homicidio, donde fue privado de la vida que es su bien jurídico tutelado, cosa que no sucede cuando se infringen normas que tutelan el respeto a los restos humanos, no se puede concebir como sujeto pasivo del delito a un cadáver, ya que aunque podría presentarse la hipótesis de un individuo que sustrae bienes que pertenecieron a una persona que ya falleció, el sujeto pasivo del delito no sería la persona fallecida, sino sus herederos, ya que como lo dispone nuestro Código Sustantivo Civil, el efecto de la declaración de herederos es retroactivo hasta la muerte del de cujus.

No debe ser confundido el sujeto pasivo del delito, con el del sujeto pasivo del proceso penal, toda vez que el Sujeto Pasivo del Proceso Penal, es la persona probablemente responsable de la comisión del delito, y que al conformarse el triángulo procesal el Ministerio Público será el sujeto activo del proceso y el pasivo el probable responsable, por lo que en todo caso el sujeto activo del delito, en el proceso penal será el sujeto pasivo del proceso.

Al igual que en el caso del sujeto Activo del Delito, en algunos casos la descripción típica, también requiere del sujeto pasivo del delito cierta calidad o características para poder serlo, como es el caso del homicidio en razón del parentesco, en el artículo 125 del Código Penal del Distrito Federal:

“ARTÍCULO 125. Al que prive de la vida a su ascendiente o descendiente consanguíneo en línea recta, hermano, adoptante o adoptado, cónyuge, concubina

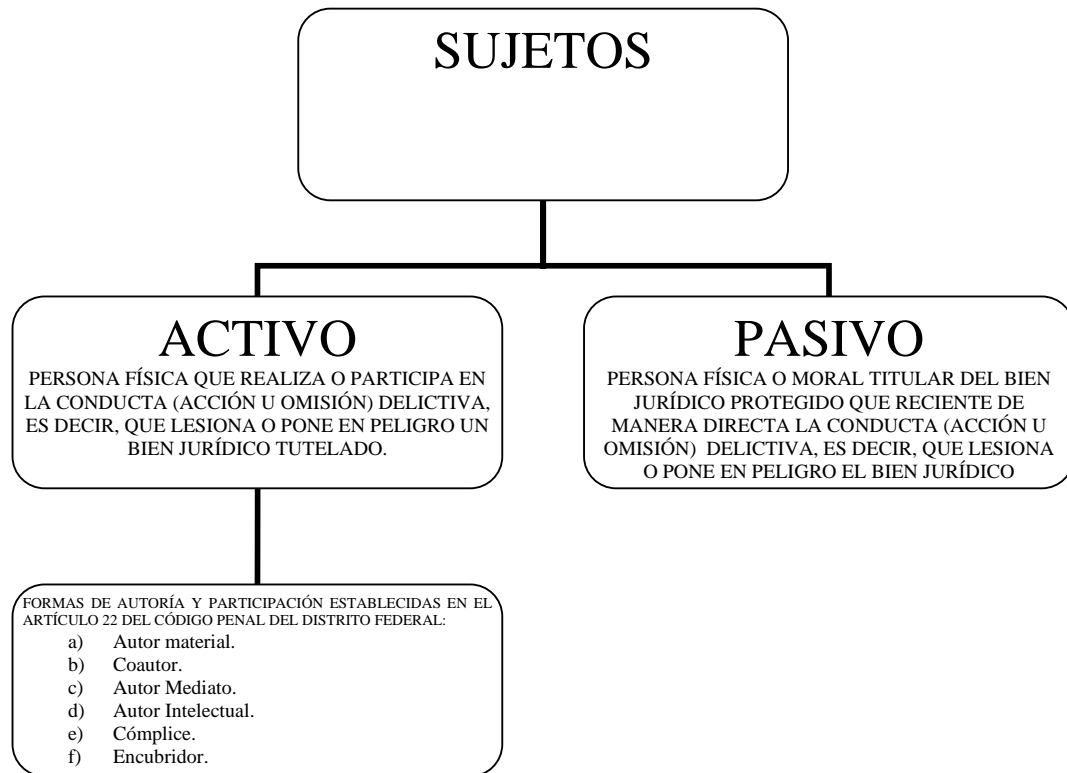
o concubinario u otra relación de pareja permanente, con conocimiento de esa relación, se le impondrán prisión de diez a treinta años y pérdida de los derechos que tenga con respecto a la víctima, incluidos los de carácter sucesorio. Si faltare el conocimiento de la relación, se estará a la punibilidad prevista para el homicidio simple.

Si en la comisión de este delito concurre alguna circunstancia agravante de las previstas en el artículo 138 de este Código, se impondrán las penas del homicidio calificado. Si concurre alguna atenuante se impondrán las penas que correspondan según la modalidad.”³⁷

En el párrafo anterior se observa que para ser sujeto pasivo del delito se requiere tener una de las siguientes calidades en razón con el sujeto activo del delito: ascendiente, descendiente consanguíneo en línea recta, hermano, adoptante, adoptado, cónyuge, concubina, concubinario o tener una relación de pareja permanente.

Por lo que en conclusión el Sujeto Pasivo del Delito es la persona física o moral (del Derecho Público o Privado) titular del bien jurídico protegido que es lesionado o puesto en peligro por el sujeto activo del delito.

³⁷ Código Penal para el Distrito Federal.



2.4 Cosas.

“Por cosas debemos entender los entes u objetos materiales o inmateriales involucrados en un tipo penal, cosas en nuestras leyes, es considerada como sinónimo de bienes, aunque con mayor connotación. Las cosas consideradas en si mismas se han dividido en corporales e incorporeales; siendo corporales, las que pueden tocarse o se hayan en la esfera de los sentidos; e incorporeales las que no existen, sino intelectualmente o no caen en la esfera de los sentidos, como las obligaciones, las servidumbres y todos los derechos”.³⁸

La distinción entre cosas y bienes se puede deducir del contenido del Código Civil Vigente en el Distrito Federal en su artículo 747:

³⁸ cfr. GONZÁLEZ QUINTANILLA, Arturo. *Op. Cit.*, 651 y 652.

“ARTÍCULO 747. Pueden ser objeto de apropiación todas las cosas que no estén excluidas del comercio.”³⁹

Del anterior precepto se desprende que las cosas son bienes cuando son susceptibles de ser apropiadas por el hombre y no depende en nada de la necesidad que el hombre tenga de ellas, como es el caso del sol, el cual es necesario para la subsistencia humana, pero no es susceptible de ser apropiada.

Cosas en sentido lato, es todo cuanto existe en la naturaleza detectable por los sentidos o no (corpóreo o incorpóreo) sea susceptible de ser valorado en dinero (valor económico o pecuniario) o no, pero para efectos jurídicos, cosa es todo lo corpóreo susceptible de un valor económico.

La cosa puede ser el objeto material, siendo estos los entes corpóreos hacia los cuales se dirige la conducta descrita en la hipótesis normativa y que por ende padece directa y fácticamente la conducta. Este elemento (el objeto material), está relacionado con el bien jurídico protegido.

En algunos casos puede llegarse al supuesto de que el objeto material del delito se confunda con el sujeto pasivo de la conducta, siendo ejemplo clásico de este supuesto el delito de homicidio, siendo que el cuerpo humano, el cual es un ente corpóreo, apreciable por los sentidos y es quien recibe de manera directa la conducta delictiva.

Del concepto del maestro González Quintanilla, donde refiere como cosas, todos los entes corpóreos o incorpóreos que se relacionan con el tipo penal, también se desprenden los instrumentos utilizados en la realización de la conducta delictiva como lo serían en las hipótesis del homicidio la pistola que utilizó el sujeto activo, en la transportación de droga, el vehículo utilizado.

³⁹ Código Civil para el Distrito Federal.

“El concreto objeto en el que se realiza la acción típica, recibe en cambio, el nombre de objeto de la acción. Dicho objeto de la acción puede manifestarse bajo formas distintas: como unidad psíquico corporal (integridad o vida de una persona), como valor social (honor del ofendido), como valor económico (patrimonio), como cosa (animal susceptible de caza), como estado real (posibilidad de uso de un objeto).

Se puede sintetizar como objeto del delito:

- a) Objeto Material.- La persona o la cosa, sobre la cual recae la acción del delincuente, como la persona en las lesiones, o la cosa mueble en el robo.
- b) Objeto Jurídico.- El bien tutelado en la norma que con la conducta lesiona o pone en peligro el sujeto activo.
- c) Objeto Substancial genérico.- Constituido por un bien o un interés propio de la sociedad jurídicamente organizada y común a todos los delitos, cualquiera que sea el tipo o especie.
- d) Objeto Substancial o específico.- Constituido por un bien o un interés propio del sujeto directamente ofendido por el delito.
- e) Instrumentos.- Son los medios materiales utilizados, en su caso, para la comisión del delito. ⁴⁰

⁴⁰ Cfr. GONZÁLEZ QUINTANILLA, Arturo. Op.Cit., págs. 652 y 653.

2.5 Resultado.

El resultado en términos generales es la consecuencia y efecto de un hecho, operación o deliberación. En términos jurídicos es la completa realización de la conducta típica como la privación de la vida del feto en el aborto. La acción y el resultado se encuentran en una relación de causa efecto, pero estos son independientes, como en el caso de la tentativa, en donde el sujeto realiza todos los actos tendientes a la comisión del ilícito, pero por una causa externa al agente no se produce el resultado típico o el caso fortuito donde se presenta un resultado sin acción.

El maestro Miguel Ángel Granados Atlaco dice respecto del resultado:

“Resultado: toda conducta supone un cambio en el mundo exterior que tiene precisamente su origen en esa manifestación de la voluntad previa, o bien se traduce dicha conducta en un cambio del mundo exterior ante la inactividad cuando se espera y no se ejecuta determinado acto. El resultado no supone un daño puede colocarse también en situación de peligro al bien tutelado.”⁴¹

“El resultado, en su mas amplia acepción, consiste en el obrar u omitir del hombre que producen en conjunto de efectos en el mundo naturalistico. Dentro de un amplio concepto, se identifica el resultado con un acontecimiento o suceso, comprendiéndose en el tanto el actuar, positivo o negativo, como los efectos producidos.

En un sentido más restringido, el término resultado debe separarse de la conducta para aludir, exclusivamente a las modificaciones que la misma produce en el mundo fenomenológico.”⁴²

El resultado de los delitos puede ser formal o material:

⁴¹ GRANADOS, ATLACO, Miguel Ángel, *Op. Cit.*, Pág. 162.

⁴² PAVON VASCONCELOS, Francisco, *Manual de Derecho Penal Mexicano*, ed., Porrúa, México, 1991, p. 205.

- a) Formales (Delitos de Actividad).- En estos no es posible distinguir otro resultado diferente a la mera conducta corporal, como es el caso de la revelación de secretos, donde el tipo penal no exige otro resultado que la mera revelación de un secreto, la cual no requiere un resultado material, sino con la simple actividad se encuentra en el supuesto. Para el maestro Eduardo López Betancourt: “en los delitos de mera actividad no se requiere que la acción vaya seguida de la causación de un resultado separable espacio-temporalmente de la conducta. Así por ejemplo, en el delito de allanamiento de morada, se lesiona al bien jurídico tutelado de la inviolabilidad de la morada sin que se produzca ningún resultado.”⁴³
- b) Materiales.- Son aquellos en los que necesariamente debe existir objetivamente un resultado. Se produce materialmente un resultado exterior, es decir, los que el resultado representa un cambio en el objeto material del delito o en el mundo fáctico.

El maestro Castellanos Tena conceptúa de la siguiente manera:

Los delitos formales son aquellos en los que se agota el tipo penal en el movimiento corporal o en la omisión del agente, no siendo necesario para su integración que se produzca alguna alteración en la estructura o funcionamiento del objeto material. Son delitos de mera conducta; se sanciona la acción (u omisión) en sí misma. Los autores ejemplifican el delito formal con el falso testimonio, la portación de arma prohibida y la posesión ilícita de enervantes.

Los delitos materiales son aquellos en los cuales para su integración se requiere la destrucción o alteración de la estructura o del funcionamiento del objeto material (homicidio, daño en propiedad ajena).⁴⁴

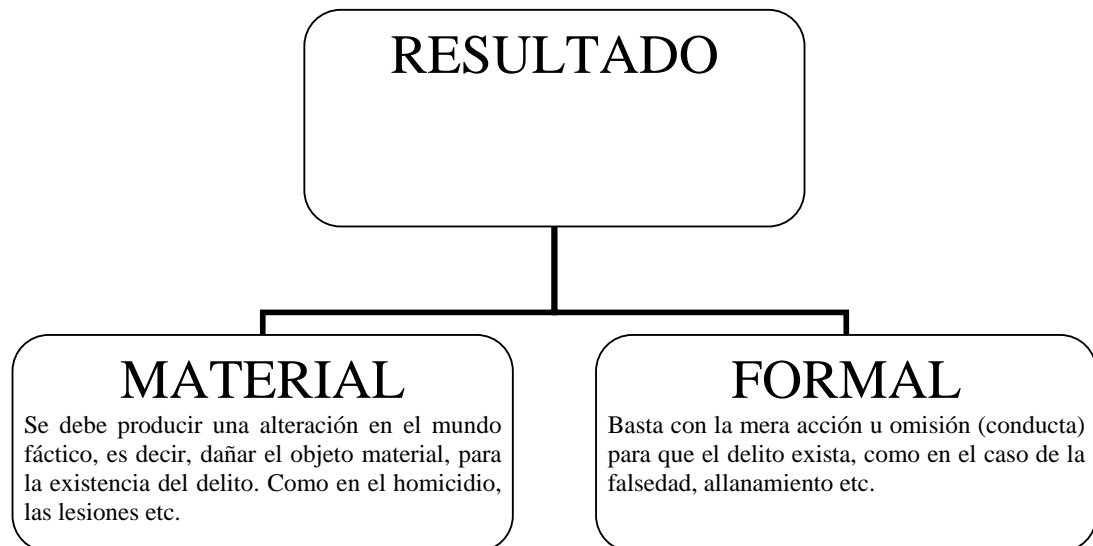
⁴³ LÓPEZ BETANCOURT, Eduardo. Op. Cit., pág. 120.

⁴⁴ CASTELLANOS TENA, Fernando, Op. Cit., Pág. 137.

La Maestra Amuchategui Requena lo define de la siguiente manera;

“FORMAL DE ACCIÓN O DE MERA CONDUCTA. Para la integración del delito no se requiere que se produzca un resultado, pues basta realizar la acción (omisión) para que el delito nazca y tenga vida jurídica; por ejemplo, portación de arma prohibida.

MATERIAL O DE RESULTADO. Es necesario un resultado de manera que la acción u omisión del agente debe ocasionar una alteración en el mundo; por ejemplo homicidio, lesiones y fraude”.⁴⁵



⁴⁵ AMUCHATEGUI REQUENA, Irma. Op. Cit., pág. 63.

2.6. Elementos objetivos del tipo

Al referirme al elemento objetivo, debo mencionar que la palabra objetivo, proviene de los objetos del mundo real.

Los elementos objetivos del tipo son los elementos descriptivos susceptibles de ser apreciados por los sentidos (vista, tacto, gusto, oído, olfato).

Para el Maestro Miguel Ángel Granados Atlaco elemento objetivo del tipo es: “Todo aquel susceptible de ser apreciado por el simple conocimiento, teniendo como función describir la conducta o hecho materia de imputación.”⁴⁶

Al respecto el maestro Eduardo López Betancourt señala:

“Al referirnos al elemento objetivo del tipo penal, estamos hablando de la descripción de la conducta antijurídica desde el punto de vista externo.

El elemento objetivo, se identificará con la manifestación de la voluntad en el mundo físico, requerida por el tipo penal.

Generalmente, los tipos penales describen estados o procesos de naturaleza externa, determinables espacial o temporalmente y perceptibles por los sentidos.

La ley penal no contiene exclusivamente descripciones con un resultado, hay tipos penales más concretos, en los que su contenido material no solo consiste en la realización de una conducta o en la producción de un resultado, sino se tienen que dar en la forma, con los medios o con las modalidades de la misma ley.

Así es como surgen las modalidades, relaciones o referencias que atañen al sujeto pasivo, a un tercero, al objeto donde la conducta recae, a los medios o instrumentos

⁴⁶ Cfr. GRANADOS, ATLACO, Miguel Ángel, Op. Cit., Pág. 166.

de ejecución, lugar, tiempo, etcétera; por ejemplo, en la tradicional figura del infanticidio la conducta delictiva debe de recaer sobre un niño.

Encontramos dentro del elemento objetivo algunas veces se presentan de modo transitivo las figuras típicas, haciéndose mención de la persona o cosa donde recae, de manera que se considera como objeto de la conducta o de la acción, por ejemplo la persona privada de la vida, en el homicidio; la cosa sustraída en el robo, entre otros. ⁴⁷

El maestro González Quintanilla afirma:

“Por ellos debemos captar lo referido en la hipótesis delictiva como apreciable con existencia material en el mundo físico, percibidos tales elementos sensorialmente por los sentidos del ser humano.

Algunos ejemplos: la vida y su privación en el homicidio; el cuerpo humano y las heridas a él inferidas en las lesiones; la casa habitada y la introducción en ella del extraño en el allanamiento de morada; el producto de la concepción eliminada durante la preñez en el Aborto; las cosas muebles en el robo etc. ⁴⁸

2.7. Elementos subjetivos del tipo.

Los elementos subjetivos, son inapreciables por medio de los sentidos en contraposición a los elementos objetivos del tipo que son existentes en el mundo fáctico, es decir, detectables sensorialmente.

“Considerar el delito a parte subjecti quiere decir por el momento, fijar la atención sobre el modo de ser del hombre que lo comete.”⁴⁹

⁴⁷ Cfr. LÓPEZ BETANCOURT, Eduardo. Op. Cit., págs. 129 y 130.

⁴⁸ GONZÁLEZ QUINTANILLA, Arturo. Op. Cit., pág. 655.

⁴⁹ CARNELUTTI, Francesco, *Teoría General del Delito*, ed. Argos Calí Colombia, Colombia, 1960, p. 60.

Los elementos subjetivos del tipo penal van a atender a la intención, al ánimo que tuvo el sujeto activo o debe tener, en la realización de algún ilícito penal, es decir, atiende a circunstancias que se dan en el mundo interno del sujeto activo.

El legislador no únicamente toma en cuenta el aspecto externo en las descripciones típicas, sino como en el caso de los delitos dolosos, toma en cuenta la intencionalidad del sujeto como ejemplo de esto está lo establecido en el artículo 18 del Código Penal del Distrito Federal:

“ARTÍCULO 18. Las acciones u omisiones delictivas solamente pueden realizarse dolosa o culposamente.

Obra dolosamente el que, **conociendo** los elementos objetivos del hecho típico de que se trate, o previendo como posible el resultado típico, **quiere o acepta** su realización.

Obra culposamente el que produce el resultado típico, que no previó siendo previsible o previó confiando en que no se produciría, en virtud de la violación de un deber de cuidado que objetivamente era necesario observar.”⁵⁰

El legislador al referirse a “conociendo los elementos objetivos del hecho típico de que se trate, o previendo como posible el resultado típico, quiere o acepta su realización.”, establece elementos subjetivos, es decir inherentes al sujeto que realiza la conducta y que no son apreciables sensorialmente, ya que representan elementos que jamás salen del fuero interno del sujeto.

“Los elementos del dolo son:

a) conocimiento por parte del sujeto de que realiza circunstancias que pertenecen al tipo (elemento intelectual). El sujeto debe tener conocimiento que realiza circunstancias que pertenecen o forman parte del tipo: que va a privar de la vida a

⁵⁰ Código Penal para el Distrito Federal.

alguien, que va a lesionar a determinada persona, que la cosa es ajena, que la mujer es casta y honesta, etc., es decir debe tener conocimiento en unos casos, que esta realizando el elemento objetivo del tipo, y en otros, que se integra el elemento normativo que forma parte del tipo.

b) querer o aceptar el resultado (elemento emocional o volitivo). Consistente en la voluntad de la conducta o del resultado.”⁵¹

“El elemento subjetivo puede radicar en el conocimiento que tiene el autor, de la realidad de un determinado estado de las cosa. Otras veces este elemento estará en un determinado deseo, ánimo o intención del agente en la realización de la conducta típica.”⁵²

El Maestro Granados Atlaco sostiene que el: “Elemento subjetivo: se considera como tal al elemento del tipo que se refiere al motivo y al fin de la conducta descrita.” ⁵³

Para el maestro González Quintanilla los elementos subjetivos:

“Consisten en la finalidad, ánimo, propósito o tendencia del sujeto en su yo interno, que lo impulsan a la realización del delito.

Algunos ejemplos: alegar “a sabiendas” hechos falsos en los delitos de abogados y patronos; el servidor público que exija un cobro o cualquier otra cosa que “sepa” no ser debida; al que dolosamente adquiera, posea, o adquiera semillas a precio subsidiado en los delitos contra la Economía Pública, etc.

⁵¹ PORTE PETIT, Celestino, *Programa de Derecho Penal*, 3ª ed. Trillas, México, 1990, p. 602,

⁵² LÓPEZ BETANCOURT, Eduardo. *Op. Cit.*, pág. 135.

⁵³ GRANADOS ATLACO, Miguel Ángel, *Op. Cit.*, Pág. 166.

En forma reiterada se ha considerado el “engaño” como un elemento subjetivo; sin negar lo correcto de esta afirmación, no desconocemos que los actos realizados mediante el engaño, desde el punto de vista objetivo, pueden ser detectables sensorialmente, por ejemplo la falsedad impuesta a un documento para lograr un fin, pero la actitud para engañar, es decir, el aspecto referente a la intención en el yo interno del sujeto es lo considerado como elemento subjetivo.

En estas condiciones, la actitud engañosa puede manejarse bajo ambos aspectos; el subjetivo que alude a las pretensiones del activo (*animus lucrandi*) y el objetivo bajo el cual se implica todo aquello elaborado físicamente para generar el consentimiento viciado, o mantener en error a la víctima con la pretensión de hacerla ceder el derecho a la cosa y generar un lucro indebido.”⁵⁴

2.8. Elementos normativos del tipo.

Los elementos normativos son aquellos conceptos inmersos en las descriptivas penales que requieren de una valoración por parte de quien realiza la interpretación, que en la práctica la realiza el Ministerio Público, en la etapa de integración de la Averiguación Previa para consignar y en la etapa de juicio el Juez que conozca, toda vez que la valoración de estos elementos es en base a parámetros jurídicos, culturales, sociales, o cognoscitivos. La distinción entre quien hace la valorización es importante, toda vez que pudiera presentarse el caso de que variara respecto de un concepto la valoración del Ministerio Público y la valoración hecha por el Juez.

Algunos autores consideran como criterios el jurídico y cultural para valorizar un concepto como el Maestro Granados Atlaco, quien sostiene que “este elemento supone la necesidad de una valorización del mismo por parte del Juzgador, ya sea de carácter jurídico o cultural.”⁵⁵

⁵⁴ Cfr. GONZÁLEZ QUINTANILLA, Arturo. *Op. Cit.*, pág. 656.

⁵⁵ Cfr. GRANADOS, ATLACO, Miguel Ángel, *OP. Cit.* Pág. 166.

Para el maestro González Quintanilla “los elementos normativos son aquellas situaciones o conceptos complementarios, impuestas en los tipos que requieren de una valoración cognoscitiva, jurídica, cultural o social”⁵⁶

De la anterior definición podemos establecer que la valoración puede ser cognoscitiva, jurídica, cultural o social. Por lo que podemos citar diversos ejemplos de las distintas valoraciones:

- a) Cognoscitiva.- La brutal ferocidad en el homicidio o motivos depravados.
- b) Jurídica.- El domicilio en el delito de variación de nombre o domicilio, que es una obligación, alimentos, etc.
- c) Cultural o social.- Obsceno en los ultrajes a la moral pública, vicio, honor, amistad, amor, etc.

Por lo que sin perjuicio de las afirmaciones hechas en el desarrollo del presente Capítulo, considero, importante hacer las siguientes observaciones:

1.- El término tipo, no es de uso exclusivo del Derecho Penal, ya que como lo afirma el maestro José Héctor Franco Mejía, consiste en una descripción letrística, que ya puede ser de conducta o de hechos. Aunque es importante afirmar que el término de Tipo Penal sí es un concepto de uso exclusivo del Derecho Penal.

2.- La legislación penal es omisa en cuanto a dar un concepto de bien jurídico protegido, pero aunque se refiere a él en diversos preceptos, considero que es indispensable una definición, sobre todo en cuanto a cuáles son los bienes

⁵⁶ GONZÁLEZ QUINTANILLA, Arturo. *Op. Cit.*, pág. 656.

jurídicos protegidos disponibles, en virtud de que al ser omisa, se configura una violación al principio de legalidad.

CAPÍTULO III

CUERPO DEL DELITO DE FRAUDE PROCESAL ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 310 DEL CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL SEGÚN LOS ELEMENTOS Y CONSTANTES DEL TIPO.

.....	50
3.1 Bien jurídico protegido.....	52
3.2 Conducta.....	58
3.3 Sujetos.....	66
3.4 Cosas.....	72
3.5 Resultado.....	73
3.6. Elementos objetivos.....	77
3.7. Elementos subjetivos.....	81
3.8. Elementos normativos.	86

3.- CUERPO DEL DELITO DE FRAUDE PROCESAL ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 310 DEL CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL SEGÚN LOS ELEMENTOS Y CONSTANTES DEL TIPO.

El cuerpo del delito no es otra cosa que la verificación en el mundo de los hechos de la descripción en abstracto hecha por el legislador en el tipo penal. Tal y como lo establecí en el Capítulo segundo de la presente tesis por lo que se equipara al Cuerpo del Delito con la actualización del supuesto, es decir, es el hecho de la estructura lógico formal de la norma.

A este respecto el Código de Procedimientos Penales para el Distrito Federal establece en su artículo 122 lo que debe acreditar el Ministerio Público para poder consignar, de lo que se desprende que se debe de entender por Cuerpo del Delito:

“Artículo 122.- El Ministerio Público acreditará el cuerpo del delito de que se trate y la probable responsabilidad del indiciado, como base del ejercicio de la acción penal; y la autoridad judicial, a su vez, examinará si ambos requisitos están acreditados en autos.

El cuerpo del delito se tendrá por comprobado cuando se demuestre la existencia de los elementos que integran la descripción de la conducta o hecho delictuoso, según lo determine la ley penal.

Para resolver sobre la probable responsabilidad del inculpado, la autoridad deberá constatar que no exista acreditada a favor de aquél alguna causa de licitud y que obren datos suficientes para acreditar su probable culpabilidad.”⁵⁷

⁵⁷ Código de Procedimientos Penales para el Distrito Federal.

Al referirse el legislador cuando se compruebe la existencia de los elementos que integran la descripción de la conducta o hecho delictuoso, por existencia, se entiende la verificación en el mundo fáctico de la conducta o hecho delictuoso, según lo determine la ley penal, con lo que es la actualización de la hipótesis en abstracto descrita por el legislador y que le ha impuesto una sanción penal, es decir, la actualización del Tipo penal.

El maestro González Quintanilla con toda claridad se refiere al cuerpo del delito:

“Se puede definir el cuerpo del delito como lo histórico del tipo. Con la expresión anterior queremos significar como requisito sine qua non, que el hecho descrito en la ley como delictuoso tuvo verificativo en la realidad, es decir, efectivamente sucedió en el mundo de relación fenomenológica, o sea, se llevó a cabo fáctica y materialmente. Para los efectos del cuerpo del delito, se busca la existencia del hecho al margen de la atribuibilidad que del mismo se le haga ha determinada o determinadas personas, por eso decimos que el cuerpo del delito es lo histórico del tipo, despersonalizado en relación con el autor.”⁵⁸

Por lo que en este Capítulo analizaré de forma detallada los elementos y constantes del tipo penal de fraude procesal establecido en nuestro Código Penal para el Distrito Federal:

TÍTULO VIGÉSIMO PRIMERO

“DELITOS COMETIDOS POR PARTICULARES ANTE EL MINISTERIO PÚBLICO, AUTORIDAD JUDICIAL O ADMINISTRATIVA.

CAPÍTULO I

⁵⁸ Cfr. GONZÁLEZ QUINTANILLA, Arturo. Op. Cit., pág. 545.

FRAUDE PROCESAL

ARTÍCULO 310. Al que para obtener un beneficio indebido para sí o para otro, simule un acto jurídico, un acto o escrito judicial o altere elementos de prueba y los presente en juicio, o realice cualquier otro acto tendiente a inducir a error a la autoridad judicial o administrativa, con el fin de obtener sentencia, resolución o acto administrativo contrario a la ley, se le impondrán de seis meses a seis años de prisión y de cincuenta a doscientos cincuenta días multa. Si el beneficio es de carácter económico, se impondrán las penas previstas para el delito de fraude.

Este delito se perseguirá por querrela, salvo que la cuantía o monto exceda de cinco mil veces el salario mínimo general vigente en el Distrito Federal, al momento de realizarse el hecho.⁵⁹

3.1 Bien jurídico protegido.

El bien jurídico protegido no es otra cosa sino los bienes, derechos o intereses de la colectividad y del individuo que son protegidos por las leyes penales.

A efecto de establecer cuál es el bien jurídico protegido por el fraude procesal, se debe de desentrañar la verdadera voluntad del legislador, por lo que se tendrá que realizar una interpretación exegética (escuela tradicional) del tipo de fraude procesal, para lo cual recurriré a los antecedentes legislativos del tipo objeto de estudio, cuando se debatió el proyecto en el pleno de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, se contempló dicho tipo en el Título Vigésimo Primero, se estableció:

⁵⁹ Código Penal para el Distrito Federal.

“Título Vigésimo Primero, Delitos contra la administración y procuración de justicia, cometidos por particulares, que se integra con seis Capítulos, aquí se considera que resulta adecuado distinguir las conductas de los particulares en el ámbito de la justicia de las de los funcionarios públicos, lo que permitirá una adecuada individualización al imponer las sanciones, de conformidad con la participación en la conducta precisa, que la ley reconoce como punible y con la adecuada descripción, se contienen en este rubro, Fraude procesal, Falsedad ante autoridades, Variación del nombre o domicilio, Simulación de pruebas, Delitos de abogados, patronos y litigantes Encubrimiento por favorecimiento.”⁶⁰

De lo que se desprende que la intención del legislador, la llamada *ratio legis* era la de proteger a la administración y procuración de justicia, de actos que cometieran los particulares, toda vez, que el Título Vigésimo, contempla delitos en contra de la Administración de Justicia, cometidos por los funcionarios públicos.

Es así como de la interpretación exegética se determina que el bien jurídico protegido es **“LA CORRECTA ADMINISTRACIÓN Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA”**.

Respecto del bien jurídico protegido que es la Correcta Administración y Procuración de Justicia, se afirma que el titular del bien jurídico protegido en un principio es la colectividad en su conjunto, ya que como lo sostiene la obra del Contrato Social de Juan Jacobo, los hombres al unirse, ceden parte de su libertad y se la otorgan a una superestructura que es el Estado, siendo el Estado quien tiene el monopolio de la Administración de Justicia, tal y como se desprende del Artículo 17 Constitucional:

“Artículo 17.- Ninguna persona podrá hacerse justicia por sí misma, ni ejercer violencia para reclamar su derecho.

⁶⁰ Lo anterior puede confrontarse con los diarios de debates de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal del 30 de abril de 2002, 3 de julio de 2002.

Toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Su servicio será gratuito, quedando, en consecuencia, prohibidas las costas judiciales.

Las leyes federales y locales establecerán los medios necesarios para que se garantice la independencia de los tribunales y la plena ejecución de sus resoluciones.

Nadie puede ser aprisionado por deudas de carácter puramente civil. “⁶¹

La actualización de la hipótesis de fraude procesal, tiene la característica de afectar a dos o más bienes jurídicos protegidos a la vez, un ejemplo de esto es, cuando el sujeto activo del delito en un juicio en el que existe un interés patrimonial como el ejecutivo mercantil, en específico uno que verse en el cobro de pagarés, podría darse el supuesto de que el actor del juicio de forma dolosa altere el interés previamente establecido en el documento base de la acción, el cual tiene la característica de ser prueba preconstituida, con lo cual se encontraría en una de las hipótesis del fraude procesal, con lo que no exclusivamente vulnera a la Correcta Administración de Justicia, sino que mientras no obtenga la sentencia estaría poniendo en peligro también el Patrimonio de la parte demandada.

Del ejemplo anterior se desprende que el delito de fraude procesal afectaría dos bienes jurídicos protegidos, por lo que afirmare que el delito de fraude procesal tiene un bien jurídico protegido determinado (La Correcta Administración y Procuración de Justicia) y puede tener otro o más indeterminado, ya que como se desprende del propio artículo 310 del Código Penal para el Distrito Federal, el legislador estableció una pena cuando el beneficio sea económico y cuando este no lo sea, e inclusive el delito es

⁶¹ Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

perseguable por querella siempre y cuando el monto del beneficio no sea superior a cinco mil veces el salario mínimo general vigente en el Distrito Federal:

“se le impondrán de seis meses a seis años de prisión y de cincuenta a doscientos cincuenta días multa. Si el beneficio es de carácter económico, se impondrán las penas previstas para el delito de fraude.

Este delito se perseguirá por querella, salvo que la cuantía o monto exceda de cinco mil veces el salario mínimo general vigente en el Distrito Federal, al momento de realizarse el hecho.”⁶²

Por lo que el legislador consideró que otro bien jurídico protegido del delito de fraude es el **patrimonio**:

“Tradicionalmente se concibe al patrimonio como una universalidad de derechos y obligaciones pecuniariamente apreciables, siendo este concepto civilista, inadecuado en el campo del derecho penal, toda vez que el atributo del patrimonio contempla el activo y el pasivo de la persona, es decir, contempla también lo debido, mientras que el derecho penal protege únicamente lo referente al activo.”⁶³

Pero el tipo penal no se limita a los bienes jurídicos protegidos de la Correcta Administración y procuración de Justicia y del Patrimonio, por ello he afirmado con anterioridad que el tipo penal de Fraude Procesal tutela el bien jurídico de la Correcta Administración y procuración de Justicia como bien jurídico determinado y otro u otros indeterminados que pueden ser el patrimonio o cualquier otro que se vulnere con la comisión del ilícito, toda vez que las personas no acuden ante la autoridad a que se le procure o administre justicia esperando únicamente un beneficio económico, ya que inclusive como se desprende del tipo objeto de estudio, solamente se hace referencia a un

⁶² Código Penal para el Distrito Federal.

⁶³ Cfr. PAVÓN VASCONCELOS, Francisco, Comentarios de Derecho Penal, 3ª edición, ed. Porrúa, México 1973, Pág. 13.

beneficio indebido, sin que por fuerza éste deba ser de carácter patrimonial (cuantificable pecuniariamente), por lo que en la hipótesis de un juicio de divorcio, puede darse el supuesto del cónyuge que con el fin de no ser culpable, a efecto de quedar en actitud inmediata de contraer matrimonio, realice una de las conductas establecidas en el tipo penal en comentario, o en el caso de la guardia y custodia de los menores, pérdida de la patria potestad, la filiación, etc.

Por lo que es criticable que el legislador considere como criterio de cuantificación de la pena una valoración en dinero, del beneficio indebido obtenido con la sentencia. Ya que es discutible, si es mayor un daño patrimonial, que el daño que se le pueda causar a una persona por la pérdida de la patria potestad, la guardia y custodia de los menores, o cualquier otro que no sea cuantificable en dinero.

Respecto del bien jurídico protegido del delito de fraude procesal es aplicable la siguiente tesis:

Registro No. 179023. **Localización:** Novena Época. Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. XXI, Marzo de 2005. Página: 1132. Tesis: XVII.2o.P.A.24 P. Tesis Aislada. Materia(s): Penal

“FRAUDE PROCESAL, DELITO DE. PROTEGE PRIMORDIALMENTE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA Y EN FORMA SECUNDARIA AL PATRIMONIO. ES UN DELITO DE PELIGRO PATRIMONIAL, NO NECESARIAMENTE DE RESULTADO (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA).

El artículo 142 del Código Penal del Estado de Chihuahua, que tipifica el delito de fraude procesal y de su inclusión en el título denominado "Delitos contra la administración de justicia", se concluye que se trata de una figura típica compleja, pues protege dos bienes jurídicos, la administración de justicia primordialmente y en forma secundaria el patrimonio, pues es frecuente que se utilice fraudulentamente a los tribunales con el fin de obtener beneficios de orden patrimonial y para su

consumación basta con que se dé la simulación de actos jurídicos o la alteración de elementos de prueba, con el fin de obtener una resolución jurisdiccional de la que se derive alternativamente el perjuicio de alguien o un beneficio indebido, con lo que se afecta el primer bien jurídico tutelado; y por lo que se refiere al segundo de ellos, no se requiere necesariamente la disposición ni la disminución del patrimonio, dado que se trata de un delito de peligro patrimonial, pues en su descripción penal se modifica el requisito de cosa o del logro del lucro indebido, necesario para la consumación del fraude genérico, al señalarse en dicho tipo penal "... que se derive el perjuicio de alguien o un beneficio indebido ..." y no "... se hace ilícitamente de una cosa o alcanza un lucro indebido ...", lo que no desnaturaliza el bien jurídico que en segundo término protege la norma, porque sanciona la conducta tendente a afectarlo. Luego, si en el caso, el sujeto activo del delito altera elementos de prueba y por medio de ello obtiene una resolución jurisdiccional mediante la cual se le reconoce como cónyuge superviviente y única y universal heredera y, además, como albacea, en un juicio sucesorio intestamentario, no obstante que anteriormente haya promovido un diverso juicio de tal naturaleza señalando como herederos a sus hijos, y en virtud de aquella declaratoria enajena bienes del caudal hereditario y los da en garantía, se actualiza la figura típica de fraude procesal, pues con la alteración de pruebas y el consecuente dictado de la resolución jurisdiccional favorable se afecta la administración de justicia y, además, se pone en peligro el patrimonio, que es el bien jurídico tutelado, pues con tal declaratoria se le coloca en una posición privilegiada respecto de los demás herederos, ya que al ser reconocida única y universal heredera y, además, albacea, está en posición legal de efectuar actos lucrativos en su beneficio y en perjuicio del patrimonio de aquéllos, y al haber enajenado y gravado bienes de la sucesión utilizando ese doble carácter evidencia la finalidad de la conducta que se le reprocha, o sea, afectar el patrimonio del sujeto pasivo."

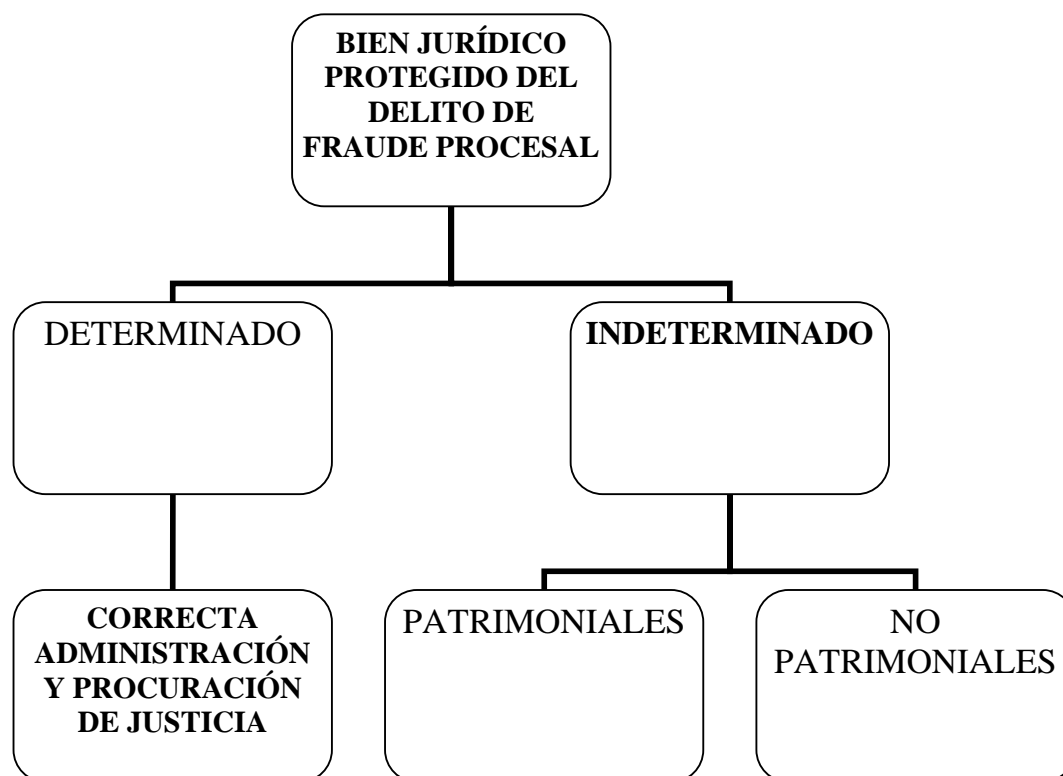
SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS PENAL Y ADMINISTRATIVA DEL DÉCIMO SÉPTIMO CIRCUITO.

Amparo directo 247/2004. 10 de diciembre de 2004. Unanimidad de votos.

Ponente: Ángel Gregorio Vázquez González. Secretaria: Natalia López López.

Del criterio de la tesis citada, se desprende que el delito de fraude procesal es una figura compleja que no únicamente protege un bien jurídico protegido,

como lo es la Correcta Administración de Justicia, sino en segundo plano, también el patrimonio, y como lo he afirmado puede proteger además bienes jurídicos que no sean de carácter patrimonial.



3.2 Conducta.

Como se estudió en el Capítulo anterior “la Conducta constituye el núcleo o núcleos (verbo o verbos) en la descriptiva (hacer o dejar de hacer).”⁶⁴

Por lo que a efecto de identificar el elemento de la Conducta en la descriptiva objeto de éste análisis, se deberá de identificar cuáles son los verbos que conforman las hipótesis del Fraude Procesal establecido en el artículo 310 del Código Penal para el Distrito Federal:

⁶⁴GONZÁLEZ QUINTANILLA, Arturo. Op. Cit., pág. 650.

*“ARTÍCULO 310. Al que para obtener un beneficio indebido para sí o para otro, **simule** un acto jurídico, un acto o escrito judicial o **altere** elementos de prueba y los presente en juicio, o realice **cualquier otro acto tendiente a inducir a error a la autoridad judicial o administrativa, con el fin de obtener sentencia, resolución o acto administrativo contrario a la ley**, se le impondrán de seis meses a seis años de prisión y de cincuenta a doscientos cincuenta días multa. Si el beneficio es de carácter económico, se impondrán las penas previstas para el delito de fraude.*

Este delito se perseguirá por querrela, salvo que la cuantía o monto exceda de cinco mil veces el salario mínimo general vigente en el Distrito Federal, al momento de realizarse el hecho.”⁶⁵

De lo anterior se desprenden las siguientes hipótesis normativas:

- a) Al que para obtener un beneficio indebido para sí o para otro, **simule** un acto jurídico.
- b) Al que para obtener un beneficio indebido para sí o para otro, **simule** un acto judicial.
- c) Al que para obtener un beneficio indebido para sí o para otro, **simule** un escrito judicial.
- d) Al que para obtener un beneficio indebido para sí o para otro **altere** elementos de prueba y los presente en juicio.
- e) Al que para obtener un beneficio indebido para sí o para otro realice **cualquier otro acto tendiente a inducir a error a la autoridad judicial con el fin de obtener sentencia, resolución o acto administrativo contrario a la ley.**

⁶⁵ Código Penal para el Distrito Federal.

- f) Al que para obtener un beneficio indebido para sí o para otro realice ***cualquier otro acto tendiente a inducir a error a la autoridad administrativa con el fin de obtener sentencia, resolución o acto administrativo contrario a la ley***

De lo anterior se determina que la Conducta en el tipo penal en comentario se encuentra descrita con los verbos ***SIMULAR*** y ***ALTERAR*** y la expresión ***CUALQUIER OTRO ACTO TENDIENTE A INDUCIR A ERROR A LA AUTORIDAD ADMINISTRATIVA CON EL FIN DE OBTENER SENTENCIA, RESOLUCIÓN O ACTO ADMINISTRATIVO CONTRARIO A LA LEY.***

Por lo que es indispensable establecer, qué se debe entender por el verbo ***SIMULAR*** para los efectos del artículo 310 del Código Penal del Distrito Federal. Al respecto, considero la referencia que hace nuestro Código Civil y los Tribunales:

Por lo que es pertinente referirme a la siguiente tesis:

Registro No. 187533. **Localización:** Novena Época. Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. XV, Marzo de 2002. Página: 1349. Tesis: VII.2o.P.28 P. Tesis Aislada Materia(s): Penal

“FRAUDE PROCESAL. NO SE INTEGRA EL CUERPO DEL DELITO SI LA INDICIADA, AL PROMOVER UN JUICIO CIVIL DE ALIMENTOS, OMITIÓ EXPONER LA PREVIA EXISTENCIA DE UN CONVENIO CON EL DEMANDADO Y LA PROMOCIÓN DE JUICIOS CIVILES ANTERIORES (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE VERACRUZ).

La correcta interpretación de lo dispuesto en el artículo 272 del Código Penal para el Estado de Veracruz lleva a concluir que el ilícito de fraude procesal

tutela la administración de justicia, que se considera vulnerada cuando se simulan actos jurídicos o alteran elementos de prueba para obtener una resolución judicial de la que derive el perjuicio de alguien o un beneficio indebido, entendiéndose por simular, fingir, aparentar o dar a entender lo que no es, y por alterar, modificar, afectar o adulterar la esencia o forma de algo. Sin embargo, ninguna de tales hipótesis puede considerarse actualizada por el hecho de que la quejosa, al ejercer una acción civil para reclamar alimentos en favor de su menor hijo, haya omitido exponer la existencia de un previo convenio de alimentos celebrado con el ofendido, y de juicios anteriores, lo que no implica ni simulación de actos jurídicos ni alteración de pruebas, sino, en todo caso, motivos que dan lugar a la excepción o excepciones civiles relativas, circunstancias que deberán dilucidarse en el correspondiente procedimiento si así lo plantea el demandado y que obviamente serán sopesadas por el juzgador al dictar la sentencia respectiva, ya que sería indebido que aspectos de esa naturaleza jurídica desde ahora sean materia de análisis, con la repercusión procesal que ello tendrá en tal procedimiento civil.”

SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL SÉPTIMO CIRCUITO.

Amparo en revisión 329/2001. 7 de noviembre de 2001. Unanimidad de votos.

Ponente: José Luís Arellano Pita. Secretaria: Guadalupe Patricia Juárez Hernández

De lo anterior, por simular debe entenderse:

“fingir, aparentar o dar a entender lo que no es.”

Nuestro Código Civil en el mismo sentido establece en el artículo 2180 al referirse a la simulación de los actos lo siguiente:

“Artículo 2180.- Es simulado el acto en que las partes declaran o confiesan falsamente lo que en realidad no ha pasado o no se ha convenido entre ellas.”⁶⁶

Por lo que el verbo simular también puede ser considerado un elemento normativo de valoración jurídica.

Debo también precisar qué se entiende por acto jurídico, acto judicial o escrito judicial:

La teoría francesa distingue entre hecho, hecho jurídico y acto jurídico, entendiendo el hecho como cualquier acontecimiento de la naturaleza o del hombre que produzca o no consecuencias de Derecho, el hecho jurídico es cualquier acontecimiento de la naturaleza o del hombre que produce consecuencias en el mundo del Derecho, y **el acto jurídico es el que realiza el ser humano en el que interviene su voluntad y produce consecuencias de Derecho.**

Por acto judicial, se entiende en el contexto del artículo 310 del Código Penal del Distrito Federal, toda vez que como se desprende, esta hipótesis únicamente prevé como sujeto activo del delito a los particulares y no a las autoridades, estos serán los actos que realiza el particular ante las autoridades, entendiendo por esto los documentos que se presentan ante la autoridad, en consecuencia existe una similitud entre los actos judiciales y escritos judiciales. Aunque por los primeros se entiende la presentación de un contrato inexistente y la del escrito Judicial una promoción dirigida a la autoridad.

En consecuencia cuando me refiero a las hipótesis:

Simular un acto jurídico.- Es cuando se presenta de forma engañosa una manifestación de voluntad tendiente a producir consecuencias de Derecho

⁶⁶ Código Civil para el Distrito Federal

como si en verdad existiera cuando en realidad no existe. Esta hipótesis es la que se identifica con el artículo 2180 del Código Civil Vigente en el Distrito Federal. Ya que el Sujeto o los Sujetos fingen la existencia de la voluntad (cuando es unilateral) o del Consentimiento (bilateral) sin que en el mundo fáctico exista. Con lo que ambos sujetos son responsables.

“Constituye fraude el omitir hacer saber a la víctima el estado de error en que se encuentra y del cual se aprovecha para obtener la entrega de una cosa o cualquier otro lucro indebido; pero ello implica la afirmación de que el activo tiene un deber jurídico de manifestar la verdad, sacando así de su equivocación al potencial defraudado.”⁶⁷

Simular un acto judicial.- se verifica cuando el sujeto activo exhibe de forma engañosa un documento tendiente a obtener una decisión decreto o providencia de los jueces o magistrados.

Simular un escrito Judicial.- se da cuando un sujeto activo presenta de forma engañosa un documento que va dirigido a una autoridad judicial y contiene algún pedimento declaración o alegato relacionado con el proceso y para que surta efectos en él.

Por lo que se refiere al verbo Alterar, de la misma tesis citada se desprende:

Que por alterar se entiende:

“Modificar, afectar o adulterar la esencia o forma de algo”

De la lectura de la descripción letrística del delito de Fraude Procesal se desprende que exclusivamente se pueden alterar los elementos de prueba.

⁶⁷REYNOSO DÁVILA, Roberto, *Delitos Patrimoniales*, 2ª ed. Porrúa, México, 2002, p. 204.

Los elementos de prueba son todos aquellos medios que las partes utilizan para formar convicción en el Juzgador, los más comunes son la confesional, la testimonial, las documentales (públicas y privadas), las periciales, la inspección, la instrumental y la presuncional, ya que la única limitación para “probar”, es que las pruebas no sean prohibidas por la ley ni contrarias a la moral (hay excepciones a este principio, como es el caso de los procedimientos ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, en donde sólo son admitidas las documentales).

Por lo que, por **alterar elementos de prueba y presentarlos en juicio.-** se entiende el modificar, afectar o adulterar la esencia o forma de los medios que las partes utilizan para formar convicción en el Juzgador.

En consecuencia es criticable la redacción de esta hipótesis, ya que al hacer referencia a los “Elementos de Prueba”, ha dejado abierta la posibilidad a todos los medios de prueba existentes, por lo que se esta frente a un concurso de normas, como sería el caso de la:

FALSIFICACIÓN O ALTERACIÓN Y USO INDEBIDO DE DOCUMENTOS

“ARTÍCULO 339. *Al que para obtener un beneficio o causar un daño, falsifique o altere un documento público o privado, se le impondrán de tres a seis años de prisión y de cien a mil días multa, tratándose de documentos públicos y de seis meses a tres años de prisión y de cincuenta a quinientos días multa, tratándose de documentos privados.*

Las mismas penas se impondrán al que, con los fines a que se refiere el párrafo anterior, haga uso de un documento falso o alterado o haga uso indebido de un documento verdadero, expedido a favor de otro, como si hubiere sido expedido a su nombre, o aproveche indebidamente una firma o rúbrica en blanco.”⁶⁸

⁶⁸ Código Penal para el Distrito Federal.

Dando lugar a que la Jurisprudencia tenga que venir a resolver dichas controversias como es el caso de la Jurisprudencia que a continuación citamos:

Registro No. 195596. Localización: Novena Época. Instancia: Tribunales. Colegiados de Circuito. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. VIII, Septiembre de 1998. Página: 1090. Tesis: VII.P. J/33. Jurisprudencia. Materia(s): Penal

“FRAUDE PROCESAL Y FALSIFICACIÓN DE DOCUMENTOS. NO PUEDEN COEXISTIR.

*Una interpretación armónica de los artículos 272 y 223 del Código Penal para el Estado de Veracruz, que prevén los delitos de **fraude procesal** y falsificación de documentos, respectivamente, lleva a concluir válidamente que ambos preceptos sancionan la alteración o falsificación de documentos en perjuicio de terceros. Por tanto, si la conducta desplegada presumiblemente por los quejosos encuadra dentro de la primera de las normas legales referidas porque está acreditado que alteraron un título de crédito obteniendo con ello una resolución judicial que derivó en perjuicio del demandado y en beneficio propio, es incuestionable que no puede estimárseles también como probables responsables del diverso delito al que se refiere el segundo de los preceptos citados, porque sería tanto como permitir que se les enjuiciara dos veces por la misma conducta, recalificándola en su perjuicio.”*

TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL SÉPTIMO CIRCUITO.

Amparo en revisión 300/93. Rafael Urdapilleta Pérez y Martín Arteaga Maldonado. 20 de enero de 1994. Unanimidad de votos. Ponente: Rosa María Temblador Vidrio. Secretario: Benito Andrade Ibarra.

Por lo que se refiere a la expresión **cualquier otro acto tendiente a inducir a error a la autoridad administrativa con el fin de obtener sentencia, resolución o acto administrativo contrario a la ley.**

El legislador además de enunciar las conductas de **SIMULAR** o **ALTERAR**, ha dejado abierta la posibilidad de que este delito pueda ser realizado a través de otras Conductas, siempre y cuando tiendan a inducir al error a la autoridad Administrativa o Judicial y con el fin de obtener sentencia, resolución o acto administrativo contrario a la ley.

Siendo esto una llave que abre paso a un sin fin de posibilidades de conductas con las que se pueda cometer el ilícito, como sería el caso de sustraer parte de algún expediente, a efecto de que el Juzgador no tome en cuenta ciertas actuaciones para emitir su sentencia.

De lo anterior se puede afirmar que el Delito de Fraude Procesal, únicamente puede realizarse por Acción, ya que forzosamente requerirá para la actualización de cualquiera de las hipótesis la provocación de algo físicamente.

Además de que no es viable que se presente la ausencia de la voluntad del agente como excluyente del delito, ya que el mismo inclusive prevé, la intencionalidad del sujeto, dando lugar en todo caso a la atipicidad de la conducta.

3.3 Sujetos.

Como lo señale en el Capítulo anterior, se debe distinguir en materia penal a dos clases de sujetos el activo y el pasivo:

Sujeto Activo: Persona física que realiza o participa en la conducta (acción u omisión) delictiva, es decir, que lesiona o pone en peligro un bien jurídico tutelado.

Sujeto Pasivo: Persona física o moral titular del bien jurídico protegido que reciente de manera directa la conducta (acción u omisión) delictiva, es decir, que lesiona o pone en peligro el bien jurídico

Por lo que respecta al Sujeto Activo del Delito de Fraude Procesal del análisis se desprende:

*“ARTÍCULO 310. Al que para obtener un beneficio indebido para sí o para otro, **simule** un acto jurídico, un acto o escrito judicial o **altere** elementos de prueba y los presente en juicio, o realice **cualquier otro acto tendiente a inducir a error a la autoridad judicial o administrativa, con el fin de obtener sentencia, resolución o acto administrativo contrario a la ley**, se le impondrán de seis meses a seis años de prisión y de cincuenta a doscientos cincuenta días multa. Si el beneficio es de carácter económico, se impondrán las penas previstas para el delito de fraude.*

Este delito se perseguirá por querrela, salvo que la cuantía o monto exceda de cinco mil veces el salario mínimo general vigente en el Distrito Federal, al momento de realizarse el hecho.”⁶⁹

El precepto objeto de estudio no exige calidad alguna respecto del sujeto activo del delito, es decir, a diferencia de otros tipos penales en los cuales se requiere que para poder ser sujeto activo del delito (quien realiza o participa en la conducta) ostente determinada calidad, como la de servidor público, ascendiente, descendiente, empleado etc.

Ya que como lo establece el tipo penal de fraude procesal con la siguiente expresión:

“Al que para obtener un beneficio indebido para sí o para otro”

Se refiere “al que”, sin establecer calidad alguna como “al servidor público que” en la cual se requeriría la calidad de Servidor Público.

⁶⁹Idem

Y de una interpretación general del artículo, sin duda se deduce que es una persona que ante una autoridad judicial o administrativa, realice una conducta que encuadre en las hipótesis previstas por el tipo en comentario.

Ya que como se observa en el artículo 20 Constitucional en su fracción IX:

“Artículo 20. En todo proceso de orden penal, el inculpado, la víctima o el ofendido, tendrán las siguientes garantías:

a. del inculpado:

IX. Desde el inicio de su proceso será informado de los derechos que en su favor consigna esta Constitución y tendrá derecho a una defensa adecuada, por sí, por abogado, o por persona de su confianza. Si no quiere o no puede nombrar defensor, después de haber sido requerido para hacerlo, el juez le designara un defensor de oficio. También tendrá derecho a que su defensor comparezca en todos los actos del proceso y este tendrá obligación de hacerlo cuantas veces se le requiera; y,”⁷⁰

Del citado precepto se desprende que la defensa del inculpado puede ser por un abogado o por una persona de confianza, por lo que cualquier persona puede fungir como de confianza en un procedimiento penal, en consecuencia cualquier persona puede incurrir en el delito de fraude procesal.

Del artículo primero del Código de Procedimientos Civiles que a la letra establece:

“Artículo 1.- Sólo puede iniciar un procedimiento judicial o intervenir en él, quien tenga interés en que la autoridad judicial declare o constituya un derecho o imponga una condena y quien tenga el interés contrario.

⁷⁰ Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Podrán promover los interesados, por sí o por sus representantes o apoderados, el Ministerio Público y aquellos cuya intervención esté autorizada por la Ley en casos especiales.”⁷¹

Que pueden iniciar un procedimiento judicial o intervenir en él, quien tenga interés en que la autoridad judicial declare o constituya un derecho o imponga una condena y quien tenga el interés contrario. Por lo que en materia civil tampoco se exige una calidad como la de abogado o servidor público ni cualquier otra para poder optar por iniciar un procedimiento judicial.

La afirmación de que el delito de fraude procesal puede ser cometido por cualquier persona sin calidad específica, encuentra también sustento en la interpretación exegética que del artículo se realice, en virtud de que el legislador, distinguió en el título anterior al que se encuentra el delito de Fraude Procesal, los **DELITOS EN CONTRA DEL ADECUADO DESARROLLO DE LA JUSTICIA COMETIDOS POR SERVIDORES PÚBLICOS**. Y tal como lo he afirmado cuando me refiero al bien jurídico protegido del tipo penal de Fraude Procesal este es la Correcta Administración y Procuración de Justicia, además también se deriva del Título en el que se encuentra nuestro artículo objeto de estudio **DELITOS COMETIDOS POR PARTICULARES ANTE EL MINISTERIO PÚBLICO, AUTORIDAD JUDICIAL O ADMINISTRATIVA**.

Por lo que se refiere al número de sujetos activos que deben intervenir para la comisión del delito de fraude procesal, dicho precepto no exige un número determinado para la existencia del mismo, sino que basta que lo cometa un sólo Sujeto Activo para la existencia del injusto, por lo que afirmo categóricamente que el precepto encuadraría en la clasificación de delito unisubjetivo, esto sin excluir que el delito bien pudiera ser cometido por dos o más personas (coautoría), o que pudiera existir un autor intelectual y otro material, como lo sería en el caso del abogado que recomienda a otro la realización de una de las conductas previstas por el tipo de Fraude Procesal.

⁷¹ Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal.

Por lo que desde este momento propongo al legislador que debe agravar la pena, cuando en la conducta típica intervenga un Licenciado en Derecho o Abogado, que ha sabiendas de que está cometiendo el Delito de Fraude Procesal, es decir, que no sea víctima del engaño de su cliente, sino que esté consiente que alega hechos falsos.

En relación al Sujeto Pasivo de la Conducta, como he afirmado es el titular del bien jurídico protegido que se pone en peligro o se le causa un daño. Es necesario recordar que el bien jurídico protegido es la correcta administración y procuración de la justicia, por lo que afirmo que el titular en un principio es la Sociedad en su conjunto, quien se la cede al Estado y éste a su vez la delega en autoridades administrativas y judiciales, como los tribunales, el Ministerio Público, las Juntas del Trabajo, etc. por lo que en principio es Sujeto Pasivo del Delito de Fraude Procesal:

- La Sociedad
- El Estado (en su carácter de superestructura)
- Autoridades Administrativas y Judiciales (Tribunales, Ministerio Público, Juntas del Trabajo, etc.)

“En la estafa procesal el inducido al error es el juez y el perjudicado la parte contra la que recae la sentencia fundamentada en el error.”⁷²

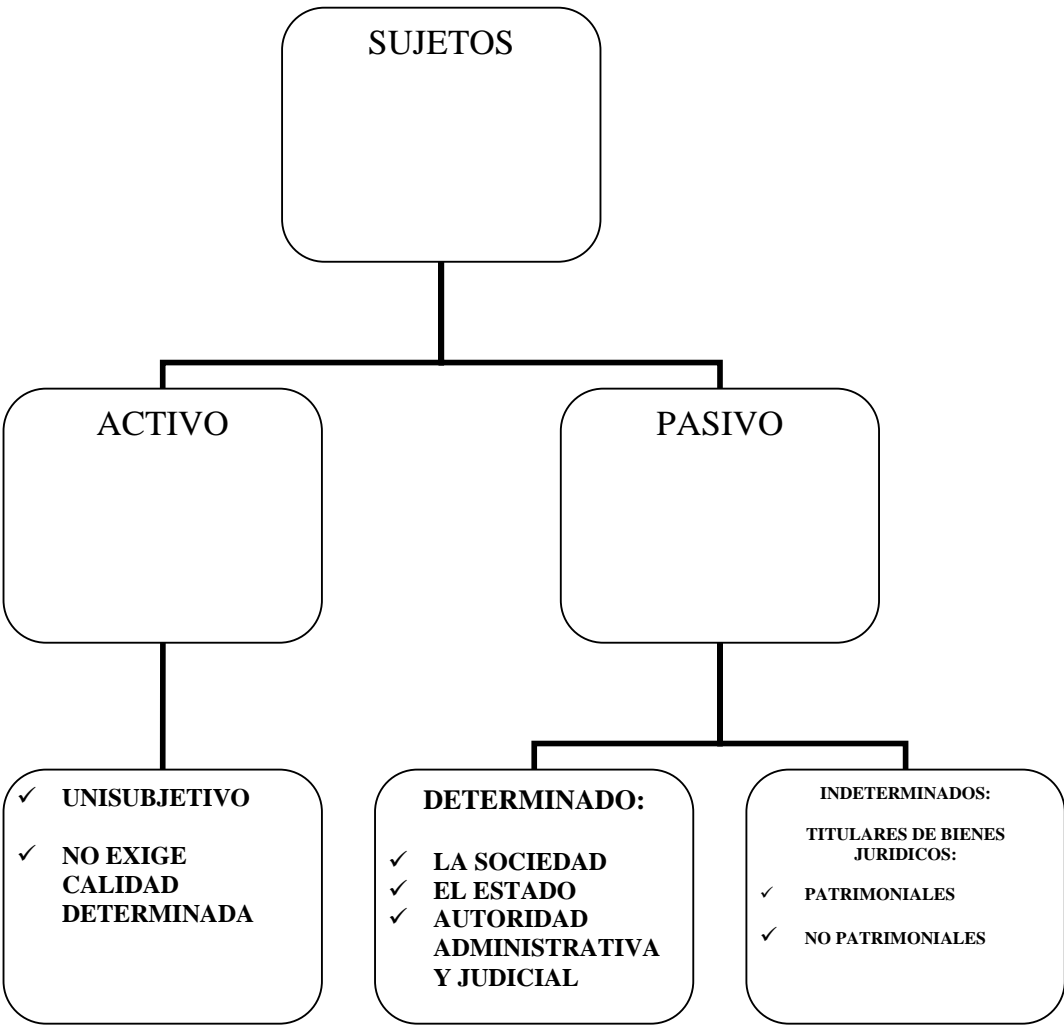
Pero también la comisión del Delito de Fraude Procesal, puede afectar a otros bienes jurídicos protegidos, como el patrimonio y otros no patrimoniales, en razón de lo anterior, así como siempre tendrá como bien jurídico protegido a la Correcta Administración y Procuración de Justicia como bien Jurídico Protegido determinado y en consecuencia, siempre serán sujetos pasivos del delito la Sociedad, el Estado, las Autoridades Administrativas y Judiciales, también se da el caso de que con la misma comisión del Delito puedan surgir más Sujetos Pasivos del Delito, como el titular del patrimonio puesto en peligro o dañado.

⁷² Cfr. FONTÁN, Carlos, *Derecho Penal*, ed. Abeledo-Perrots, Argentina, 1990, p.494.

Es criticable que el legislador considere el daño patrimonial, cuando puede ser que no exista sujeto Pasivo titular del mismo, por lo tanto propongo desde este momento que se modifique dicha situación.

En el mismo sentido el artículo establece que el delito es perseguible por querella, siendo esto desde mi punto de vista incorrecto, ya que, si no existe un daño patrimonial superior a cinco mil veces el salario mínimo y no se querella, el Ministerio Público queda imposibilitado a actuar.

Además si se considera al Sujeto Pasivo como la Autoridad que conoce del asunto en el que se cometió Fraude Procesal, se le debería de imponer la obligación de, una vez que se percate de la probable comisión de este delito lo denuncie al Ministerio Público.



3.4 Cosas.

Como ya se dijo en el Capítulo segundo en el punto 2.4 del presente trabajo, por cosas se entiende a los entes u objetos materiales o inmateriales involucrados en un tipo penal, corporales e incorporeales; siendo corporales, las que pueden tocarse o se hayan en la esfera de los sentidos; e incorporeales las que no existen, sino intelectualmente o no caen en la esfera de los sentidos.

En base al concepto dado, procederé al análisis de las “Cosas” contempladas en el tipo penal de Fraude Procesal establecido en el artículo 310 del Código Penal para el Distrito Federal:

“ARTÍCULO 310. Al que para obtener un beneficio indebido para sí o para otro, simule un acto jurídico, un acto o escrito judicial o altere elementos de prueba y los presente en juicio, o realice cualquier otro acto tendiente a inducir a error a la autoridad judicial o administrativa, con el fin de obtener sentencia, resolución o acto administrativo contrario a la ley, se le impondrán de seis meses a seis años de prisión y de cincuenta a doscientos cincuenta días multa. Si el beneficio es de carácter económico, se impondrán las penas previstas para el delito de fraude.

Este delito se perseguirá por querrela, salvo que la cuantía o monto exceda de cinco mil veces el salario mínimo general vigente en el Distrito Federal, al momento de realizarse el hecho.”⁷³

De la lectura del artículo 310 del Código Penal del Distrito Federal y en base a la definición dada, se desprenden los siguientes elementos que encuadran en el concepto de Cosas, cabe mencionar que además son elementos normativos, en virtud de que a efecto de definirlos se requiere realizar una valoración jurídica, a continuación analizare cada uno de ellos:

⁷³ Código Penal para el Distrito Federal.

- a) Los actos jurídicos.**
- b) Los actos judiciales simulados**
- c) Los escritos judiciales simulados**
- d) Los elementos de prueba alterados**
- e) Los actos (cualquier otro distinto a simular o alterar pruebas), que tengan como fin inducir al error a la autoridad Judicial o Administrativa.**

El acto jurídico es el que realiza el ser humano en el que interviene su voluntad y produce consecuencias de Derecho.

En el contexto del artículo 310 del Código Penal del Distrito Federal, en virtud de que esta hipótesis únicamente prevé como sujeto activo del delito a los particulares y no a las autoridades, se entienden como actos judiciales los actos que realiza el particular ante las autoridades, entendiendo por esto los documentos que se presentan ante la autoridad, en consecuencia diré que hay una similitud entre los actos judiciales y escritos judiciales. Aunque por los primeros se entiende la presentación de un contrato inexistente y la del escrito Judicial una promoción dirigida a la autoridad.

Respecto de los elementos de prueba diré que a pesar de que la legislación establece de forma enunciativa algunas, los elementos de prueba son todos aquellos que forman convicción en la autoridad respecto de los hechos que conoce.

Hay que hacer énfasis en que las hipótesis son meramente enunciativas y no limitativas, en el sentido de que el legislador ha dejado abierta la posibilidad de que el injusto sea cometido por otros actos con la única condición de que tengan el fin de ocasionar la falsa apreciación de la realidad de la autoridad.

3.5 Resultado.

Como ya se apunto en el Capítulo anterior en el punto 2.5, en términos jurídicos el resultado es el objetivo hacia el cual tiende la acción. Es la completa realización de la conducta típica.

Se distinguen dos clases de resultado:

Formal: en estos delitos el resultado es una mera actividad corporal por parte del sujeto activo, es decir, no es necesario que se produzca una mutación en el mundo exterior.

Material: en estos es necesario que se produzca un cambio en el mundo exterior en especial en el objeto material del delito.

Existe una controversia en el sentido de determinar si el Delito de Fraude Procesal es de resultado formal o material, mi postura es que este delito es de resultado formal, es decir, de mera actividad. Esto encuentra sustento en las siguientes apreciaciones que del tipo realicé:

Basta que se simule un acto jurídico, acto o escrito judicial, se alteren elementos de prueba y se presenten en juicio o se realice cualquier otro acto tendiente a inducir a error a la autoridad judicial o administrativa. No parecería razonable si se pensara que, así como se requiere de una simulación apreciable en el mundo exterior o la alteración concreta de elementos de prueba, de la misma forma fuera necesaria esa mutación del mundo exterior, que es tangible.

A efecto de sostener mi criterio diré que los verbos rectores de la descriptiva letrística penal, no pueden ser considerados como el resultado de la conducta desplegada por el sujeto activo del delito, en el caso que me ocupa los verbos rectores son el “simular “ o “alterar “ toda vez que sería ilógico pensar que la conducta que despliega el ser humano evidentemente produce cambios en la naturaleza pero no todos esos cambios o mutaciones en la naturaleza son tomados en cuenta por el legislador.

Respecto de si es un delito de lesión o de peligro, afirmo categóricamente que el delito de fraude procesal previsto en el artículo 310 del Código Penal para el Distrito Federal es de peligro, esto en función de que el obtener una sentencia, resolución o acto administrativo contrario a la ley presupone una mera posibilidad, ya que no es requisito indispensable del tipo penal la existencia de la sentencia, resolución o acto administrativo contrario a la ley, sino por el contrario basta con la simulación de un acto jurídico, acto o escrito judicial, con la alteración de pruebas para que la conducta se ajuste a la hipótesis normativa. Toda vez que como quedó determinado el bien jurídico protegido del Fraude Procesal es la Correcta Administración y Procuración de Justicia, la comisión del delito la pone en peligro, pero no es requisito que la misma se lesione, como en el caso de que se obtuviera la sentencia, resolución o acto administrativo contrario a la ley.

No se debe perder de vista que como lo dije, cuando traté lo relativo al bien jurídico protegido, existe un bien jurídico que es la Correcta Administración y Procuración de Justicia de forma directa y otro indirecto que podría ser patrimonial o no patrimonial, este segundo bien jurídico protegido correrá la misma suerte que el principal, en razón de que se pondrá en peligro, sin ser requisito que se le dañe.

Esto además encuentra sustento en la siguiente tesis:

Registro No. 179023. Localización: Novena Época. Instancia: Tribunales. Colegiados de Circuito. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. XXI, Marzo de 2005. Página: 1132. Tesis: XVII.2o.P.A.24 P. Tesis Aislada. Materia(s): Penal.

“FRAUDE PROCESAL, DELITO DE. PROTEGE PRIMORDIALMENTE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA Y EN FORMA SECUNDARIA AL PATRIMONIO. ES UN DELITO DE PELIGRO PATRIMONIAL, NO NECESARIAMENTE DE RESULTADO (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA).

*El artículo 142 del Código Penal del Estado de Chihuahua, que tipifica el delito de **fraude procesal** y de su inclusión en el título denominado "Delitos contra la administración de justicia", se concluye que se trata de una figura típica compleja, pues protege dos bienes jurídicos, la administración de justicia primordialmente y en forma secundaria el patrimonio, pues es frecuente que se utilice fraudulentamente a los tribunales con el fin de obtener beneficios de orden patrimonial y para su consumación basta con que se dé la simulación de actos jurídicos o la alteración de elementos de prueba, con el fin de obtener una resolución jurisdiccional de la que se derive alternativamente el perjuicio de alguien o un beneficio indebido, con lo que se afecta el primer bien jurídico tutelado; y por lo que se refiere al segundo de ellos, no se requiere necesariamente la disposición ni la disminución del patrimonio, dado que se trata de un delito de peligro patrimonial, pues en su descripción penal se modifica el requisito de cosa o del logro del lucro indebido, necesario para la consumación del **fraude** genérico, al señalarse en dicho tipo penal "... que se derive el perjuicio de alguien o un beneficio indebido ..." y no "... se hace ilícitamente de una cosa o alcanza un lucro indebido ...", lo que no desnaturaliza el bien jurídico que en segundo término protege la norma, porque sanciona la conducta tendente a afectarlo. Luego, si en el caso, el sujeto activo del delito altera elementos de prueba y por medio de ello obtiene una resolución jurisdiccional mediante la cual se le reconoce como cónyuge supérstite y única y universal heredera y, además, como albacea, en un juicio sucesorio intestamentario, no obstante que anteriormente haya promovido un diverso juicio de tal naturaleza señalando como herederos a sus hijos, y en virtud de aquella declaratoria enajena bienes del caudal hereditario y los da en garantía, se actualiza la figura típica de **fraude procesal**, pues con la alteración de pruebas y el consecuente dictado de la resolución jurisdiccional favorable se afecta la administración de justicia y, además, se pone en peligro el patrimonio, que es el bien jurídico tutelado, pues con tal declaratoria se le coloca en una posición privilegiada respecto de los demás herederos, ya que al ser reconocida única y universal heredera y, además, albacea, está en posición legal de efectuar actos lucrativos en su beneficio y en perjuicio del patrimonio de aquéllos, y al haber enajenado y gravado bienes de la sucesión utilizando ese doble carácter evidencia la finalidad de la conducta que se le reprocha, o sea, afectar el patrimonio del sujeto pasivo."*

SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS PENAL Y ADMINISTRATIVA DEL DÉCIMO SÉPTIMO CIRCUITO.

Amparo directo 247/2004. 10 de diciembre de 2004. Unanimidad de votos.
Ponente: Ángel Gregorio Vázquez González. Secretaria: Natalia López López.

3.6. Elementos objetivos.

Como ya se dijo en el Capítulo anterior al tratar el tema de los elementos objetivos son los elementos descriptivos susceptibles de ser apreciados por los sentidos (vista, tacto, gusto, oído, olfato).

“Los elementos objetivos del tipo penal son los que abarcan el aspecto externo de la conducta: aquellos elementos descritos del tipo que proceden del mundo externo y, por ende, son perceptibles por los sentidos externos de la persona, es decir, tienen como característica el ser tangibles, externos o materiales. Son elementos que precisamente por ser objetivos, representan cosas, hechos o situaciones del mundo circundante.”⁷⁴

Con las premisas dadas en el Capítulo segundo de la presente tesis y las establecidas en las líneas precedentes, procederé a analizar los elementos objetivos del tipo penal de fraude procesal del Código Penal Vigente en el Distrito Federal.

“ARTÍCULO 310. Al que para obtener un beneficio indebido para sí o para otro, simule un acto jurídico, un acto o escrito judicial o altere elementos de prueba y los presente en juicio, o realice cualquier otro acto tendiente a inducir a error a la autoridad judicial o administrativa, con el fin de obtener sentencia, resolución o acto administrativo contrario a la ley, se le impondrán de seis meses a seis años de prisión y de cincuenta a doscientos cincuenta días multa. Si el beneficio es de carácter económico, se impondrán las penas previstas para el delito de fraude.

⁷⁴ REQUENA, Carlos. *FRAUDE PROCESAL*, 1ª ed., PORRÚA, México, 2007, pág. 10.

***Este delito se perseguirá por querella, salvo que la cuantía o monto exceda de cinco mil veces el salario mínimo general vigente en el Distrito Federal, al momento de realizarse el hecho.*”⁷⁵**

El primer elemento objetivo que salta a la vista, es el referente al sujeto activo del delito, el cual se encuentra dentro de la frase “al que”, del tipo penal objeto de estudio, el cual ya fue analizado, dentro del tema de los “sujetos”. Por lo que únicamente me limitare a establecer, que tratándose de este tipo en concreto el sujeto activo del delito es una persona física, sin una calidad específica (el tipo no exige, que sea una autoridad, o que conlleve una relación como las de parentesco o resultante de una relación laboral), el tipo no requiere mas que a un sólo sujeto, para llevar a cabo la comisión del injusto.

Del mismo modo que el sujeto activo, el pasivo, constituye un elemento objetivo del tipo penal, y como ya lo establecí, este tipo penal pluriofensivo, contempla como sujetos pasivos del delito en primera instancia con lo que conlleva a la autoridad judicial o administrativa y puede presentarse el caso en el cual también sea sujeto pasivo del delito un particular.

Los siguientes elementos objetivos que se encuentran en el tipo penal de fraude procesal, son los referentes a:

Acto jurídico,

Acto judicial

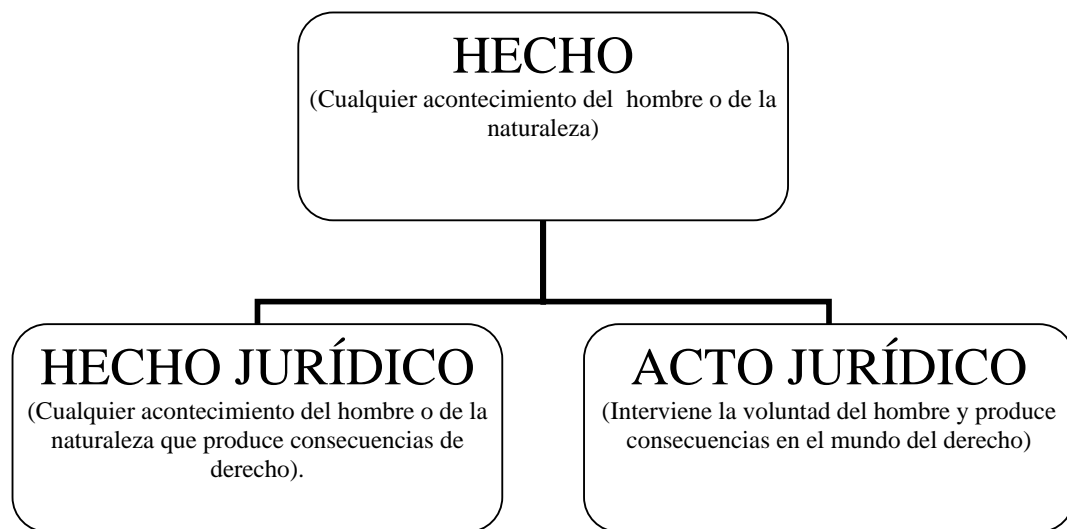
Escrito judicial

Elementos de prueba

Cualquier otro acto tendiente a inducir a error a la autoridad judicial

Por lo que respecta a estos elementos, ya fueron analizados dentro del tema relativo a cosas, por lo que únicamente diré que el Acto Jurídico, según la teoría que lleva el mismo nombre, hecha por los franceses (bipartita), representa una especie del hecho en general:

⁷⁵ Código Penal para el Distrito Federal.



Lo anterior es una razón de porqué el Acto Jurídico es un elemento objetivo del tipo, toda vez que según la definición dada, los elementos objetivos son también hechos.

A este respecto, es importante mencionar que tanto el Código Penal ni el de Procedimientos Penales, definen lo que se debe entender por elementos objetivos, subjetivos o normativos del tipo, a pesar de lo anterior los tribunales federales han emitido, diversos criterios, donde utilizan estos términos, lo que en mi opinión constituye una violación al principio de legalidad establecido en el artículo 14 Constitucional, ya que ha existido controversia en relación con lo establecido en el artículo 122 del Código Penal para el Distrito Federal, ya que algunos tribunales han determinado que el Ministerio Público únicamente debe de acreditar los elementos objetivos del tipo y no los subjetivos y otros han establecido que se deben de acreditar ambos. Es por ello que el criterio a efecto de determinar tanto a los elementos objetivos como subjetivos y normativos, no deja de ser meramente la doctrina.

Ya mencioné la similitud existente entre al acto y escrito judicial, además de explicar en qué consiste cada uno por lo que respecta al acto; este es el que realizan los particulares ante una autoridad, ya sea judicial o administrativa, el

cual por lo general se realiza a través de escritos judiciales, por lo que no dejan de ser elementos objetivos, es decir, deben ser apreciados por la autoridad, partiendo de esa lógica, estos elementos son objetivos en el tipo penal en estudio.

Los elementos de prueba, son aquellos elementos que la persona que acude ante la autoridad judicial o administrativa utiliza para crear convicción en dicha autoridad, por ejemplo un acta de matrimonio que se presenta ante el Instituto Nacional de Migración, con el fin de obtener la regularización migratoria, estos deben ser objetivos, es decir, perceptibles para la autoridad.

“Cualquier otro acto tendiente a inducir a error a la autoridad judicial”, como ya se estableció el acto, implica por sí un hecho, por lo que sin duda indica que este es un elemento objetivo del tipo penal, el cual ya fue analizado.

Se encuentra dentro del tipo penal de Fraude Procesal una referencia de ocasión al exigir la descriptiva que los elementos de prueba alterados sean presentados en **“Juicio”**, es decir, el sujeto activo del delito debe aprovechar la ocasión de un “Juicio” a efecto de presentar los elementos de prueba, por lo que se refiere a este elemento objetivo, lo analizaré con mayor profundidad, cuando me refiera a los elementos normativos del tipo.

Considero que deben ser tomados en cuenta como elementos objetivos del tipo: La Sentencia, resolución o acto administrativo, toda vez, **que como lo establece el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos:**

“NADIE PUEDE SER MOLESTADO EN SU PERSONA, FAMILIA, DOMICILIO, PAPELES O POSESIONES, SINO EN VIRTUD DE MANDAMIENTO ESCRITO DE LA AUTORIDAD COMPETENTE, QUE FUNDE Y MOTIVE LA CAUSA LEGAL DEL PROCEDIMIENTO.”⁷⁶

⁷⁶ Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Al referirse el Constituyente a “autoridad”, no distinguió entre la autoridad administrativa o judicial, en ese orden de ideas, se debe de considerar que a pesar de que en el texto del tipo penal de Fraude Procesal se establece que la resolución, sentencia o acto administrativo, únicamente son una finalidad, y que en su contexto, no se requiere, su existencia, los mismos son elementos objetivos, ya que la Constitución exige, que las anteriores sean por escrito.

En conclusión, diré que dentro del tipo penal de fraude procesal, identificamos los siguientes elementos objetivos:

- **Sujeto Activo,**
- **Sujeto Pasivo o Sujetos Pasivos,**
- **Acto jurídico,**
- **Acto judicial,**
- **Escrito judicial,**
- **Elementos de prueba,**
- **Cualquier otro acto tendiente a inducir a error a la autoridad judicial,**
- **Cualquier otro acto tendiente a inducir a error a la autoridad administrativa,**
- **Juicio,**
- **La Sentencia,**
- **Resolución,**
- **Acto administrativo.**

3.7. Elementos subjetivos.

Los elementos subjetivos del tipo penal van a atender a la intención, al ánimo que tuvo el sujeto activo o debe tener, en la realización de algún ilícito penal,

es decir, atiende a circunstancias que se dan en el mundo interno del sujeto activo.

El legislador no toma en cuenta únicamente el aspecto externo en las descripciones típicas, sino como en el caso de los delitos dolosos, toma en cuenta la intencionalidad del sujeto

Para el maestro González Quintanilla los elementos subjetivos:

“Consisten en la finalidad, ánimo, propósito o tendencia del sujeto en su yo interno, que lo impulsan a la realización del delito.”⁷⁷

Por lo que a la luz de lo anterior analizaré el tipo penal de Fraude Procesal:

“ARTÍCULO 310. Al que para obtener un beneficio indebido para sí o para otro, simule un acto jurídico, un acto o escrito judicial o altere elementos de prueba y los presente en juicio, o realice cualquier otro acto tendiente a inducir a error a la autoridad judicial o administrativa, con el fin de obtener sentencia, resolución o acto administrativo contrario a la ley, se le impondrán de seis meses a seis años de prisión y de cincuenta a doscientos cincuenta días multa. Si el beneficio es de carácter económico, se impondrán las penas previstas para el delito de fraude.

Este delito se perseguirá por querrela, salvo que la cuantía o monto exceda de cinco mil veces el salario mínimo general vigente en el Distrito Federal, al momento de realizarse el hecho.”⁷⁸

El tipo penal de Fraude Procesal establece claramente, como requisito de existencia que el Sujeto Activo del Delito, tenga la intención de obtener un beneficio indebido, ya sea para sí o para otro.

⁷⁷ Cfr. GONZÁLEZ QUINTANILLA, Arturo. *Op. Cit.*, pág. 656

⁷⁸ Código Penal para el Distrito Federal.

Es decir, la simulación del acto jurídico, del acto o del escrito judicial o la alteración de los elementos de prueba y la presentación en juicio, o la realización de cualquier otro acto tendiente a inducir a error a la autoridad judicial, deben de tener como finalidad el obtener un beneficio indebido, para el Sujeto Activo del Delito u otra persona.

Por lo que en consecuencia, diré que son elementos Subjetivos del tipo penal de Fraude Procesal, la finalidad del Sujeto Activo de obtener un beneficio indebido para sí o para otro, todo esto se infiere de la frase **“Al que para obtener un beneficio indebido para sí o para otro”**.

Para la existencia del injusto, no solamente es necesaria la intención del Sujeto Activo de obtener un beneficio indebido, para sí o para otro, sino que además debe de tener el fin de obtener sentencia, resolución o acto administrativo contrario a la ley. Es decir, el Sujeto Activo del Delito, deberá tener la finalidad de obtener un beneficio indebido para sí o para otro y al mismo tiempo de obtener una sentencia, resolución o acto administrativo contrario a la ley.

No escapa del análisis, la hipótesis descrita en el tipo penal que hace referencia a: **“realice cualquier otro acto tendiente a inducir a error a la autoridad judicial o administrativa”**, con esta hipótesis el legislador, como ya lo he analizado, trató de dejar abierta la posibilidad de sancionar, no exclusivamente las conductas que sí delimitó, como las de simular o alterar, en sus respectivos supuestos, por lo que cualquier otro acto que no encuadre en las demás hipótesis, deberá, por fuerza ser con la finalidad de inducir al error a la autoridad judicial.

Por lo que diré que a efecto de que el Ministerio Público pueda acreditar los extremos que requiere el artículo 122 del Código de Procedimientos Penales del Distrito Federal, respecto del cuerpo del delito, el Ministerio Público, no únicamente debería de acreditar los elementos objetivos sino los subjetivos, toda vez, que el tipo penal objeto de análisis, requiere a estos de forma indispensable, por ejemplo la hipótesis de cualquier otro acto tendiente a

inducir al error a la autoridad judicial. Sin duda A este respecto, resultaría aplicable el siguiente criterio, basado en la legislación federal:

Registro No. 185698. Localización: Novena Época Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. XVI, Octubre de 2002. Página: 1414. Tesis: I.5o.P.23 P. Tesis Aislada
Materia(s): Penal.

“ORDEN DE APREHENSIÓN. PARA SU DICTADO DEBEN ANALIZARSE LOS ELEMENTOS SUBJETIVOS ESPECÍFICOS CUANDO LA DESCRIPCIÓN TÍPICA LOS CONTEMPLE EN EL CÓDIGO PENAL FEDERAL.

Uno de los aspectos torales en que se basa el proceso penal es la comprobación del cuerpo del delito, figura jurídica de carácter procesal que permite al juzgador tener la certeza de la comisión de un hecho descrito en un tipo penal, entendiéndose este último como la definición formal del delito; y conforme a lo establecido en el artículo 168 del Código Federal de Procedimientos Penales, el cuerpo del delito se integra por el conjunto de elementos objetivos o externos que constituyen la materialidad del hecho que la ley señala como delito, así como los normativos en caso de que la descripción típica lo requiera; además, de acuerdo con lo ordenado en el párrafo primero del numeral 134 del citado ordenamiento legal, el Ministerio Público, al ejercer la acción penal, expresará, entre otros aspectos, sin necesidad de acreditarlos plenamente, los elementos subjetivos específicos (distintos del dolo) que también conformen la figura típica; por lo que en atención a este último precepto legal, al dictarse una orden de aprehensión, para mayor seguridad jurídica del indiciado, es necesario que se analicen los elementos subjetivos específicos cuando la descripción legal los contemple, con independencia de que el Juez de la causa los estime plenamente comprobados o no, después de que se haya pronunciado el auto de formal prisión o de sujeción a proceso, según el caso, a fin de que el enjuiciado pueda formular una adecuada defensa durante la secuela procedimental.”

QUINTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL PRIMER CIRCUITO.

Amparo en revisión 475/2002. 29 de mayo de 2002. Unanimidad de votos.

Ponente: Horacio Armando Hernández Orozco. Secretario: Mario Ariel

Acevedo Cedillo.

Por último diré que el tipo penal que se analiza, es un delito que solamente puede ser cometido de forma dolosa, toda vez que el Sujeto Activo, en todo momento sabe que está cometiendo un delito, desea el resultado típico y aún así lo realiza, tal y como lo establece el artículo 18 del Código Penal para el Distrito Federal:

“ARTÍCULO 18 (Dolo y Culpa). Las acciones u omisiones delictivas solamente pueden realizarse dolosa o culposamente.

Obra dolosamente el que, conociendo los elementos objetivos del hecho típico de que se trate, o previendo como posible el resultado típico, quiere o acepta su realización.

Obra culposamente el que produce el resultado típico, que no previó siendo previsible o previó confiando en que no se produciría, en virtud de la violación de un deber de cuidado que objetivamente era necesario observar.”⁷⁹

Además del mismo artículo 76 del Código Penal para el Distrito Federal, no contempla como culposo al delito de fraude procesal:

“Sólo se sancionarán como delitos culposos los siguientes: Homicidio, a que se refiere el artículo 123; Lesiones, a que se refiere el artículo 130 fracciones II a VII; Aborto, a que se refiere la primera parte del párrafo segundo del artículo 145; Lesiones por Contagio, a que se refiere el artículo 159; Daños, a que se refiere el artículo 239; Ejercicio ilegal del Servicio Público, a que se refieren las fracciones III y IV del artículo 259, en las hipótesis siguientes: destruir, alterar o inutilizar información o documentación bajo su custodia o a la cual tenga acceso; propicie daños pérdida o sustracción en los supuestos de la fracción IV del artículo 259;

⁷⁹Idem

Evasión de Presos, a que se refieren los artículos 304, 305, 306 fracción II y 309 segundo párrafo; Suministro de Medicinas Nocivas o Inapropiadas a que se refieren los artículos 328 y 329; Ataques a las Vías y a los Medios de Comunicación a que se refieren los artículos 330, 331 y 332; Delitos contra el Ambiente, a que se refieren los artículos 345 y 346; y los demás casos contemplados específicamente en el presente Código y otras disposiciones legales.⁸⁰

3.8. Elementos normativos.

Como ya se dijo en el Capítulo segundo al analizar el concepto de los elementos normativos, estos son aquellas situaciones o conceptos complementarios, impuestas en los tipos que requieren de una valoración cognoscitiva, jurídica, cultural o social.

De la anterior definición se establece que la valoración puede ser cognoscitiva, jurídica, cultural o social.

Por lo que a la luz de la anterior definición de elementos normativos, analizaré el tipo penal de fraude procesal del Código Penal para el Distrito Federal:

“ARTÍCULO 310. Al que para obtener un beneficio indebido para sí o para otro, simule un acto jurídico, un acto o escrito judicial o altere elementos de prueba y los presente en juicio, o realice cualquier otro acto tendiente a inducir a error a la autoridad judicial o administrativa, con el fin de obtener sentencia, resolución o acto administrativo contrario a la ley, se le impondrán de seis meses a seis años de prisión y de cincuenta a doscientos cincuenta días multa. Si el beneficio es de carácter económico, se impondrán las penas previstas para el delito de fraude.

⁸⁰ Idem

Este delito se perseguirá por querrela, salvo que la cuantía o monto exceda de cinco mil veces el salario mínimo general vigente en el Distrito Federal, al momento de realizarse el hecho.”⁸¹

De la lectura del tipo penal de fraude procesal identifiqué los siguientes elementos normativos:

- **Simular un acto jurídico**
- **Simular un acto judicial**
- **Simular un escrito judicial**
- **Alterar elementos de prueba**
- **Juicio**
- **Inducción a error**
- **Autoridad judicial**
- **Autoridad administrativa**
- **Sentencia contraria a la ley**
- **Resolución contraria a la ley**
- **Acto administrativo contrario a la ley**

Como ya se dijo, la simulación del acto jurídico, debe de ser analizada, tomando en cuenta lo establecido en el Código Civil para el Distrito Federal en el artículo 2180 que de manera literal, conceptúa, qué se debe de entender por la simulación del Acto Jurídico:

“Artículo 2180.- Es simulado el acto en que las partes declaran o confiesan falsamente lo que en realidad no ha pasado o no se ha convenido entre ellas.”⁸²

⁸¹ Código Penal para el Distrito Federal.

⁸² Código Civil para el Distrito Federal.

Por lo que desde esta óptica, este elemento normativo es jurídico, en virtud de que el Ministerio Público, o el Juzgador, deberán de atender, lo establecido, por el precepto civil, en la aplicación de la norma penal, siendo en el caso que me ocupa la de Fraude Procesal.

El verbo Simular, implica, el fingir algo que no ha pasado. Se entiende por simular:

“Simular tanto significa gramaticalmente como representar una cosa fingiendo o imitando lo que no es.”⁸³

Por lo que resulta por demás indispensable determinar que se entiende por el “Acto Jurídico”, a este respecto es indispensable hacer la aclaración, que doctrinalmente existen principalmente dos teorías una llamada bipartita y otra tripartita, siendo el caso que nuestra legislación se apega, por la influencia napoleónica (francesa) a la teoría bipartita, la cual distingue únicamente al hecho jurídico y al acto jurídico, definiendo a este último, como un acontecimiento voluntario del hombre que produce consecuencias de Derecho.

Por lo que considero incorrecto pensar, que esta hipótesis, únicamente deba referirse a los actos bilaterales (contratos y convenios), siendo un ejemplo clásico de esto, un supuesto “contrato” celebrado entre dos personas, en el cual no existe su consentimiento (acuerdo de voluntades en el mismo sentido), sino que es celebrado con el fin de obtener un beneficio y perjudicar a un tercero. Como es el caso de la celebración de un supuesto contrato de hipoteca, el cual no tiene como objeto garantizar una obligación existente, sino únicamente el de evitar ser embargado por un tercero. Ya que la simulación también se puede presentar en los actos unilaterales, como el de la declaración unilateral de la voluntad, podría darse el caso de un acuerdo previo, respecto de la persona que recibirá los beneficios, como en el caso de un concurso, el declarante, previamente acuerda con una persona de su

⁸³ JIMÉNEZ HUERTA, Mariano, *Derecho Penal Mexicano Tomo IV La Tutela Penal del Patrimonio*, 7ª ed. Porrúa, México, 2003, p. 147

confianza, darle las facilidades necesarias dentro del concurso a efecto de que el sea el ganador.

Por lo que respecta a la **simulación del acto judicial**, hago la aclaración de que este delito únicamente puede ser llevado a cabo por un particular, siendo el caso que los funcionarios judiciales, no lo pueden cometer, cuando menos en el ejercicio de sus funciones, ya que en todo caso surgiría la actualización de otra figura típica distinta, pero no la de fraude procesal, por lo que se debe entender como actos judiciales, los que realizan los particulares ante la autoridad judicial, como la presentación de escritos, siendo por lo tanto el acto judicial y **los escritos judiciales** en la práctica lo mismo.

Dice el maestro Eduardo Pallares: *“El acto judicial es el que se lleva a cabo por funcionarios judiciales en ejercicio de sus funciones. También se llaman actos judiciales los autos, decisiones, decretos y providencias de los jueces y magistrados. En síntesis, pudiera decirse que el acto judicial es el realizado por las autoridades judiciales en ejercicio de sus funciones, o por los particulares ante ellas y con relación a dichas funciones.”*⁸⁴

Por lo que en síntesis diré:

Simular un acto jurídico.- Es cuando se presenta de forma engañosa una manifestación de voluntad tendiente a producir consecuencias de Derecho como si en verdad existiera cuando en verdad no existe. Esta hipótesis es la que se identifica con el artículo 2180 del Código Civil Vigente en el Distrito Federal. Ya que el Sujeto o los Sujetos fingen la existencia de la voluntad (cuando es unilateral) o del Consentimiento (bilateral) sin que en el mundo fáctico exista.

⁸⁴ PALLARES, Eduardo, Diccionario de Derecho Procesal Civil, Ed. 27ª Editorial Porrúa, México, 2003, p. 61.

Simular un acto judicial.- Se presenta cuando el sujeto activo presenta de forma engañosa un documento tendiente a obtener una decisión decreto o providencia de los jueces o magistrados.

Simular un escrito Judicial.- Se presenta cuando un sujeto activo presenta de forma engañosa un documento que va dirigido a una autoridad judicial y contiene algún pedimento declaración o alegato relacionado con el proceso y para que surta efectos en él.

Respecto a **Alterar elementos de prueba**, de la tesis citada se deriva, que por alterar se entiende: **modificar, afectar o adulterar la esencia o forma de algo.**

“El simular un acto judicial o escrito judicial es lo mismo para los efectos del artículo que nos ocupa.”⁸⁵

Y por elementos de prueba se entiende, a aquellos elementos que las partes utilizan para causar convicción en el Juzgador, en cuanto a los hechos controvertidos:

“La actividad cuyo objeto consiste en verificar la exactitud de los datos fácticos que las partes incorporan al proceso a través de sus afirmaciones reciben el nombre de prueba, cuyo objetivo es la producción del convencimiento psicológico del órgano judicial, la expresión prueba, en el lenguaje procesal tiene tres significados fundamentales. Desde un primer punto de vista, en efecto denota la peculiar actividad que se despliega durante el transcurso del proceso por obra de las partes y del órgano judicial (con la finalidad del convencimiento psicológico por parte del juzgador). En segundo lugar, por prueba se entiende asimismo el conjunto de modos u operaciones (medios de prueba) del que se extraen, por conducto de la fuente que se proporcionan, las razones generadoras de la convicción judicial. Finalmente, la prueba significa

⁸⁵ HERNANDEZ-ROMO, Pablo, *El Fraude Procesal Penal*, ed. Oxford, México, 2004, p 25.

el hecho mismo de la convicción judicial, es decir, el convencimiento psicológico.”⁸⁶

Los principales medios de prueba, contemplados en las diversas legislaciones son: Documentales Públicas y Privadas, la Confesional, La Testimonial, La Pericial, La Instrumental, La Presuncional, etc.

Aunque en este sentido la hipótesis de “alterar elementos de prueba”, puede entrar en concurso con otras hipótesis, como sería el caso de las Documentales Públicas y Privadas, toda vez que esta conducta encuadra también en la hipótesis prevista en el artículo 339 del Código Penal para el Distrito Federal:

“FALSIFICACIÓN O ALTERACIÓN Y USO INDEBIDO DE DOCUMENTOS

ARTÍCULO 339. *Al que para obtener un beneficio o causar un daño, falsifique o altere un documento público o privado, se le impondrán de tres a seis años de prisión y de cien a mil días multa, tratándose de documentos públicos y de seis meses a tres años de prisión y de cincuenta a quinientos días multa, tratándose de documentos privados. Las mismas penas se impondrán al que, con los fines a que se refiere el párrafo anterior, haga uso de un documento falso o alterado o haga uso indebido de un documento verdadero, expedido a favor de otro, como si hubiere sido expedido a su nombre, o aproveche indebidamente una firma o rúbrica en blanco.”⁸⁷*

Por lo tanto considero que esta hipótesis se encontrará dentro de un concurso ideal, tal y como lo establece el artículo 28 del Código Penal para el Distrito Federal, el cual con relación al 79, da la solución al problema:

“ARTÍCULO 28 *(Concurso ideal y real de delito). Hay concurso ideal, cuando con una sola acción o una sola omisión se cometen varios delitos.*

⁸⁶ Cfr. PALACIO, Enrique. *Derecho Procesal Civil tomo IV Actos Procesales*, Editorial Abeledo-Perot, Argentina, 1967, pp. 327-331.

⁸⁷ Código Penal para el Distrito Federal.

Hay concurso real, cuando con pluralidad de acciones u omisiones se cometen varios delitos.

No hay concurso cuando las conductas constituyan un delito continuado.

En caso de concurso de delitos se estará a lo dispuesto en el artículo 79 de este Código.”⁸⁸

Al respecto un autor Argentino refiere cuando desapareció del Código Penal Argentino la Estafa Procesal:

“Si tenemos en cuenta que el principio de subsidiaridad operaba en esta figura respecto de otras muchas, con relación a las cuales las conductas enumeradas podían aparecer como medios comisivos de estas, es lógico pensar que el campo de impunidad que puede producir la derogación va a quedar restringido a un numero relativamente moderado de supuestos: aquellos en que no se dé la relación de medio a fin, a la vez que hará desaparecer algunos de concurso ideal, como el que se daba.”⁸⁹

“ARTÍCULO 79 *(Aplicación de la sanción en el caso de concurso de delitos).*
En caso de concurso ideal, se impondrán las sanciones correspondientes al delito que merezca la mayor penalidad, las cuales podrán aumentarse sin rebasar la mitad del máximo de la duración de las penas correspondientes de los delitos restantes, si las sanciones aplicables son de la misma naturaleza; cuando sean de diversa naturaleza podrán imponerse las penas correspondientes a los restantes delitos. En ningún caso, la pena aplicable podrá exceder de los máximos señalados en el Título Tercero del Libro Primero de este Código.

En caso de concurso real, se impondrá la pena del delito que merezca la mayor, la cual podrá aumentarse con las penas que la ley contempla para cada uno de los delitos restantes, sin que exceda del máximo señalado en el artículo 33 de este Código.”⁹⁰

⁸⁸ Idem

⁸⁹ CREUS, Carlos, *Derecho Penal Tomo II*, 6ª ed. Astrea, Argentina, 1999, p. 228.

⁹⁰ Idem

“En el concurso ideal o concurso ideal propiamente dicho, hay una única conducta con pluralidad típica, es decir conducta única y tipicidad plural.”⁹¹

Al referirme a la palabra elemento, en una acepción amplia, se entiende a una parte integrante, siendo el caso, que ni la doctrina, ni la legislación hace referencia a los elementos de prueba, sino a los medios de prueba, y dentro de los cuales se encuentran medios de prueba, tanto materiales, como inmateriales, como sería el caso de la confesional y la testimonial, las cuales, si bien es cierto, de acuerdo a nuestro sistema escrito, terminarán, en una actuación judicial, material, lo cierto es que, la naturaleza de las mismas no es de carácter material, por lo que considero, que la redacción del artículo, deberá, de determinar, que la alteración de los elementos de prueba, tendrá que recaer sobre elementos materiales (tangibles) de las mismas. Con lo que inclusive, se evitaría el concurso de este delito, con el de falsedad de declaración ante autoridad, ya que puede darse la hipótesis, por ejemplo en el caso de las personas como el Presidente de la República, que tienen la posibilidad de rendir su testimonio por oficio, que dicho oficio (elemento material de prueba) sea alterado de forma dolosa.

Cuando me referí al tema de los elementos objetivos, determine que los elementos de prueba alterados sean presentados en “**Juicio**”, es decir, el sujeto activo debe de aprovechar la ocasión de un Juicio, a efecto de presentar las pruebas alteradas, por lo que analizare lo que es el Juicio.

Nuestra legislación es omisa al dar una definición de Juicio, aunque en diversas legislaciones encontramos referencia al “Juicio”. Tal es el caso del Código de Procedimientos Penales Federal, el cual establece que el Juicio es la parte del procedimiento penal que abarca las conclusiones del Ministerio Público y del abogado defensor, y la emisión de la sentencia por parte del Juzgador.

⁹¹ ZAFFARONI, Eugenio Raúl, *Derecho Penal Parte General*, ed. Porrúa, México 2001, p. 829.

Por otra parte la legislación Civil, hace referencia al juicio ordinario, juicios especiales, etc. sin dar tampoco una definición.

A este respecto cito el siguiente criterio, el cual establece que se entiende por juicio para los efectos del amparo:

Registro No. 187247, Localización. Novena Época. Instancia: Primera Sala
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta XV, Abril de 2002
Página: 462. Tesis: 1a. XXVI/2002. Tesis Aislada. Materia(s): Común

“DEMANDA. LA RESOLUCIÓN QUE CONFIRMA LA NEGATIVA DE UN JUEZ FEDERAL PARA CONOCER DE ELLA Y LA PONE CON SUS ANEXOS A DISPOSICIÓN DEL ACTOR PARA QUE LA PRESENTE ANTE EL JUEZ QUE LEGALMENTE RESULTE COMPETENTE, PONE FIN AL JUICIO Y, POR TANTO, ES RECLAMABLE EN AMPARO DIRECTO.

Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación estima que por juicio, para efectos de la procedencia del amparo, debe entenderse el procedimiento contencioso ante un órgano jurisdiccional, que se inicia con la presentación de la demanda y concluye con la sentencia definitiva o resolución que, sin decidirlo en lo principal, lo da por concluido, impidiendo su prosecución o continuación. En congruencia con lo anterior, la resolución que confirma la negativa de un Juez Federal para conocer de una demanda en un juicio ordinario civil federal por carecer de competencia territorial para darle trámite y la pone con sus anexos a disposición de la parte actora para que la presente ante el Juez que legalmente resulte competente, constituye una resolución que pone fin al juicio, pues, sin decidirlo en lo principal lo da por concluido para todos los efectos legales, ya que impide su prosecución o continuación y, por ende, es reclamable en amparo directo. No es óbice a lo expuesto, el hecho de que la parte actora tenga expedito su derecho para presentar nuevamente la demanda ante un diverso órgano jurisdiccional, ya que en este caso se trataría de un nuevo juicio y no del que concluyó en virtud de la declaración de incompetencia del Juez Federal y su confirmación por parte del tribunal ad quem.”

Competencia 7/2002. Suscitada entre el Tercer Tribunal Colegiado del Décimo Quinto Circuito y el Primer Tribunal Colegiado del Quinto Circuito. 30 de enero

de 2002. Cinco votos. Ponente: Humberto Román Palacios. Secretario: José de Jesús Bañales Sánchez.

De la anterior tesis, se desprende un concepto de “Juicio”: **Por juicio, para efectos de la procedencia del amparo, debe entenderse el procedimiento contencioso ante un órgano jurisdiccional, que se inicia con la presentación de la demanda y concluye con la sentencia definitiva o resolución que, sin decidirlo en lo principal, lo da por concluido, impidiendo su prosecución o continuación.**

Es decir, tanto en la doctrina, como en la práctica se entiende, al juicio, como sinónimo de proceso contencioso jurisdiccional.

Para el maestro Eduardo Pallares el juicio es: “conocimiento de una causa en la cual el juez ha de pronunciar la sentencia”⁹²

A este respecto, existe una controversia entre los diversos autores, en relación si el Juicio concluye con la Sentencia Definitiva, toda vez que procesalmente, después, se llevan acabo actos procesales, como incidentes de ejecución de sentencia, la ejecución de la sentencia, etc.

Por lo que considero incorrecto el empleo de la palabra juicio, dentro del tipo de fraude procesal, en el sentido de que excluye, a los procedimientos, llevados acabo ante autoridades que no sean de índole Jurisdiccional. Además de llevarse acabo ante estas, es controvertible, en el caso de los actos prejudiciales, ante las autoridades jurisdiccionales y los posteriores a la etapa de la Sentencia Definitiva.

Ahora analizaré, lo referente al elemento normativo de “inducir al error”.

⁹² PALLARES, Eduardo, Op.Cit., 2003, p. 269.

El legislador, al elaborar la hipótesis, referente a “**realice cualquier otro acto tendiente a inducir a error a la autoridad judicial o administrativa**”, dejó abierta la posibilidad de que el Sujeto Activo del delito de Fraude Procesal, a efecto de encuadrarse en el supuesto, únicamente tuviera que realizar cualquier acto que fuera tendiente a inducir al error a la autoridad judicial o administrativa, por lo que en el mismo sentido que en las anteriores hipótesis, en las cuales se establece como verbo rector, el alterar o simular, conductas que por sí mismas llevan implícitas el animus de engañar a la autoridad judicial o administrativa, es decir, de inducirla al error, de llevarlas a una falsa apreciación de la realidad, a efecto de que emitan una resolución, sentencia o acto administrativo “contrario a la ley” (la frase contrario a la ley la analizaré más adelante).

Por lo que afirmo, que el legislador, al hacer referencia a “inducir al error”, se refería a lo que conocemos como el dolo en materia civil, cuya definición esta en el artículo 1815 del Código Civil para el Distrito Federal:

“ARTÍCULO 1815. Se entiende por dolo en los contratos, cualquiera sugestión o artificio que se emplee para inducir a error o mantener en él a alguno de los contratantes; y por mala fe, la disimulación del error de uno de los contratantes, una vez conocido.”⁹³

Ya los romanos distinguían dos clases de dolo, el dolo bueno, el cual era la astucia que utilizaban los vendedores a efecto de celebrar la venta de sus productos, pero por lo que se refiere al dolo malo, que es el que interesa, el maestro Floris Margadant, dice:

“Es evidente que entre dolo y error existe un íntimo parentesco: el dolo es precisamente una maquinación consciente, a fin de producir en la parte contraria un error propio; generalmente un error de hecho.”⁹⁴

⁹³ Código Civil para el Distrito Federal.

⁹⁴ FLORIS MARGADANT S, Guillermo, El Derecho Privado Romano, 13ª edición, ed. Esfinge, México, 1985, p.339

En consecuencia cualquier acto tendiente a producir una falsa apreciación de la realidad de la autoridad judicial o administrativa, llevaría al sujeto activo a encontrarse en el supuesto de Fraude Procesal.

A efecto de analizar los elementos normativos consistentes en las **Autoridades Judiciales y Administrativas**, comenzaremos a analizar lo referente al concepto de Autoridad:

El maestro Lucio Mendieta y Núñez, afirma que el Derecho surge en el momento en que se reúnen dos o más sujetos, y uno de ellos es capaz de establecer normas y hacerlas cumplir.

Por lo que afirmo, que la autoridad y el Derecho, son un binomio inseparable, toda vez que el Derecho, limita la actuación de la autoridad, y el Derecho a su vez es creado por la autoridad, tal es el caso, que el Congreso de la Unión y la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, ambas como Órganos Legislativos uno de la Federación y otro del Distrito Federal, son autoridades Legislativas. No escapa el mencionar, que el Derecho no es elaborado exclusivamente por el Poder Legislativo, sino que también el Ejecutivo, tiene la facultad reglamentaria.

Como lo afirmé en el apartado relativo al Bien Jurídico Protegido, la Sociedad, sede a una superestructura, denominada Estado, parte de su libertad, a efecto de que sea la que preserve el bienestar de la sociedad. Esta afirmación encuentra sustento en lo establecido en el artículo 39 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos:

“ARTÍCULO 39.- La soberanía nacional reside esencial y originariamente en el pueblo. Todo poder público dimana del pueblo y se instituye para beneficio de éste. El pueblo tiene en todo tiempo el inalienable derecho de alterar o modificar la forma de su gobierno.”⁹⁵

⁹⁵ Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Como se deriva de la citada norma Constitucional, todo poder público dimana del pueblo y se instituye para beneficio de este. Este trabajo no pretende ser un análisis exhaustivo de lo que implica el concepto de Poder, por lo que me limitaré a decir que el Poder es la facultad de incidir en la voluntad de los demás. Por lo que afirmo que el Poder requiere para poder ser ejercido de personas investidas de facultades. Es así como llego al concepto de Autoridad, por lo que a continuación cito la siguiente tesis:

Registró No. 329126 Localización: Quinta Época. Instancia: Segunda Sala
Fuente: Semanario Judicial de la Federación LXV **Página:** 3931. Tesis Aislada
Materia(s): Administrativa

“AUTORIDAD, CONCEPTO DE.

Por autoridad debe entenderse toda persona investida por la ley de facultades para dictar según su propio criterio y bajo su responsabilidad, determinaciones de cumplimiento obligatorio, y para hacer cumplir esas mismas determinaciones.”

Amparo administrativo en revisión 4173/39. Compañía Industrial Jabonera de la Laguna S.M.L. 24 de septiembre de 1940. Unanimidad de cinco votos. La publicación no menciona el nombre del ponente.

En el mismo sentido, hay un criterio jurisprudencial de las autoridades que son consideradas para el Juicio de Amparo:

Registro No. 210747 Localización: Octava Época **Instancia:** Tribunales Colegiados de Circuito. **Fuente:** Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. 80, Agosto de 1994. **Página:** 61. Tesis: VI.2o. J/286.
Jurisprudencia. Materia(s): Común

“AUTORIDAD, CONCEPTO DE, PARA EFECTOS DEL AMPARO.

De acuerdo con lo establecido por el artículo 103, fracción I, constitucional y el artículo 1o., fracción I, de la Ley de Amparo, la procedencia del juicio de garantías se encuentra supeditada al hecho de que los actos que en el mismo

se reclamen provengan de autoridad, debiendo entenderse por tal, no aquella que se encuentra constituida con ese carácter conforme a la ley, sino a la que dispone de la fuerza pública en virtud de circunstancias legales o de hecho, y que por lo mismo esté en la posibilidad material de obrar como individuo que ejerza actos públicos, dictando resoluciones obligatorias para los gobernados, cuyo cumplimiento pueda ser exigible mediante el uso directo o indirecto de la fuerza pública”

SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEXTO CIRCUITO.

Amparo en revisión 323/88. Máximo González Escobar. 23 de noviembre de 1988. Unanimidad de votos. Ponente: Arnoldo Nájera Virgen. Secretario: Guillermo Báez Pérez.

En este orden de ideas, daré un concepto de Autoridad Judicial:

“órgano de la jurisdicción encarnado en lo que, normalmente, es llamado como juez o tribunal y que corresponde al funcionario del Poder Judicial en quien se delega el ejercicio de la potestad jurisdiccional del Estado. Es la encargada de la función pública de administrar justicia, quien mediante proceso y con imperium resuelve los conflictos o litigios sometidos a su decisión, mediante sentencias que adquieren la calidad de cosa juzgada.”⁹⁶

Por lo que respecta a la autoridad administrativa, a efecto de definirla, me remito a la Ley del Procedimiento Administrativo Del Distrito Federal, la cual establece en su artículo segundo:

“Autoridad: Persona que dispone de la fuerza pública, en virtud de circunstancias legales o de hecho;

Autoridad competente: Dependencia, Órgano Desconcentrado, Órgano Político Administrativo o Entidad de la Administración Pública del Distrito Federal facultada por los ordenamientos jurídicos, para dictar, ordenar o ejecutar un acto administrativo;”

⁹⁶ DÍAZ DE LEÓN Marco Antonio, Diccionario de Derecho Procesal Penal y de sus términos usuales en el proceso penal, 4ª ed., Tomo I, Porrúa, México, 2000 p. 254.

Por lo tanto, la autoridad administrativa es la Persona, Dependencia, Órgano Desconcentrado, Órgano Político Administrativo o Entidad de la Administración Pública del Distrito Federal facultada por los ordenamientos jurídicos, para dictar, ordenar o ejecutar un acto administrativo en virtud de circunstancias legales o de hecho.

Al hacer referencia a las circunstancias de hecho, se refiere a las autoridades de facto, cuyo concepto se encuentra en la siguiente tesis:

Registro No. 228096 Localización: Octava Época Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito. Fuente: Semanario Judicial de la Federación III, Segunda Parte-1, Enero a Junio de 1989. Página: 158. Tesis Aislada. Materia(s): Administrativa

“AUTORIDAD DE FACTO. CONCEPTO.

Es aquélla cuyo origen no respeta los lineamientos establecidos en el artículo 16 constitucional habida cuenta de que la creación de autoridades con facultades para determinar responsabilidades administrativas o ejercer atribuciones señaladas en una ley, debe estar autorizada bien en un ordenamiento legal, o bien en su respectivo reglamento expedido por el Presidente de la República en términos de lo dispuesto por el artículo 89, fracción I, de la Constitución Federal.”

QUINTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO.

Amparo en revisión 1205/89. Rafael Cruz Pérez. 23 de junio de 1989. Unanimidad de votos. Ponente: J. S. Eduardo Aguilar Cota. Secretario: Jesús Díaz Barber.

Es importante analizar el tema de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, cuya naturaleza jurídica ha sido debatida por los juristas laboristas, siendo el caso, que la misma Ley de Amparo, realiza la distinción entre tribunales judiciales, administrativos y del trabajo, en sus artículos 114 y 158:

“ARTÍCULO 114.- El amparo se pedirá ante el juez de Distrito:

*III.- Contra actos de tribunales judiciales, administrativos o **del trabajo** ejecutados fuera de juicio o después de concluido.*

ARTÍCULO 158.- El juicio de amparo directo es competencia del Tribunal Colegiado de Circuito que corresponda, en los términos establecidos por las fracciones V y VI del artículo 107 constitucional, y procede contra sentencias definitivas o laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, dictados por tribunales judiciales, administrativos **o del trabajo**, respecto de los cuales no proceda ningún recurso ordinario por el que puedan ser modificados o revocados, ya sea que la violación se cometa en ellos o que, cometida durante el procedimiento, afecte a las defensas del quejoso, trascendiendo al resultado del fallo, y por violaciones de garantías cometidas en las propias sentencias, laudos o resoluciones indicados.

*Para los efectos de este artículo, sólo será procedente el juicio de amparo directo contra sentencias definitivas o laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, dictados por tribunales civiles, administrativos **o del trabajo**, cuando sean contrarios a la letra de la ley aplicable al caso, a su interpretación jurídica o a los principios generales de Derecho a falta de ley aplicable, cuando comprendan acciones, excepciones o cosas que no hayan sido objeto del juicio, o cuando no las comprendan todas, por omisión o negación expresa.”⁹⁷*

De lo que se deriva, que la conformación de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, según se desprende de la Ley Federal del Trabajo en sus artículos 605 y 623 es con un representante del gobierno, uno del capital y otro de los trabajadores:

“Artículo 605. La Junta se integrará con un representante del Gobierno y con representantes de los trabajadores y de los patrones designados por ramas de la industria o de otras actividades, de conformidad con la clasificación y convocatoria que expida la Secretaría del Trabajo y Previsión Social.

Artículo 623. La integración y funcionamiento de las Juntas Locales de Conciliación y Arbitraje se regirán por las disposiciones contenidas en el capítulo anterior. Las facultades del Presidente de la República y del Secretario del Trabajo y Previsión Social se ejercerán por los Gobernadores de los Estados y en el caso del Distrito Federal, por el propio Presidente de la República y por el Jefe del Departamento del Distrito Federal, respectivamente.
.”⁹⁸

⁹⁷ Ley de Amparo.

⁹⁸ Ley Federal del Trabajo.

Por tal razón se está ante una estructura sui generis, en cuanto a la conformación de un tribunal, que responde a razones históricas, toda vez que el Derecho del Trabajo, tiene por finalidad, dirimir las controversias que se susciten entre el capital y la clase trabajadora, es decir, entre los patrones y los trabajadores y entre los patrones y los conflictos que se susciten entre patrones y entre trabajadores, tal y como se desprende del reglamento de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Distrito Federal.

Así es que se esta ante un Tribunal autónomo, con plena jurisdicción para dirimir las controversias que se susciten, producto de las relaciones de trabajo, entre los patrones y los trabajadores o sólo entre los patrones o los trabajadores, el cual recibe su presupuesto de las partidas del Gobierno del Distrito Federal. Y su jurisdicción es ejercida por el Representante del Gobierno y los Representantes del Capital (patrones).

Afirmo que la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Distrito Federal, no pertenece al Poder Judicial, y es autónomo en cuanto a sus funciones del Poder Ejecutivo Local, pero es dependiente presupuestamente del mismo, realiza actividades jurisdiccionales, aun que estas sean ejercidas por una persona perito en Derecho, como lo debe ser el representante del Gobierno, y por otras dos que no requieren ser Licenciados en Derecho.

Por técnica legislativa, propongo que se debe de hacer mención expresa a la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Distrito Federal, en lo que se refiere a las Autoridades Judiciales y Administrativas dentro del tipo penal de Fraude Procesal, siguiendo el ejemplo de la redacción transcrita de la Ley de Amparo.

Con el fin de analizar, los elementos normativos de la **Sentencia contraria a la ley, Resolución contraria a la ley, Acto administrativo contrario a la ley**, estudiare por separado, los elementos relativos a **Sentencia, Resolución, y acto administrativo** de la frase **Contrario a la Ley**.

Empezaré por afirmar, que el legislador, en una falta de técnica legislativa, mencionó en primer lugar a la sentencia y posteriormente a la resolución, siendo el caso, que estas dos figuras guardan una relación de género-especie,

siendo el género la Resolución y una especie de la misma, la Sentencia, esto derivado de lo establecido por los artículos 79 del Código de Procedimientos Civiles del Distrito Federal y 71 del Código de Procedimientos Penales para el Distrito Federal:

“Artículo 79.- *Las resoluciones son:*

- I. Simples determinaciones de trámite y entonces se llamarán decretos;*
- II. Determinaciones que se ejecuten provisionalmente y que se llaman autos provisionales;*
- III. Decisiones que tienen fuerza de definitivas y que impiden o paralizan definitivamente la prosecución del juicio, y se llaman autos definitivos;*
- IV. Resoluciones que preparan el conocimiento y decisión del negocio ordenando, admitiendo o desechando pruebas, y se llaman autos preparatorios;*
- V. Decisiones que resuelven un incidente promovido antes o después de dictada la sentencia, que son las sentencias interlocutorias;*
- VI. Sentencias definitivas.*⁹⁹

“Artículo 71.- Las resoluciones judiciales se clasifican en decretos, sentencias y autos; decretos, si se refieren a simples determinaciones de trámite; sentencias, si terminan la instancia resolviendo el asunto principal controvertido; y autos, en cualquiera otro caso.”¹⁰⁰

Daré un concepto de resolución:

*“son los pronunciamientos de los jueces y tribunales a través de los cuales acuerdan delimitaciones de trámite o deben cuestiones planteadas por las partes, incluyendo la resolución de fondo del conflicto.”*¹⁰¹

⁹⁹ Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal.

¹⁰⁰ Código de Procedimientos Penales para el Distrito Federal.

¹⁰¹ Diccionario Jurídico 2000, Desarrollo Jurídico Copyright 2000

En este orden de ideas y derivado del artículo 71 del Código de Procedimientos Penales, la Sentencia es la resolución que termina la instancia, resolviendo el asunto principal controvertido.

Sobra decir, que el legislador, no hace mención expresa a la sentencia interlocutoria, ya que, al igual que la Sentencia definitiva, se sobreentendería, con la simple mención a la Resolución, que como ya se analizó es el género tanto de los decretos, autos provisionales, definitivos, preparatorios, Sentencias interlocutorias, y las Sentencias definitivas, además de que el término Resolución, incluye también las dictadas en materia laboral, como lo es el Laudo:

“Artículo 837. Las resoluciones de los tribunales laborales son:

I. Acuerdos: si se refieren a simples determinaciones de trámite o cuando decidan cualquier cuestión dentro del negocio;

II. Autos incidentales o resoluciones interlocutorias: cuando resuelvan dentro o fuera de juicio un incidente; y

III. Laudos: cuando decidan sobre el fondo del conflicto.”¹⁰²

La Ley de Procedimiento Administrativo del Distrito Federal también define a la Resolución Administrativa, misma que encontramos en el artículo 2º de la Ley. De la definición se desprende que esta también entraría en la hipótesis, ya que es un Acto Administrativo:

“Resolución Administrativa: Acto administrativo que pone fin a un procedimiento, de manera expresa o presunta en caso del silencio de la autoridad competente, que decide todas y cada una de las cuestiones planteadas por los interesados o previstas por las normas,”¹⁰³

¹⁰² Ley Federal del Trabajo

¹⁰³ Ley de Procedimiento Administrativo del Distrito Federal.

La misma ley (Ley de Procedimiento Administrativo del Distrito Federal), define al acto administrativo de la siguiente manera:

“Acto Administrativo: Declaración unilateral de voluntad, externa, concreta y ejecutiva, emanada de la Administración Pública del Distrito Federal, en el ejercicio de las facultades que le son conferidas por los ordenamientos jurídicos, que tiene por objeto crear, transmitir, modificar, reconocer o extinguir una situación jurídica concreta, cuya finalidad es la satisfacción del interés general.”¹⁰⁴

Más adelante en el artículo 6º de dicha ley encontramos los elementos que debe incluir el acto administrativo:

“Artículo 6o.- Se considerarán válidos los actos administrativos que reúnan los siguientes elementos:

I. Que sean emitidos por autoridades competentes, a través del servidor público facultado para tal efecto; tratándose de órganos colegiados, deberán ser emitidos reuniendo el quórum, habiendo cumplido el requisito de convocatoria, salvo que estuvieren presentes todos sus miembros, en los términos de las disposiciones jurídicas aplicables;

II. Que sea expedido sin que en la manifestación de voluntad de la autoridad competente medie error de hecho o de derecho sobre el objeto o fin del acto, dolo, mala fe y/o violencia;

III. Que su objeto sea posible de hecho y esté previsto por el ordenamiento jurídico aplicable, determinado o determinable y preciso en cuanto a las circunstancias de tiempo y lugar;

¹⁰⁴ Idem

IV. Cumplir con la finalidad de interés público, derivado de las normas jurídicas que regulen la materia, sin que puedan perseguirse otros fines distintos de los que justifican el acto;

V. Constar por escrito, salvo el caso de la afirmativa o negativa ficta;

VI. El acto escrito deberá indicar la autoridad de la que emane y contendrá la firma autógrafa o electrónica del servidor público correspondiente;

VII. En el caso de la afirmativa ficta, contar con la certificación correspondiente de acuerdo a lo que establece el artículo 90 de esta Ley;

VIII. Estar fundado y motivado, es decir, citar con precisión el o los preceptos legales aplicables, así como las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que se hayan tenido en consideración para la emisión del acto, debiendo existir una adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicadas al caso y constar en el propio acto administrativo;

IX. Expedirse de conformidad con el procedimiento que establecen los ordenamientos aplicables y en su defecto, por lo dispuesto en esta Ley; y

X. Expedirse de manera congruente con lo solicitado y resolver expresamente todos los puntos propuestos por los interesados o previstos por las normas. ¹⁰⁵

Y en el artículo 7º de la Ley De Procedimiento Administrativo Del Distrito Federal, encontramos los requisitos de validez del Acto Administrativo

“Artículo 7o.- Son requisitos de validez del acto administrativo escrito, los siguientes:

¹⁰⁵ Ídem

I. Señalar el lugar y la fecha de su emisión. Tratándose de actos administrativos individuales deberá hacerse mención, en la notificación, de la oficina en que se encuentra y puede ser consultado el expediente respectivo;

II. En el caso de aquellos actos administrativos que por su contenido tengan que ser notificados personalmente, deberá hacerse mención de esta circunstancia en los mismos;

III. Tratándose de actos administrativos recurribles, deberá mencionarse el término con que se cuenta para interponer el recurso de inconformidad, así como la autoridad ante la cual puede ser presentado; y

IV. Que sea expedido sin que medie error respecto a la referencia específica de identificación del expediente, documentos o nombre completo de la persona.”¹⁰⁶

La siguiente tesis aislada que cito establece un concepto de Acto Administrativo:

Registro No. 187637. **Localización:** Novena Época, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. XV, Marzo de 2002. Página: 1284. Tesis: I.4o.A.341 A. Tesis Aislada Materia(s): Administrativa

“ACTO ADMINISTRATIVO. CONCEPTO.

La actividad administrativa del Estado se desarrolla a través de las funciones de policía, fomento y prestación de servicios públicos, lo cual requiere que la administración exteriorice su voluntad luego de cumplir los requisitos y procedimientos determinados en los ordenamientos jurídicos respectivos. El acto administrativo es el medio por el cual se exterioriza esa voluntad y puede conceptuarse como el acto jurídico unilateral que declara la voluntad de un órgano del Estado en ejercicio de la

¹⁰⁶ Ídem

potestad administrativa y crea situaciones jurídicas conducentes a satisfacer las necesidades de la colectividad.”

CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO.

Revisión fiscal 1603/2001. Contralor Interno en la Procuraduría General de la República y otra autoridad. 12 de diciembre de 2001. Unanimidad de votos. Ponente: Jean Claude Tron Petit. Secretario: Alfredo A. Martínez Jiménez.

De la anterior tesis se desprende el concepto de Acto Administrativo:

“El acto jurídico unilateral que declara la voluntad de un órgano del Estado en ejercicio de la potestad administrativa y crea situaciones jurídicas conducentes a satisfacer las necesidades de la colectividad.”

Atendiendo a una lectura estricta, la frase “Contrario a la Ley”, pareciera que únicamente hace referencia al Acto Administrativo, pero por lógica, debemos entender que esta frase, califica a la Resolución, a la Sentencia y al Acto Administrativo.

Por mandato Constitucional, las Resoluciones, Sentencias y Actos Administrativos, así como todos los actos de autoridad, deben de estar fundados y motivados, así lo dispone el primer párrafo del artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos:

“Artículo. 16.- Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento.”¹⁰⁷

Derivado de lo expuesto afirmo que las Resoluciones, Sentencias y Actos Administrativos, deben ser fundados y motivados, entendiéndose por fundado

¹⁰⁷Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

la causa legal del acto, es decir, lo referente al Derecho, y por motivación los hechos, que dan lugar al acto.

En consecuencia se afirma que las Resoluciones, Sentencias y Actos Administrativos, no pueden ser contrarios a la ley, por el contrario deben de estar fundamentados en ella, si no, ésta dará lugar a la invalidez de los mismos. Tal es el caso de la fracción octava del artículo 7º de la Ley del Procedimiento Administrativo para el Distrito Federal, el cual establece como elemento del Acto Administrativo el ser fundado y motivado:

“VIII. Estar fundado y motivado, es decir, citar con precisión el o los preceptos legales aplicables, así como las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que se hayan tenido en consideración para la emisión del acto, debiendo existir una adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicadas al caso y constar en el propio acto administrativo;”¹⁰⁸

Considero incorrecta la redacción utilizada por el legislador del tipo penal de Fraude Procesal, toda vez, que el Sujeto Activo, tiene la intención de inducir al error a la autoridad judicial o administrativa, pero la resolución, sentencia o Acto Administrativo, que obtenga no será contraria a Derecho, sino en su caso, motivada de forma incorrecta y en consecuencia, la Autoridad, ya sea Judicial o Administrativa, podrá emplear fundamentos de Derecho, que de no encontrarse en el error, es decir, en la falsa apreciación de la realidad, no utilizaría, es por ello que incluso en el apartado que se refiere al bien jurídico protegido, no se estableció como este a la legalidad de las resoluciones, sino a la correcta administración de justicia.

A modo de conclusiones del presente Capítulo, diré:

1. En virtud de que el patrimonio no es el único bien jurídico protegido por el delito de Fraude Procesal, sino en un principio lo es la Correcta Administración y Procuración de Justicia, la cual no sólo protege el

¹⁰⁸ Ley de Procedimiento Administrativo del Distrito Federal.

patrimonio, sino otros bienes jurídicos protegidos, como lo son los derivados de las relaciones familiares, como la filiación, la guarda y custodia, los alimentos, el matrimonio, etc. se debe de establecer otro criterio para la cuantificación de la pena.

2. Considero que este delito no se debe de perseguir por querrela, y sólo en razón de el daño patrimonial, se persiga de oficio, toda vez, que en gran parte en este tipo Penal descansa la Seguridad Jurídica y la Confianza en nuestras instituciones, por lo que, debe ser obligación de la Autoridad que conozca de un posible Fraude Procesal, dar vista al Ministerio Público y no hasta que la parte afectada se dé cuenta.
3. En cuanto a la redacción del tipo penal de fraude procesal, considero que es por demás, referirse al acto y al escrito judicial por separado, cuando el Acto Judicial conlleva la presentación de los escritos judiciales.
4. La hipótesis, relativa a la alteración de los elementos de prueba, continuamente entrará en concurso, con otras hipótesis, previstas en el Código Penal del Distrito Federal, razón por la cual deben desaparecer las que prevean la misma conducta.
5. Se debe de determinar que los elementos de prueba alterados, sean materiales, en virtud de que, el alterar testimoniales o confesionales, únicamente se puede presentar, en cuanto a que las mismas se encuentren en una actuación material o documento que sea tangible, sino en todo caso estaríamos en presencia de una falsedad de declaración ante autoridad.
6. El delito de Fraude Procesal, debe de contemplar una pena más agravada, cuando en él intervenga un perito en Derecho, como lo son los Abogados o los Licenciados en Derecho.
7. En cuanto a la referencia de ocasión de presentar las pruebas alteradas en juicio, considero que la palabra Juicio, debe de ser sustituida en el Tipo Penal, por la frase “ Proceso o Procedimiento judicial o administrativo”, toda vez que como lo expuse, esta frase se limita al proceso judicial contencioso, y no comprendería en todo caso los procedimientos prejudiciales o posteriores a la sentencia o en los que no exista litis, y tampoco comprende los procesos o procedimientos

administrativos como los seguidos ante migración, donde es recurrente la práctica de alteración (falsificación) de pruebas.

8. Se debe de suprimir la referencia que realiza el tipo penal de Fraude Procesal a la Sentencia, toda vez que es una especie de la Resolución, en consecuencia resulta ocioso mencionarla.
9. Se debe modificar la frase de contrario a la ley, en virtud, de que no es posible que una Resolución, Sentencia o Acto Administrativo, sean contrarios a la Ley, ya que en todo caso estarán mal motivados, pero no serán contrarios a la Ley.
10. Es indispensable, que el legislador defina en el Código Penal o de Procedimientos Penales para el Distrito Federal, cuando menos, cuáles son los elementos objetivos, y retome a estos como requisito para solicitar la orden de aprehensión o realizar la consignación, ya que difícilmente el Ministerio Público acreditará los extremos requeridos por el artículo 122 del Código de Procedimientos Penales, en razón de que como quedó establecido en el presente Capítulo, este tipo en particular, requerirá, la acreditación de los elementos subjetivos del tipo.
11. Se debe de incluir en la legislación el concepto de juicio, ya que constituye una violación al artículo 14 Constitucional, la aplicación, de pena alguna, si se aplica infiriendo que el Juicio es equivalente al proceso.

CAPÍTULO IV

EL NUEVO FRAUDE PROCESAL, ELEMENTOS Y CONSTANTES.

.....	112
4.1 Bien jurídico protegido.....	113
4.2 Conducta.....	115
4.3 Sujetos.....	118
4.4 Cosas.....	121
4.5 Resultado.....	123
4.6. Elementos objetivos.....	125
4.7. Elementos subjetivos.....	130
4.8. Elementos normativos.....	132

4.- EL NUEVO FRAUDE PROCESAL, ELEMENTOS Y CONSTANTES.

En el tercer Capítulo de la presente tesis, analicé en base a los elementos y constantes del tipo penal planteadas en el Capítulo segundo, el tipo penal de Fraude Procesal contenido en el Código Penal para el Distrito Federal, por lo que en base a dicho análisis, encontré la existencia de algunos elementos, que considero, deberían ser modificados a efecto de que el tipo objeto de estudio, cumpliera con el objetivo para el cual fue creado, por lo que a raíz de lo anterior, pongo a consideración una redacción del tipo penal de Fraude Procesal, que consideramos sería un avance hacia el perfeccionamiento de la actual redacción del tipo penal de Fraude Procesal:

Artículo 310. Al que para obtener un beneficio indebido para sí o para otro, simule un acto jurídico, un acto judicial o altere elementos materiales de prueba y los presente en un proceso o procedimiento judicial, administrativo o seguido ante autoridad jurisdiccional, o realice cualquier acto tendiente a inducir al error a la autoridad judicial, administrativa o jurisdiccional, con el fin de obtener resolución o acto administrativo motivados erróneamente, se le impondrán de cuatro a ocho años de prisión y de cien a trescientos días multa.

Si en la comisión del presente delito participara un Licenciado en Derecho, Pasante en Derecho, o Apoderado tratándose de procesos o procedimientos seguidos ante la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Distrito Federal, se le aumentará una tercera parte de la pena prevista para este delito.

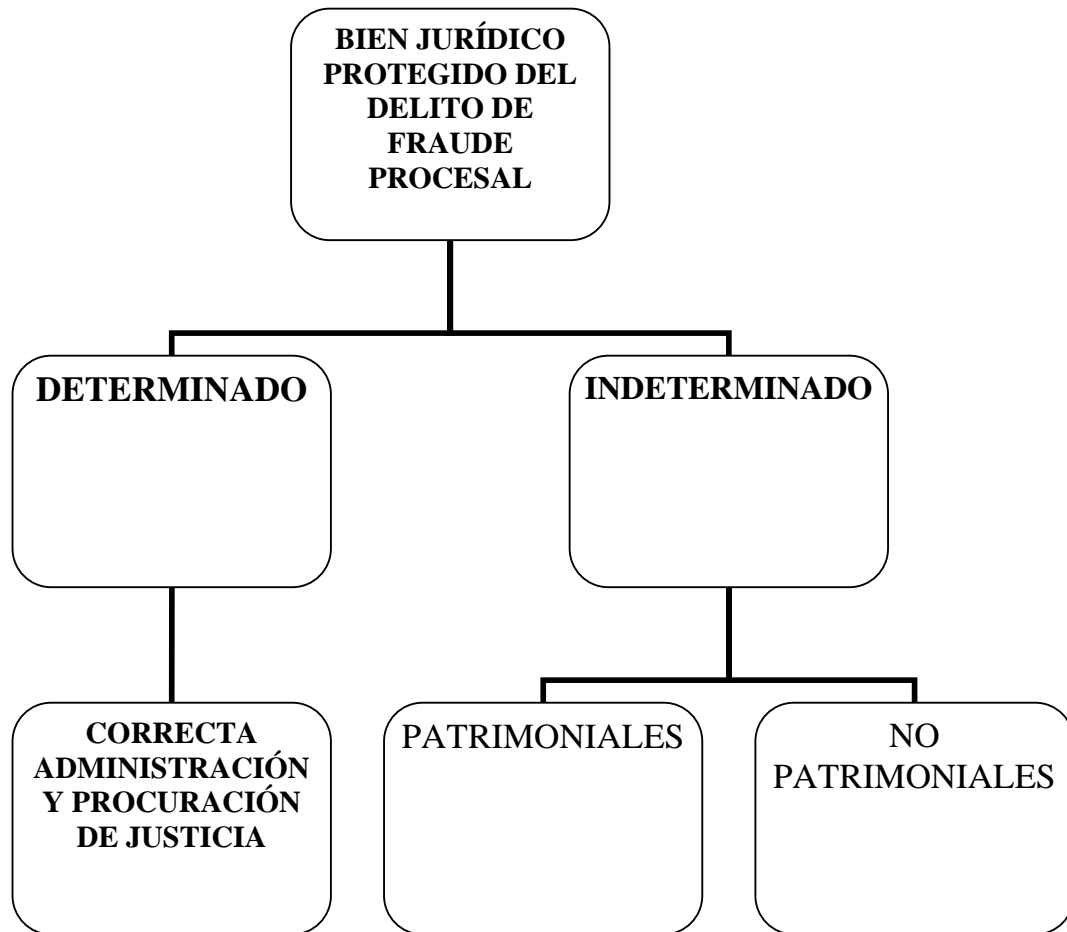
A lo largo del presente Capítulo, analizaré a la luz de los elementos y constantes del tipo penal, planteados en el Capítulo segundo de la presente

tesis, la redacción propuesta del tipo penal de Fraude Procesal, tratando en todo momento de explicar la causa de la modificación planteada contenida en dicha redacción en comparación con la redacción del tipo penal de Fraude Procesal vigente.

4.1 Bien jurídico protegido.

Tal y como lo establecí dentro del Capítulo segundo y lo reafirmé dentro del tercer Capítulo de la presente tesis “***el bien jurídico protegido no es otra cosa sino los bienes, derechos o intereses de la colectividad y del individuo que son protegidos por las leyes penales.***”

Como lo determiné al analizar la constante del tipo penal de Fraude Procesal Vigente en el Distrito Federal, en el punto 3.1 del Capítulo anterior, el bien jurídico protegido del tipo penal de Fraude Procesal, es **LA CORRECTA ADMINISTRACIÓN Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA** y establecí también, que este tipo penal no protege exclusivamente este bien jurídico, sino que a la vez, de forma secundaria puede proteger otros bienes jurídicos, tales como el patrimonio o aquellos que no sean susceptibles de una valoración pecuniaria, como sería el caso de que el injusto se presentara tratándose de juicios de índole familiar, esquematizándolo de la siguiente manera:



En base a la redacción propuesta, el bien jurídico protegido del tipo penal de Fraude Procesal seguirá siendo **LA CORRECTA ADMINISTRACIÓN Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA**, y de manera secundaria continuará protegiendo otros bienes jurídicos patrimoniales y no patrimoniales, es importante destacar que con la nueva redacción, la persecución del delito, ya no es en base al daño patrimonial que se cause, toda vez que como lo he planteado con anterioridad, con la redacción actual vigente, el delito se persigue en base al daño patrimonial causado a la persona física sujeto pasivo del presente delito, por lo que el legislador equipararía que es lo mismo por ejemplo en un juicio que verse sobre la patria potestad, que si la parte que gana dicho juicio en base a un fraude procesal, con el hecho de una persona que en juicio ganara una suma de dinero que en base a la penalidad que

determina el tipo de fraude procesal, la cual nos remite al fraude genérico, no será superior a \$25,000.00 (veinticinco mil pesos 00/100 M.N.) y se sancionaría de forma similar, por lo que habría que reflexionar, si el litigante que pierda la patria potestad, sufre el mismo daño moral que el que pierde \$25,000.00 (veinticinco mil pesos 00/100 M.N.) en un juicio de orden patrimonial, máxime que independientemente de la existencia o no de otro bien jurídico protegido en este tipo penal nos encontramos ante un tipo penal que tiene como fin último el garantizar **LA CORRECTA ADMINISTRACIÓN Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA**, con lo que la vulneración de este bien jurídico afectaría a las instituciones y porqué no hasta su credibilidad, por lo tanto no puede estar sujeta la sanción a una mera afectación patrimonial y mucho menos que sea sujeta a ser perseguido por querrela, ya que es de recordar que el sujeto pasivo de este delito es principalmente el Estado a través de los órganos encargados de **LA CORRECTA ADMINISTRACIÓN Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA**.

4.2 Conducta.

Para determinar la conducta requerida para la actualización del tipo penal de estudio, establecí en el Capítulo segundo específicamente en el punto 2.1 que se deben de identificar los verbos rectores que se encuentren contenidos en nuestra descriptiva penal, es así como se determina la conducta que debe de realizar el Sujeto activo del delito, de las cuales se derivan las hipótesis contenidas en el mismo. Por lo que en el Capítulo tercero en el punto 3.1 de la presente tesis al analizar el tipo penal de Fraude Procesal vigente, determiné que las hipótesis normativas eran:

- g) Al que para obtener un beneficio indebido para sí o para otro, ***simule*** un acto jurídico.

- h) Al que para obtener un beneficio indebido para sí o para otro, **simule** un acto judicial.
- i) Al que para obtener un beneficio indebido para sí o para otro, **simule** un escrito judicial.
- j) Al que para obtener un beneficio indebido para sí o para otro **altere** elementos de prueba y los presente en juicio.
- k) Al que para obtener un beneficio indebido para sí o para otro realice **cualquier otro acto tendiente a inducir a error a la autoridad judicial con el fin de obtener sentencia, resolución o acto administrativo contrario a la ley.**
- l) Al que para obtener un beneficio indebido para sí o para otro realice **cualquier otro acto tendiente a inducir a error a la autoridad administrativa con el fin de obtener sentencia, resolución o acto administrativo contrario a la ley.**

Es decir, establecí como verbos rectores **Simular**, **Alterar** y la expresión **cualquier otro acto tendiente a inducir a error a la autoridad administrativa o judicial**. Por lo que con la nueva redacción que propongo, las hipótesis normativas se conformarían de la siguiente manera:

- a) Al que para obtener un beneficio indebido para sí o para otro, **simule** un acto jurídico.
- b) Al que para obtener un beneficio indebido para sí o para otro, **simule** un acto judicial.
- c) Al que para obtener un beneficio indebido para sí o para otro **altere** elementos materiales de prueba y los presente en un proceso o procedimiento judicial, administrativo o seguido ante autoridad jurisdiccional.

- d) Al que para obtener un beneficio indebido para sí o para otro **realice cualquier otro acto tendiente a inducir a error a la autoridad judicial** con el fin de obtener resolución o acto administrativo motivados erróneamente.
- e) Al que para obtener un beneficio indebido para sí o para otro **realice cualquier otro acto tendiente a inducir a error a la autoridad administrativa** con el fin de obtener resolución o acto administrativo motivados erróneamente.
- f) Al que para obtener un beneficio indebido para sí o para otro **realice cualquier otro acto tendiente a inducir a error a la autoridad jurisdiccional** con el fin de obtener resolución o acto administrativo motivados erróneamente.

En cuanto a la redacción del tipo penal propuesto de Fraude Procesal, como puede observarse, se mantienen sustancialmente los mismos verbos rectores, es decir, los de Simular, Alterar o realizar **cualquier otro acto tendiente a inducir a error a la autoridad**, pero en este caso se modificó, y no sólo se induce al error a la autoridad judicial y administrativa, sino también a la jurisdiccional, esto con el fin de evitar cualquier interpretación que dejara fuera tanto a la Junta Local de Conciliación y Arbitraje o inclusive al Tribunal de lo Contencioso Administrativo. Respecto a simular, se eliminó la hipótesis relativa al escrito judicial en virtud de que los mismos se encuentran ya previstos en la hipótesis relativa a los actos judiciales. Y se modifica la hipótesis de alterar y se establece que únicamente se pueden alterar los elementos materiales de prueba.

4.3 Sujetos.

Dentro de las descriptivas penales se establece la existencia de un Sujeto Activo y un Sujeto Pasivo:

Sujeto Activo: Persona física que realiza o participa en la conducta (acción u omisión) delictiva, es decir, que lesiona o pone en peligro un bien jurídico tutelado.

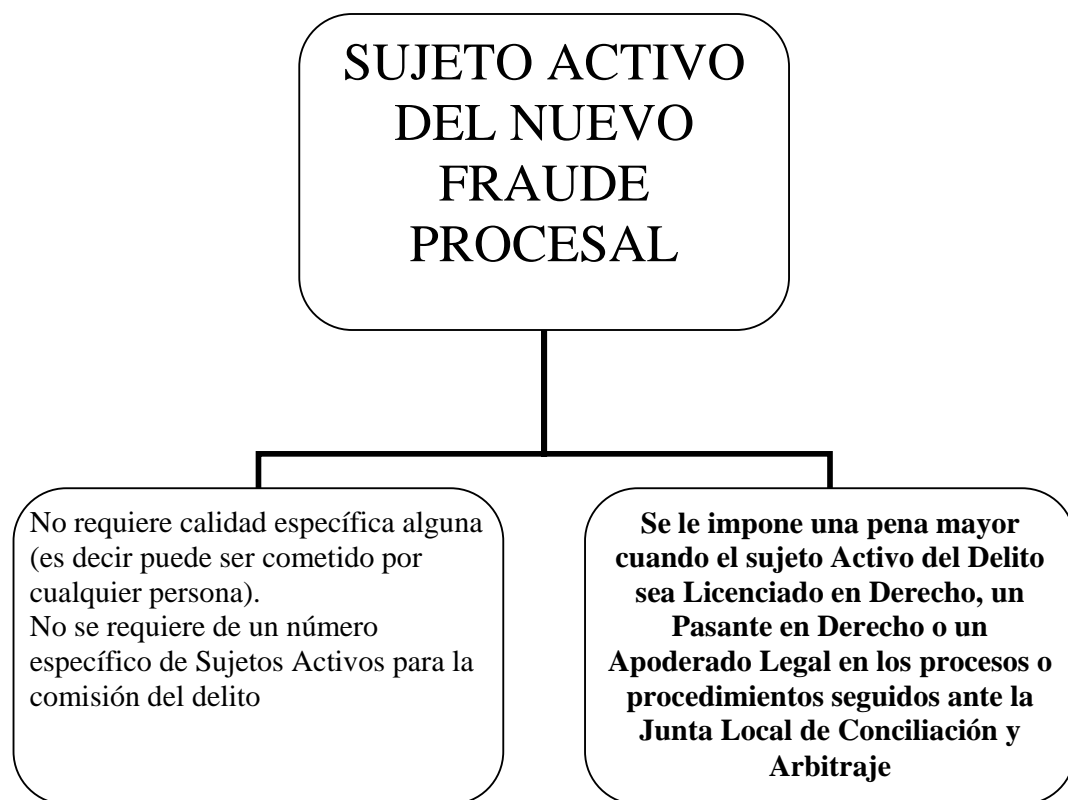
Sujeto Pasivo: Persona física o moral titular del bien jurídico protegido que reciente de manera directa la conducta (acción u omisión) delictiva, es decir, que lesiona o pone en peligro el bien jurídico.

En el tipo penal de Fraude Procesal vigente identificamos al sujeto activo del delito como:

Una persona, la cual no requiere calidad alguna, es decir, el tipo penal no requiere que la persona que realiza o participa en el Delito de Fraude Procesal sea un servidor público (ya que en este caso daría lugar a una figura típica distinta como los delitos cometidos por servidores públicos), que guarde alguna relación con el sujeto pasivo (como cónyuge, ascendiente, descendiente, etc.), el tipo penal no exige un número determinado de personas que deban realizar o participar en el delito, por lo que es de los que se denominan unisubjetivos, por ser viable el realizarse por una sola persona.

Es importante resaltar que con la nueva redacción, a pesar de que no se hace diferencia alguna en cuanto al tipo Penal de Fraude Procesal Vigente, aunque si agrego, que cuando intervenga en la comisión del delito de Fraude Procesal un Licenciado en Derecho un Pasante en Derecho o un apoderado legal en los procesos o procedimientos seguidos ante la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, esto debido a que por lo menos los dos primeros son peritos en Derecho y tienen conocimiento previo de la existencia de este tipo penal además de que su actuar sería por demás doloso y el tercero, es decir, el

apoderado legal en los casos que se señalan, esto porque en la práctica en las Juntas del Trabajo un porcentaje importante de los asuntos son postulados por personas que no cuentan con el título de Licenciado en Derecho o Autorización para ejercer con el carácter de Pasante la Profesión de Licenciado en Derecho, y que hacen de esta actividad su medio de sustento económico, es decir, la realizan como oficio. Por tal razón cualquiera de éstas tres personas serían un agente importante de riesgo, si llegan a cometer este delito, ya que tienen la oportunidad de hacerlo reiteradamente.



Sujeto Pasivo: En relación al Sujeto Pasivo de la Conducta, quien como había afirmado es el titular del bien jurídico protegido que se pone en peligro o se le causa un daño. Es necesario recordar que el bien jurídico protegido es la correcta administración y procuración de la justicia, por lo tanto afirmé que el titular en un principio es la Sociedad en su conjunto, quien se la cede al Estado y éste a su vez la delega en autoridades administrativas y judiciales,

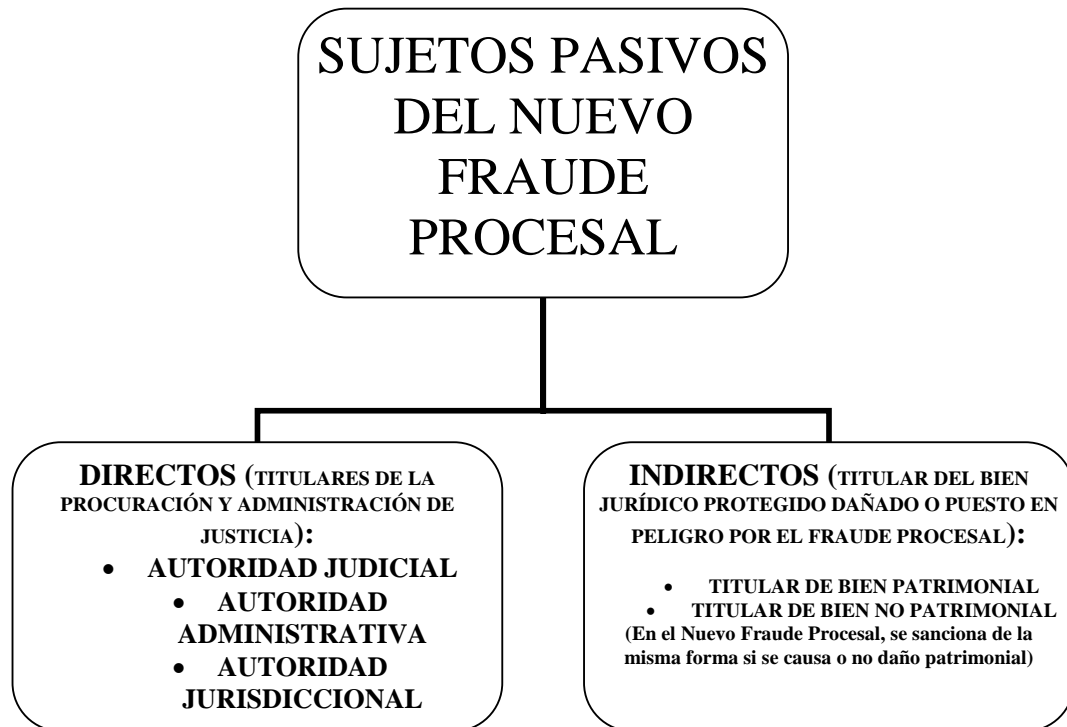
como los tribunales, el Ministerio Público, las Juntas del Trabajo, etc. y en principio es Sujeto Pasivo del Delito de Fraude Procesal:

- La Sociedad
- El Estado (en su carácter de superestructura)
- Autoridades Administrativas, Judiciales y Jurisdiccionales (Tribunales, Ministerio Público, Juntas del Trabajo, etc.)

Pero también la comisión del Delito de Fraude Procesal, puede afectar a otros bienes jurídicos protegidos, como el patrimonio, y otros no patrimoniales, por lo que, así como siempre tendrá como bien jurídico protegido a la Correcta Administración y Procuración de Justicia como bien Jurídico Protegido determinado y en consecuencia, siempre serán sujetos pasivos del delito la Sociedad, el Estado, las Autoridades Administrativas y Judiciales, también se da el caso de que con la misma comisión del Delito puedan surgir más Sujetos Pasivos del Delito, como el titular del patrimonio puesto en peligro o dañado.

En el nuevo fraude procesal propuesto, en esencia plantea los mismos sujetos pasivos del tipo vigente, pero por técnica, decidí agregar a las autoridades jurisdiccionales, ya que relacionándolo con el principio de legalidad establecido en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, resulta sujeto a discusión la naturaleza jurídica de las Juntas del Trabajo, o el Tribunal de lo Contencioso Administrativo.

Respecto a que pueden existir más de un sujeto pasivo del delito, es decir, la autoridad y otro, considero importante nuevamente resaltar que la penalidad del tipo ya no está sujeta a la existencia y/o monto del daño patrimonial que se pudiera generar, ya que de no existir este segundo se castigaría con la misma penalidad.



4.4 Cosas.

Por cosas se entiende a los entes u objetos materiales o inmateriales involucrados en un tipo penal, cosas en nuestras leyes, es considerada como sinónimo de bienes, aunque con mayor connotación. Las cosas consideradas en sí mismas se han dividido en corporales e incorporales; siendo corporales, las que pueden tocarse o se hallan en la esfera de los sentidos; e incorporales las que no existen, sino intelectualmente o no caen en la esfera de los sentidos, como las obligaciones, las servidumbres y todos los derechos.

En ese orden de ideas, en el Capítulo anterior al analizar el Fraude Procesal vigente en el punto 3.4 establecí como cosas las siguientes:

- f) Los actos jurídicos.**
- g) Los actos judiciales simulados**

- h) Los escritos judiciales simulados**
- i) Los elementos de prueba alterados**
- j) Los actos (cualquier otro distinto a simular o alterar pruebas), que tengan como fin inducir al error a la autoridad Judicial o Administrativa.**

Por lo que a la luz del nuevo Fraude Procesal que establece:

Artículo 310. Al que para obtener un beneficio indebido para si o para otro, simule un acto jurídico, un acto judicial o altere elementos materiales de prueba y los presente en un proceso o procedimiento judicial, administrativo o seguido ante autoridad jurisdiccional, o realice cualquier acto tendiente a inducir al error a la autoridad judicial, administrativa o jurisdiccional, con el fin de obtener resolución o acto administrativo motivados erróneamente, se le impondrán de cuatro a ocho años de prisión y de cien a trescientos días multa.

Si en la comisión del presente delito participara un Licenciado en Derecho, Pasante en Derecho, o Apoderado tratándose de procesos o procedimientos seguidos ante la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Distrito Federal, se le aumentará una tercera parte de la pena prevista para este delito.

Establezco como cosas del Nuevo Fraude Procesal los siguientes:

- a) Los actos jurídicos.**
- b) Los actos judiciales**
- c) Los elementos materiales de prueba alterados**
- d) Los actos (cualquier otro distinto a simular o alterar pruebas), que tengan como fin inducir al error a la autoridad Judicial, Administrativa o Jurisdiccional.**

De lo que se desprende que desaparecen los escritos judiciales y se agrega a los elementos de prueba la palabra materiales, siendo que los escritos

judiciales se encuentran ya comprendidos dentro de los actos judiciales y la palabra material se agrega en virtud de que considero que se debe de determinar que únicamente los elementos materiales de prueba pueden ser alterados, es decir sólo la parte material de las pruebas, como las actuaciones donde se encuentran contenidas.

4.5 Resultado.

El resultado en términos generales es la consecuencia y efecto de un hecho, operación o deliberación; en términos jurídicos, es el objetivo hacia el cual tiende la acción. Es la completa realización de la conducta típica como la muerte del producto en el aborto. La acción y el resultado se encuentran en una relación de causa efecto, pero estos son independientes, como en el caso de la tentativa, en donde el sujeto realiza todos los actos tendientes a la comisión del ilícito, pero por una causa externa al agente no se produce el resultado típico o el caso fortuito donde se presenta un resultado sin acción.

Se distinguen dos clases de resultado:

Formal: En estos delitos el resultado es una mera actividad corporal por parte del sujeto activo, es decir, no es necesario que se produzca una mutación en el mundo exterior.

Material: En este tipo de delitos es necesario que se produzca un cambio en el mundo exterior en especial en el objeto material del delito.

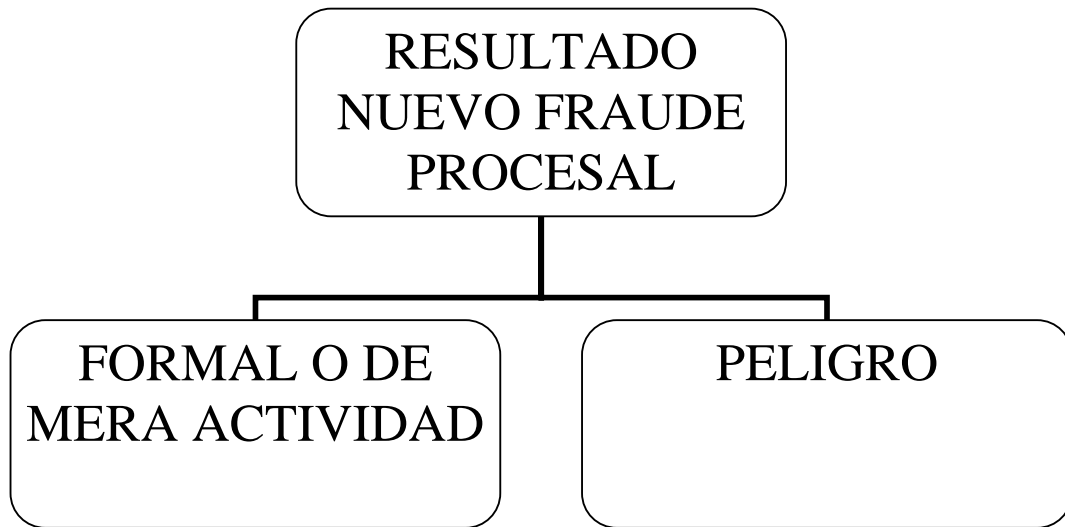
Por lo que en el Capítulo anterior afirmamos que el delito de Fraude Procesal es de resultado formal, es decir, de mera actividad basta que se simule un acto jurídico, acto o escrito judicial, se alteren elementos de prueba y se presenten en juicio o se realice cualquier otro acto tendiente a inducir a error a la autoridad judicial o administrativa. No parecería razonable si se pensara que,

así como se requiere de una simulación apreciable en el mundo exterior o la alteración concreta de elementos de prueba, de la misma forma fuera necesaria esa mutación del mundo exterior, que es tangible.

Por lo que respecta al nuevo Fraude Procesal, se mantiene como un delito de resultado de mera actividad o formal, siendo aplicable el mismo razonamiento.

También en el Capítulo anterior establecí dentro del análisis del Resultado como constante del tipo penal que el delito de fraude procesal previsto en el artículo 310 del Código Penal para el Distrito Federal es de peligro, esto en función de que el obtener una sentencia, resolución o acto administrativo contrario a la ley presupone una mera posibilidad, ya que no es requisito indispensable del tipo penal la existencia de la sentencia, resolución o acto administrativo contrario a la ley, sino por el contrario basta con la simulación de un acto jurídico, acto o escrito judicial, con la alteración de pruebas para que la conducta se adecué a la hipótesis normativa. Toda vez que quedó determinado el bien jurídico protegido del Fraude Procesal como la Correcta Administración y Procuración de Justicia, la comisión del delito la pone en peligro, pero no es requisito que la misma se lesione, como en el caso de que se obtuviera la sentencia, resolución o acto administrativo contrario a la ley.

Hago énfasis en que el nuevo Fraude Procesal en el mismo sentido que el anterior es un delito de peligro y no de lesión.



4.6. Elementos objetivos.

Los elementos objetivos del tipo son los elementos descriptivos susceptibles de ser apreciados por los sentidos (vista, tacto, gusto, oído, olfato). Representan cosas, hechos o situaciones del mundo circundante.

En el Capítulo anterior establecí que los elementos objetivos del tipo penal de Fraude Procesal vigente consistían en:

- **Sujeto Activo,**
- **Sujeto Pasivo o Sujetos Pasivos,**
- **Acto jurídico,**
- **Acto judicial,**
- **Escrito judicial,**
- **Elementos de prueba,**
- **Cualquier otro acto tendiente a inducir a error a la autoridad judicial,**
- **Juicio,**

- **La Sentencia,**
- **Resolución,**
- **Acto administrativo.**

De un análisis del tipo del nuevo Fraude Procesal en el mismo orden de ideas:

Artículo 310. Al que para obtener un beneficio indebido para sí o para otro, simule un acto jurídico, un acto judicial o altere elementos materiales de prueba y los presente en un proceso o procedimiento judicial, administrativo o seguido ante autoridad jurisdiccional, o realice cualquier acto tendiente a inducir al error a la autoridad judicial, administrativa o jurisdiccional, con el fin de obtener resolución o acto administrativo motivados erróneamente, se le impondrán de cuatro a ocho años de prisión y de cien a trescientos días multa.

Si en la comisión del presente delito participara un Licenciado en Derecho, Pasante en Derecho, o Apoderado tratándose de procesos o procedimientos seguidos ante la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Distrito Federal, se le aumentará una tercera parte de la pena prevista para este delito.

Para el tipo penal del nuevo Fraude Procesal establezco los siguientes elementos objetivos:

- **Sujeto Activo,**
- **Sujeto Pasivo o Sujetos Pasivos,**
- **Acto jurídico,**
- **Acto judicial,**
- **Elementos materiales de prueba,**
- **Cualquier otro acto tendiente a inducir a error a la autoridad judicial,**
- **Cualquier otro acto tendiente a inducir a error a la autoridad administrativa,**

- **Cualquier otro acto tendiente a inducir a error a la autoridad jurisdiccional**
- **Proceso Judicial,**
- **Proceso Administrativo,**
- **Proceso seguido ante autoridad jurisdiccional,**
- **Procedimiento Judicial**
- **Procedimiento Administrativo**
- **Procedimiento ante Autoridad Jurisdiccional,**
- **Resolución,**
- **Acto administrativo.**

Por lo que respecta al **Sujeto Activo y Pasivo o Pasivos** del tipo del nuevo Fraude Procesal, no difieren como ya se trató en el presente Capítulo, de lo establecido en el Fraude Procesal vigente analizado en el Capítulo anterior.

El caso del **Acto Jurídico**, tampoco se modifica en comparación con el Tipo Penal de Fraude Procesal Vigente.

En cuanto al **Acto judicial**, considero, como ya lo expuse son los actos que realizan los particulares ante las autoridades:

“El acto judicial es el que se lleva a cabo por funcionarios judiciales en ejercicio de sus funciones. También se llaman actos judiciales los autos, decisiones, decretos y providencias de los jueces y magistrados. En síntesis, pudiera decirse que el acto judicial es el realizado por las autoridades judiciales en ejercicio de sus funciones, o por los particulares ante ellas y con relación a dichas funciones.” ¹⁰⁹

Por lo que es repetitivo y por lo tanto sin técnica legislativa hacer mención al **Escrito Judicial**, en virtud de que siempre es un Acto Judicial.

¹⁰⁸ PALLARES, Eduardo, Op. Cit., p. 61.

Elementos Materiales de Prueba. Por elementos de prueba entendemos, a aquellos elementos que las partes utilizan para causar convicción en el Juzgador, en cuanto a los hechos controvertidos:

“La actividad cuyo objeto consiste en verificar la exactitud de los datos fácticos que las partes incorporan al proceso a través de sus afirmaciones reciben el nombre de prueba, cuyo objetivo es la producción del convencimiento psicológico del órgano judicial, la expresión prueba, en el lenguaje procesal tiene tres significados fundamentales. Desde un primer punto de vista, en efecto denota la peculiar actividad que se despliega durante el transcurso del proceso por obra de las partes y del órgano judicial (con la finalidad del convencimiento psicológico por parte del juzgador). En segundo lugar, por prueba se entiende asimismo el conjunto de modos u operaciones (medios de prueba) del que se extraen, por conducto de la fuente que se proporcionan, las razones generadoras de la convicción judicial. Finalmente, la prueba significa el hecho mismo de la convicción judicial, es decir, el convencimiento psicológico.”¹¹⁰

Los principales medios de prueba, contemplados en las diversas legislaciones son como lo establece el Capítulo segundo del Título sexto del Código de Procedimientos Civiles Vigente en el Distrito Federal y el Capítulo cuarto título segundo del Código de Procedimientos Penales para el Distrito Federal son: Documentales Públicas y Privadas, la Confesional, La Testimonial, La Pericial, La Instrumental, La Presuncional, etc.

En la redacción del Nuevo Fraude Procesal se añade respecto de la redacción vigente la palabra “**materiales**”, ya que considero que toda vez que la legislación no contempla a los elementos de prueba, sino a los medios de prueba, pero si nosotros determinamos que por elemento entendemos la parte que conforma algo, tratándose de las documentales no tendríamos problema en entender que una documental fue alterada, pero si atendemos a los medios de prueba nos encontraríamos que en el caso de la confesional o testimonial,

¹¹⁰Cfr. PALACIO, Enrique, Op. Cit., pp. 327-331.

alterar un elemento solo podría ser cuando esta ya se encuentre contenida en un elemento material (actuación) o en los casos que la legislación permite que ciertas personas como el Presidente de la República la realicen por escrito, se puede alterar dicho escrito, por lo que considero correcto que el tipo contemple que únicamente se puedan alterar los elementos materiales de prueba.

Respecto a los elementos:

Cualquier otro acto tendiente a inducir a error a la autoridad judicial, cualquier otro acto tendiente a inducir a error a la autoridad administrativa, y cualquier otro acto tendiente a inducir a error a la autoridad jurisdiccional.

En el Capítulo anterior, señale estos elementos como objetivos, ya que considero que a pesar de ser esta la hipótesis que representa la imposibilidad por parte del legislador para prever todas las conductas que pueden llevar al error a la autoridad judicial o administrativa y en este nuevo fraude procesal se agrega la hipótesis en referente a las “Autoridades Jurisdiccionales” a efecto de no limitar y que no se dé espacio a una interpretación sobre todo tratándose de las Juntas del Trabajo o del Tribunal Contencioso Administrativo.

Referente a:

- **Proceso Judicial,**
- **Proceso Administrativo,**
- **Proceso seguido ante autoridad jurisdiccional,**
- **Procedimiento Judicial**
- **Procedimiento Administrativo**
- **Procedimiento ante Autoridad Jurisdiccional,**

En el Capítulo anterior establecí cuando se analicé lo relativo al juicio como Elemento Objetivo que las hipótesis se deberían de verificar con ocasión de un juicio, y como lo determine, es objeto de interpretación el empleo de esta

palabra en virtud de que inclusive los Tribunales Federales habían determinado que por juicio se entendía desde la interposición de la demanda y hasta la emisión de la sentencia, por lo que se dejaría fuera los actos hechos antes del “juicio” como medios preparatorios, jurisdicción voluntaria, o posteriores al mismo como incidentes en ejecución de sentencia.

En ese orden de ideas en el nuevo fraude procesal se sustituye la ocasión del juicio por la de encontrarse en un proceso o procedimiento ya sea judicial, administrativo o jurisdiccional (en este último caso a efecto de abarcar los procesos o procedimientos ante las juntas del trabajo o el tribunal de lo contencioso administrativo por ejemplo).

En el apartado referente a los elementos normativos analizare a profundidad la definición de proceso y procedimiento y sus diferencias.

La Resolución como ya lo señalé abarca también a la sentencia eliminándose en el nuevo Fraude Procesal y se contempla a la Resolución, la cual al igual que el acto administrativo como se desprende de nuestra Constitución, debe ser por escrito por lo que ambos son elementos objetivos.

4.7. Elementos subjetivos.

Los elementos subjetivos del Tipo Penal van a atender a la intención, al ánimo que tuvo el sujeto activo o debe tener, en la realización de algún ilícito penal, es decir, atiende a circunstancias que se dan en el mundo interno del sujeto activo.

El legislador no únicamente toma en cuenta el aspecto externo en las descripciones típicas, sino como en el caso de los delitos dolosos, toma en cuenta la intencionalidad del sujeto

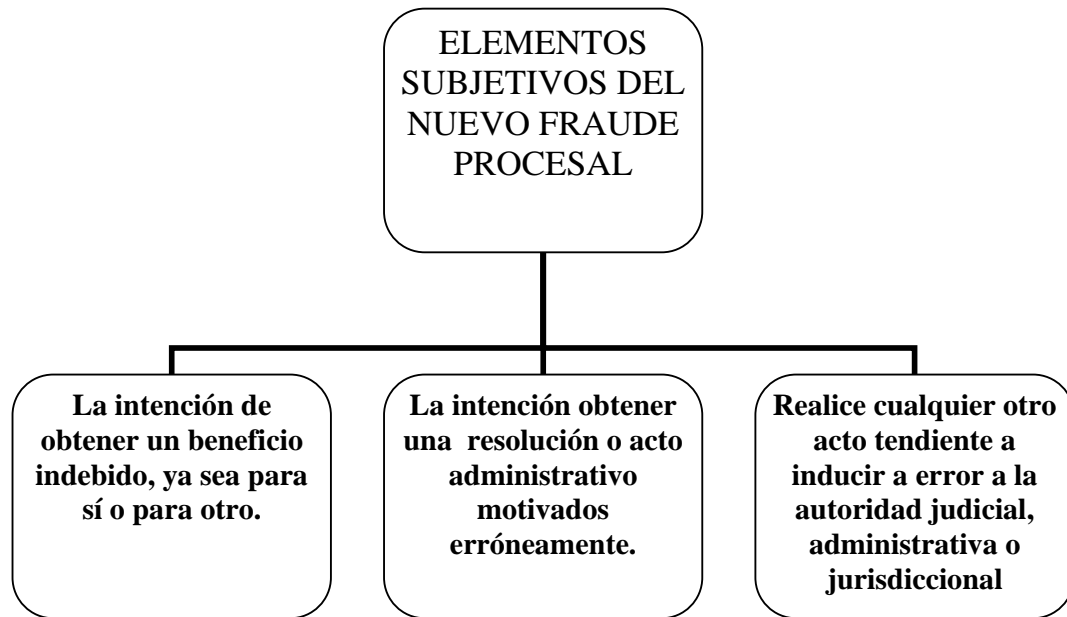
El tipo penal de Fraude Procesal vigente al igual que en el nuevo Fraude Procesal se establece claramente, como requisito de su existencia que el Sujeto Activo del Delito, **tenga la intención de obtener un beneficio indebido, ya sea para sí o para otro.**

En consecuencia, diré que son elementos Subjetivos del tipo penal de Fraude Procesal vigente y del Nuevo Fraude Procesal, la finalidad del Sujeto Activo de obtener un beneficio indebido para sí o para otro, todo esto se infiere de la frase **“Al que para obtener un beneficio indebido para sí o para otro”**.

Para la existencia del injusto en el caso del Fraude Procesal Vigente, no solamente es necesaria la intención del Sujeto Activo de obtener un beneficio indebido, para sí o para otro, sino que además debe de tener el fin de obtener sentencia, resolución o acto administrativo contrario a la ley.

En el caso del nuevo Fraude Procesal, el Sujeto Activo del Delito, deberá tener la finalidad de obtener un beneficio indebido para sí o para otro y **al mismo tiempo de obtener una resolución o acto administrativo motivados erróneamente.**

La hipótesis descrita en el tipo penal del nuevo Fraude Procesal que hace referencia a: **“realice cualquier otro acto tendiente a inducir a error a la autoridad judicial, administrativa o jurisdiccional”**, como ya lo he analizado, no difiere en esencia con la del Fraude Procesal vigente con la que el legislador trató de dejar abierta la posibilidad de sancionar, no exclusivamente las conductas que sí delimitó, como las de simular o alterar, en sus respectivos supuestos, por lo que cualquier otro acto que no encuadre en las demás hipótesis, deberá, por fuerza ser con la finalidad de inducir al error a la autoridad judicial, administrativa o jurisdiccional.



4.8. Elementos normativos.

Como lo mencioné en los Capítulos segundo y tercero de la presente tesis al hacer referencia de los elementos normativos cite al maestro González Quintanilla quien dice que “los elementos normativos son aquellas situaciones o conceptos complementarios, impuestas en los tipos que requieren de una valoración cognoscitiva, jurídica, cultural o social”¹¹¹

De la anterior definición establezco que la valoración puede ser cognoscitiva, jurídica, cultural o social. Por lo que citaré diversos ejemplos de las distintas valoraciones:

- d) Cognoscitiva.- La brutal ferocidad en el homicidio o motivos depravados.
- e) Jurídica.- El domicilio en el delito de variación de nombre o domicilio, que es una obligación, alimentos, etc.

¹¹¹ GONZÁLEZ QUINTANILLA, Arturo. Op. Cit., pág. 656.

- f) Cultural o social.- Obsceno en los ultrajes a la moral pública, vicio, honor, amistad, amor, etc.

En el capítulo tercero al analizar los elementos normativos del Fraude Procesal vigente determiné los siguientes:

- **Simular un acto jurídico**
- **Simular un acto judicial**
- **Simular un escrito judicial**
- **Alterar elementos de prueba**
- **Juicio**
- **Inducción a error**
- **Autoridad judicial**
- **Autoridad administrativa**
- **Sentencia contraria a la ley**
- **Resolución contraria a la ley**
- **Acto administrativo contrario a la ley**

En este apartado analizaré los elementos normativos que difieren respecto del Fraude Procesal Vigente y que integran al nuevo Fraude Procesal:

Artículo 310. Al que para obtener un beneficio indebido para sí o para otro, simule un acto jurídico, un acto judicial o altere elementos materiales de prueba y los presente en un proceso o procedimiento judicial, administrativo o seguido ante autoridad jurisdiccional, o realice cualquier acto tendiente a inducir al error a la autoridad judicial, administrativa o jurisdiccional, con el fin de obtener resolución o acto administrativo motivados erróneamente, se le impondrán de cuatro a ocho años de prisión y de cien a trescientos días multa.

Si en la comisión del presente delito participara un Licenciado en Derecho, Pasante en Derecho, o Apoderado tratándose de procesos o procedimientos seguidos ante la Junta Local de Conciliación y Arbitraje

del Distrito Federal, se le aumentará una tercera parte de la pena prevista para este delito.

De la lectura del nuevo Fraude Procesal se desprenden los siguientes elementos normativos:

- **Simular un acto jurídico**
- **Simular un acto judicial**
- **Alterar elementos materiales de prueba**
- **Proceso Judicial**
- **Procedimiento Judicial**
- **Proceso Administrativo**
- **Procedimiento Administrativo**
- **Proceso seguido ante Autoridad Jurisdiccional**
- **Procedimiento seguido ante Autoridad Jurisdiccional**
- **Inducción a error**
- **Autoridad judicial**
- **Autoridad administrativa**
- **Autoridad Jurisdiccional**
- **Resolución motivada erróneamente**
- **Acto administrativo motivado erróneamente**

En el siguiente cuadro compararé los elementos normativos del Fraude Procesal Vigente y del Nuevo Fraude Procesal:

ELEMENTOS NORMATIVOS

FRAUDE PROCESAL VIGENTE

- Simular un acto jurídico
- Simular un acto judicial
- Simular un escrito judicial
- Alterar elementos de prueba
- Juicio
- Inducción a error
- Autoridad judicial
- Autoridad administrativa
- Sentencia contraria a la ley
- Resolución contraria a la ley
- Acto administrativo contrario a la ley

NUEVO FRAUDE PROCESAL

- Simular un acto jurídico
- Simular un acto judicial
- Alterar elementos materiales de prueba
- Proceso Judicial
- Procedimiento Judicial
- Proceso Administrativo
- Procedimiento Administrativo
- Proceso seguido ante Autoridad Jurisdiccional
- Procedimiento seguido ante Autoridad Jurisdiccional
- Inducción a error
- Autoridad judicial
- Autoridad administrativa
- Autoridad Jurisdiccional
- Resolución motivada erróneamente
- Acto administrativo motivado erróneamente

De lo anterior se desprende que el nuevo Fraude Procesal contempla de forma idéntica al Fraude Procesal Vigente los siguientes elementos:

- **Simular un acto jurídico**
- **Simular un Acto Judicial**
- **Inducción a error**
- **Autoridad Judicial**
- **Autoridad Administrativa**

En consecuencia omitiré explicarlos de nueva cuenta en virtud de que ya fueron objeto de análisis en el Capítulo anterior en el punto 3.8.

Así que comenzaré a analizar el elemento consistente en **Alterar elementos materiales de prueba**, este elemento únicamente varía respecto de la redacción anterior en el sentido de agregar la palabra “**materiales**”, esto en virtud de que la redacción vigente es muy amplia al no delimitar los elementos de prueba en virtud de que nuestra legislación no hace referencia a los elementos de prueba sino a los medios de prueba, como ya lo analice en el Capítulo anterior, siendo que la mayoría de las legislaciones como lo son el Código Penal para el Distrito Federal y el Código Civil para el Distrito Federal contemplan y regulan a los medios de prueba consistentes en la Confesional, Testimonial, Pericial, Documental, Presuncional, etc. Por lo que no resulta lógico que se puedan alterar (modificar la esencia) las pruebas, pero si atendemos a que las mismas pueden ser alteradas una vez materializadas, es decir, cuando se encuentren objetivadas, como en el caso de las confesionales o testimoniales, las cuales son en principio verbales (excepto las que la legislación autoriza como las de funcionarios como el Presidente de la República a quien se le permite presentar su testimonio por escrito), pero al final son contenidas en las actuaciones judiciales y esas actuaciones judiciales pudieran ser alteradas y en ese caso se colmaría el supuesto descrito en el Nuevo Fraude Procesal; Considero importante agregarle dicho concepto.

Respecto a los elementos: **Proceso Judicial, Procedimiento Judicial, Proceso Administrativo, Procedimiento Administrativo, Proceso seguido ante Autoridad Jurisdiccional, Procedimiento seguido ante Autoridad Jurisdiccional;**

En la redacción vigente de Fraude Procesal, el tipo Penal hace mención a una referencia de ocasión que es el “Juicio”, por tal motivo la hipótesis debe de presentarse en razón de un juicio, por lo que al definirlo, dire que a pesar de que en la doctrina el Juicio es sinónimo de Proceso, no siendo así en la legislación, ya que a pesar de que en el Código de Procedimientos Civiles se hace referencia a diversos juicios, lo cierto es que no se da una definición del mismo, mientras que en la legislación penal, se hace referencia a la etapa del juicio siendo el caso que por juicio se entendería solo las conclusiones del Ministerio Público y del abogado defensor y la emisión de la sentencia por parte del Juzgador. Por otro lado los Juzgados Federales han determinado que juicio debe entenderse el procedimiento contencioso ante un órgano jurisdiccional, que se inicia con la presentación de la demanda y concluye con la sentencia definitiva o resolución que, sin decidirlo en lo principal, lo da por concluido, impidiendo su prosecución o continuación.

De lo anterior resulta que en ningún caso se contempla que el juicio sea más que la interposición de la demanda y hasta la emisión de la sentencia dejando por ende fuera los procedimientos como los de jurisdicción voluntaria, medios preparatorios o los de ejecución de sentencia, por lo que sustituí la palabra juicio y agregamos al tipo los Procesos y Procedimientos, ya fueran judiciales, jurisdiccionales o administrativos, así que analizaré el concepto y diferencia de Proceso y Procedimiento, por lo tanto cito al maestro Julio Hernández Pliego:

“(…) Procedimiento y proceso se diferencian esencialmente en cuanto a su finalidad. El primero (procedimiento), se integra con una serie de actos ordenados y encaminados hacia un objetivo. En este sentido se alude al procedimiento idóneo para alcanzar alguna finalidad, o al procedimiento para la

elaboración de un objeto. El fin perseguido en el procedimiento no necesariamente habrá de ser, como en el proceso, la resolución jurisdiccional de un conflicto de intereses sometido al conocimiento de la autoridad judicial.

El proceso, palabra que se recoge del derecho canónico y deriva de procederé, avanzar, caminar hacia adelante, además, sólo puede presidirse por un miembro del poder judicial; solamente en función del juez tiene sentido hablar del proceso.

El titular del procedimiento, en cambio, puede serlo un órgano del ejecutivo o del poder legislativo, como ocurre, verbigracia, con el Ministerio Público que dependiendo del ejecutivo, es el que preside el procedimiento penal de Averiguación Previa.

Por lo demás, entre proceso y procedimiento existe una relación del todo con una de sus partes.

La expresión juicio tiene diversas connotaciones. En una de ellas equivale a proceso.

Parece que la acepción más importante es la que entiende al juicio como al acto del Juez que sucede al análisis y ponderación de los hechos, a la luz de la totalidad de los elementos de prueba aportados al proceso, y que es anterior al dictado de la sentencia.

El juicio es la convicción a la que arriba el juez luego de examinar los hechos sometidos a su conocimiento enlazando a ese análisis las pruebas allegadas al proceso.”¹¹²

“El procedimiento esta constituido por el conjunto de actos, vinculados entre si por relaciones de causalidad y finalidad y regulados por normas jurídicas, ejecutados por los órganos persecutorio y jurisdiccional, en el ejercicio de sus respectivas atribuciones, para actualizar sobre el autor o partícipe de un delito la conminación penal establecida en la ley.

El proceso es por lo que hace a México, el periodo de procedimiento que se inicia con el auto de formal prisión.”¹¹³

¹¹² Cfr. HERNÁNDEZ PLIEGO, Julio, *Programa de Derecho Procesal Penal*, 7ª ed. México, Editorial Porrúa, 2001, p. 6-8

¹¹³ ARILLA BAS, Fernando, *EL Procedimiento Penal en México*, 22ª ed. Porrúa, México 2003, pp. 4,5.

De lo anterior se concluye lo siguiente:

La diferencia más importante entre Proceso y Procedimiento es su finalidad; siendo el caso que el Proceso tiene como fin resolver controversias de intereses y el procedimiento no, siendo además que el Procedimiento guarda respecto del Proceso una relación de ser parte del todo que es el Proceso.

Si bien es cierto que tradicionalmente se ha equiparado al Proceso con el Juicio, lo cierto es que en la legislación no significan lo mismo como en el caso del Código de Procedimientos Penales, donde determina exactamente que es el juicio, de lo que resulta que el tipo penal de Fraude Procesal vigente, únicamente podría ser aplicado en cuanto a la ocasión que establece el tipo, en relación con lo establecido en la legislación, es por ello que considero más acertado suprimir dicha palabra y hacer referencia al Proceso o Procedimiento, con lo que se contemplarían todos los supuestos ya sea ante la Autoridad Judicial, Administrativa o Jurisdiccional. Ya que si bien algunos autores estiman que el Proceso únicamente puede ser presidido por una autoridad Judicial, y que en su caso sería incorrecto hablar de un Proceso Administrativo, esto no deja de ser una mera apreciación doctrinal y no práctica, por lo que es correcto contemplar todos los supuestos.

Al analizar el elemento consistente en la **Autoridad Jurisdiccional**, se debe considerar, que el hecho de haber incluido a este elemento, responde a las siguientes circunstancias:

El concepto de Autoridad, lo determiné en el Capítulo anterior al analizar los Elementos Normativos del Fraude Procesal Vigente, por lo que restaría establecer a qué me refiero por jurisdiccional:

Jurisdicción:

Se afirma que su raigambre latina proviene de jurisdictio-onis, poder o autoridad que se tiene para gobernar o poner en ejecución las leyes, o para aplicarlas en juicio. O bien, si se atiende a las voces latinas jus, derecho, recto, y dicere, proclamar, declarar, decir, significa proclamar el derecho.

Por lo que afirmo que la palabra jurisdiccional, proviene de la jurisdicción, cuyo significado esencial es el de decir el Derecho.

En el tipo vigente de Fraude Procesal, se establecía a las Autoridades Judiciales y Administrativas, siendo el caso que de la definición de Jurisdiccional se podría considerar que ambas dicen el Derecho, ya sea en los actos o resoluciones de dichas autoridades, sin embargo como hice referencia en su momento, de una interpretación estricta como es el caso que nos merece la aplicación del Derecho Penal, de acuerdo a sus bases Constitucionales, siendo el caso que si considero a las autoridades Judiciales como aquellas propias del Poder Judicial (en nuestro caso del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal) y a las Administrativas como a aquellas propias del Ejecutivo Local. Por lo tanto considero acertado, que se agregue a las autoridades jurisdiccionales, a efecto de no contrariar las bases constitucionales del Derecho Penal y dejar abierta la aplicación del precepto a aquellas que tienen una naturaleza Jurisdiccional como las Juntas del Trabajo o el Tribunal de Lo Contencioso Administrativo. Ya que inclusive el criterio de los Tribunales Federales ha sido estricto en cuanto a la determinación de las autoridades judiciales, Administrativas, etc. siendo que inclusive se equipara a la Autoridad Judicial con la Jurisdiccional, desatendiendo el significado esencial y determinando que únicamente son autoridades judiciales las que pertenecen al poder judicial, como se puede observar en la siguiente tesis:

Registro No. 223892 Localización: Octava Época Instancia: Tribunales
Colegiados de Circuito Fuente: Semanario Judicial de la Federación VII, Enero
de 1991 Página: 366 Tesis Aislada Materia(s): Civil

PROCURADURÍA FEDERAL DEL CONSUMIDOR. NO TIENE EL CARÁCTER DE AUTORIDAD JURISDICCIONAL.

*La Ley Federal de Protección al Consumidor establece que la Procuraduría de esa materia es un organismo descentralizado de servicio social, con personalidad jurídica, patrimonio propio y con funciones de autoridad administrativa encargada de promover y proteger los derechos e intereses de la población consumidora, mediante el ejercicio de las atribuciones que le confiere la Ley, teniendo entre sus facultades representar a los consumidores ante las autoridades jurisdiccionales. En la fracción VIII del artículo 59, en sus diversos incisos se establece un procedimiento conciliatorio y arbitral para dirimir las quejas y reclamaciones de los consumidores, siempre como amigable componedor. En estas condiciones la Procuraduría Federal del Consumidor al intervenir en los conflictos que surjan entre consumidor y proveedor, como lo es tratándose de arrendatarios y arrendadores, lo hace como árbitro designado voluntariamente por las partes, **sin que y en ningún caso, el Procurador tenga facultades jurisdiccionales**, de donde se concluye que no actúa como autoridad jurisdiccional; luego carece de competencia judicial, atenta a la división de poderes que consagra la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las de las entidades que la integran, porque esta facultad compete al Poder Judicial Federal o local, quiénes son las autoridades facultadas para dirimir las controversias que pudieran surgir entre los propios gobernados o entre éstos y las distintas autoridades. Por lo tanto, aun cuando la Ley Federal de Protección al Consumidor en el artículo 59, fracción VIII, inciso h), dispone que cuando se haya presentado alguna reclamación en la Procuraduría Federal del Consumidor o se esté substanciado el procedimiento a que se refiere esa fracción resultará improcedente cualquiera otra vía de impugnación para dirimir las diferencias entre proveedor y consumidor por los mismos hechos; también lo es que esa circunstancia en manera alguna le otorga a aquélla funciones jurisdiccionales, y por ende el ejercicio de la acción judicial no puede limitarse porque ello sería inconstitucional, al limitarse su derecho para acudir al Poder Judicial ejercitando sus acciones; en cambio ante la Procuraduría del Consumidor, como indica el referido inciso h) de la fracción VIII del artículo 59*

de la Ley invocada, la competencia que se establece como exclusiva se refiere a conflictos específicos de consumidores y proveedores, lo cual es concepto diverso a las partes que dirimen sus conflictos en vía jurisdiccional, de donde se concluye que la prórroga de un contrato de arrendamiento debe pedirse ante el juez competente y no ante la Procuraduría Federal del Consumidor, porque el indicado juez sí es autoridad jurisdiccional, no así la referida Procuraduría Federal del Consumidor.

SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO.

Amparo directo 5284/90. Celsa Pacheco García. 29 de noviembre de 1990. Unanimidad de votos. Ponente: José Joaquín Herrera Zamora. Secretario: César Augusto Figueroa Soto.

Ahora bien, respecto al elemento consistente en la “**Resolución motivada erróneamente**” en el Capítulo anterior expuse lo que era referente a la resolución y al acto administrativo, por lo tanto únicamente nos referiremos a “motivado erróneamente, tanto en la Resolución como en el **Acto administrativo motivado erróneamente**”

En la redacción del tipo vigente de Fraude Procesal se hablaba de la Sentencia, Resolución o Acto Administrativo contrario a la ley, lo que desde el análisis en el Capítulo anterior afirmé que era incorrecto, en virtud de que por mandato Constitucional los actos de autoridad (en los que se incluye la Resolución, sentencia o Acto Administrativo) debían de ser fundados y motivados, es decir, estar sobre bases de Derecho y de Hecho, por lo que una Resolución Sentencia o Acto Administrativo no podrían jamás ser contrarios a la ley (al Derecho desde una visión positivista), tanto que por fuerza debían estar fundados en el mismo.

Al realizar un análisis del tipo de Fraude Procesal, se establece que éste sanciona el dolo de un particular en contra de una autoridad, siendo el caso

que lo hace caer o mantenerse en el error respecto de una situación, que en su caso es una situación de hecho, es decir, en cuanto a la motivación y no en cuanto a la fundamentación, razón por la que el ánimo del actor debe ser en base a querer obtener la Sentencia, Resolución o Acto Administrativo, motivado erróneamente, siendo esto, en base a hechos y no a Derecho erróneo. Es decir, en una falsa apreciación de la realidad de los hechos y no del Derecho.

CONCLUSIONES

PRIMERA: El Delito de Fraude Procesal tiene su origen en el anterior Código Penal Vigente, en el cual se contemplaba como una equiparable del Fraude Genérico, después de la iniciativa de los Partidos Acción Nacional, Revolucionario Institucional y de la Revolución Democrática nace el Fraude Procesal Vigente en el Distrito Federal, siendo un avance importante a efecto de garantizar la seguridad del gobernado en la correcta Procuración y Administración de la Justicia.

SEGUNDA: Dentro del segundo Capítulo analicé los conceptos de los elementos y de las constantes del tipo penal en general, de lo que concluí, entre otras cosas, que la legislación es omisa a dar un concepto de bien jurídico protegido, qué bienes jurídicos protegidos son disponibles.

TERCERA: Respecto del análisis del Fraude Procesal Vigente en virtud de que el patrimonio no es el único bien jurídico protegido por el delito de Fraude Procesal, sino en un principio lo es la Correcta Administración y Procuración de Justicia, la cual no sólo protege el patrimonio, sino otros bienes jurídicos, como lo son los derivados de las relaciones familiares, como la filiación, la guarda y custodia, los alimentos, el matrimonio, etc. se debe de establecer otro criterio para la cuantificación de la pena. Razón por la que en el cuarto Capítulo propuse una pena general independientemente de si se causa o no un daño patrimonial. Razón por la cual considero que este delito no se debe de perseguir por querella, y únicamente en razón del daño patrimonial, se persiga de oficio, toda vez que en gran parte en este tipo penal descansa la Seguridad Jurídica y la Confianza en nuestras instituciones, por lo que, debe ser obligación de la Autoridad que conozca de un posible fraude Procesal, dar vista al Ministerio Público y no hasta que la parte afectada se dé cuenta.

CUARTA.- En cuanto a la redacción del tipo penal de fraude procesal, considero que es por demás, referirse al acto y al escrito judicial por separado, cuando el Acto Judicial conlleva la presentación de los escritos judiciales, ya que como lo dije los actos judiciales no incluyen únicamente a los que realiza la Autoridad, sino que también incluye los que realizan los particulares ante estas.

QUINTA.- La hipótesis, relativa a la alteración de los elementos de prueba, continuamente entrara en concurso, con otras hipótesis, previstas en el Código Penal del Distrito Federal, por lo que deben desaparecer las que prevean la misma conducta, siendo además que como propuse en el Nuevo Fraude Procesal, se debe de determinar que los elementos de prueba sean los materiales a efecto de dar una mejor redacción determinada de mejor forma. En virtud de que, el alterar testimoniales o confesionales, exclusivamente se puede presentar, en cuanto a que se encuentren en una actuación material o documento que sea tangible, sino en todo caso se estaría en presencia de una falsedad de declaración ante autoridad.

SEXTA.- El delito de Fraude Procesal, debe de contemplar una pena más agravada, cuando en él intervenga un perito en Derecho, como lo son los Licenciados en Derecho, en virtud de que por su actividad están cercanos a las instituciones que imparten justicia y debe ser un deber ético no atentar en contra de la Correcta Administración y Procuración de Justicia.

SÉPTIMA.- En cuanto a la referencia de ocasión de presentar las pruebas alteradas en juicio, considero que la palabra Juicio, debe de ser sustituida en el Tipo Penal, por la frase “ Proceso o Procedimiento judicial o administrativo”, toda vez que como lo expuse, esta frase se limita al proceso judicial contencioso, y no comprendería en todo caso los procedimientos prejudiciales o posteriores a la sentencia o en los que no exista litis, y tampoco comprende los procesos o procedimientos administrativos, tal y como lo propongo en el Nuevo Fraude Procesal.

OCTAVA.- Se debe de suprimir la referencia que realiza el tipo penal de Fraude Procesal a la Sentencia, toda vez que la misma es una especie de la Resolución, en consecuencia resulta ocioso mencionarla, tal y como lo plasme en el Nuevo Fraude Procesal.

NOVENA.- Se debe modificar la frase de contrario a la ley, en virtud, de que no es posible que una Resolución, Sentencia o Acto Administrativo, sean contrarios a la Ley, ya que en todo caso estarán mal motivados, pero no serán contrarios a la Ley. En virtud de que como lo establecí en este análisis, los actos de autoridad deben estar fundados y motivados y en todo caso el dolo del particular únicamente puede llevar a la autoridad a motivar erróneamente una sentencia y no a emitirse contraria a la ley, tal y como lo propuse en el Nuevo Fraude Procesal.

DÉCIMA.- Es indispensable, que el legislador defina en el Código Penal o de Procedimientos Penales para el Distrito Federal, cuando menos, cuáles son los elementos objetivos, y retome a estos como requisito para solicitar la orden de aprehensión o realizar la consignación, toda vez que difícilmente el Ministerio Público acreditará los extremos requeridos por el artículo 122 del Código de Procedimientos Penales, ya que como quedó establecido en el Capítulo tercero, este tipo en particular, requerirá, la acreditación de los elementos subjetivos del tipo.

ONCEAVA.- El legislador comparte con las demás autoridades su obligación de expedir normas dentro de los parámetros establecidos en la Constitución y en el caso de la materia penal con el de estricta aplicación de la norma, por lo que debe de procurar emitir tipos penales cuya interpretación no soslaye garantías individuales del gobernado.

PROPUESTA

La propuesta de la presente tesis se encuentra plasmada en el cuarto Capitulo de la presente tesis, en el cual se plantea una redacción del Tipo Penal de Fraude Procesal en la cual se modifican algunos elementos del tipo penal de Fraude Procesal Vigente establecido en el artículo 310 del Código Penal para el Distrito Federal:

Propuesta de Nuevo Fraude Procesal

Artículo 310. Al que para obtener un beneficio indebido para sí o para otro, simule un acto jurídico, un acto judicial o altere elementos materiales de prueba y los presente en un proceso o procedimiento judicial, administrativo o seguido ante autoridad jurisdiccional, o realice cualquier acto tendiente a inducir al error a la autoridad judicial, administrativa o jurisdiccional, con el fin de obtener resolución o acto administrativo motivados erróneamente, se le impondrán de cuatro a ocho años de prisión y de cien a trescientos días multa.

Si en la comisión del presente delito participara un Licenciado en Derecho, Pasante en Derecho, o Apoderado tratándose de procesos o procedimientos seguidos ante la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Distrito Federal, se le aumentará una tercera parte de la pena prevista para este delito.

De lo anterior se desprende que la propuesta consiste en la modificación para el mejoramiento de la aplicación del tipo penal de Fraude Procesal la cual comprende las siguientes modificaciones:

Sujetos.- Por lo que respecta a estos, no se modifica el Sujeto Activo de la Conducta ni el o los Pasivos, excepto que en el caso del Sujeto Activo se

agrava cuando intervenga un Licenciado en Derecho, Pasante en Derecho o Apoderado Legal tratándose de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje.

Cosas.- Desaparece lo referente a los escritos judiciales, en virtud de que se encuentran comprendidos dentro de las Actuaciones Judiciales.

Elementos Objetivos.- Se elimina a los escritos judiciales, los elementos de prueba ahora deberán ser materiales, se agrega la palabra proceso y procedimiento sustituyendo a la palabra juicio, desaparece la sentencia.

Elementos Subjetivos.- Se mantiene la intencionalidad del sujeto de obtener un beneficio, la hipótesis de inducir al error a la Autoridad, pero en este caso no solo a la Autoridad Judicial y Administrativa, sino a la Jurisdiccional también y de obtener una resolución o Acto Administrativo, pero esté motivado erróneamente.

Elementos Normativos.- Únicamente se mantienen de forma idéntica al Fraude Vigente: Simular un acto jurídico, Simular un Acto Judicial, Inducción a error, Autoridad Judicial, Autoridad Administrativa, por lo que los demás sufren una modificación. Con lo que los Elementos Normativos del Fraude Procesal son independientemente de los anteriores y que presentan una variación respecto del anterior son: **Alterar elementos materiales de prueba, Proceso Judicial, Procedimiento Judicial, Proceso Administrativo , Procedimiento Administrativo, Proceso seguido ante Autoridad Jurisdiccional, Procedimiento seguido ante Autoridad Jurisdiccional, Autoridad Jurisdiccional, Resolución motivada erróneamente, Acto administrativo motivado erróneamente**

Además de lo anterior propongo sea modificada la penalidad del delito para que no se utilice el criterio del daño patrimonial.

Me parece importante hacer dichas modificaciones, en virtud de que el delito de Fraude Procesal es uno de los delitos cometidos en mayor número, pero poco sancionado.

BIBLIOGRAFÍA

- 1) AMUCHATEGUI, REQUENA, Irma. Derecho Penal, Tercera Edición, Editorial Oxford, México, 2005.
- 2) ARILLA BAS, Fernando. EL Procedimiento Penal en México, 22ª ed. Porrúa, México, 2003.
- 3) CARNELUTTI, Francesco. Teoría General del Delito, ed. Argos Cali Colombia, Colombia, 1960.
- 4) CASTELLANOS TENA, Fernando. Lineamientos Elementales de Derecho Penal, Cuadragésimo segunda Edición, Editorial Porrúa, México 2001.
- 5) CREUS, Carlos. Derecho Penal Tomo II, 6ª ed. Astrea, Argentina, 1999.
- 6) DAMIANOVICH, Laura. Derecho Penal, ed. Argentina, Argentina 1972. Esfinge, México, 1985.
- 7) FLORIS MARGADANT S., Guillermo. El Derecho Privado Romano, 13ª edición, ed. Esfinge, México, 1985.
- 8) FONTÁN, Carlos. Derecho Penal, ed. Abeledo-Perrots, Argentina, 1990.
- 9) GONZÁLEZ QUINTANILLA, José Arturo. Derecho Penal Mexicano, Séptima Edición, Editorial Porrúa, México, 2004.
- 10) GRANADOS ATLACO, Miguel Ángel. Derecho Penal Electoral Mexicano, Editorial Porrúa, México, 2005.
- 11) HERNÁNDEZ ROMO, Pablo. El Fraude Procesal Penal, Editorial Oxford, México, 2004.
- 12) HERNANDEZ PLIEGO, Julio. Programa de Derecho Procesal Penal, 7ª ed., Editorial Porrúa, México, 2001.
- 13) JIMÉNEZ HUERTA, Mariano. Derecho Penal Mexicano Tomo IV La Tutela Penal del Patrimonio, 7ª ed. Porrúa, México, 2003.
- 14) LABATUT, Gustavo. Derecho Penal, 9ª ed., Editorial Jurídica de Chile, Chile, 1992.
- 15) LÓPEZ BETANCOURT. Eduardo. Teoría del Delito, Editorial Porrúa, México, 1994.
- 16) MUÑOZ, Francisco. Introducción al Derecho Penal, 2ª ed. Casa Editorial B de F, Argentina, 2003.

- 17) ONECA, José. Derecho Penal, 2ª ed. Akal S.A. España, 1986.
- 18) PALACIO, Enrique. Derecho Procesal Civil tomo IV Actos Procesales, Editorial Abeledo-Perot, Argentina, 1967.
- 19) PAVÓN VASCONCELOS, Francisco. Delitos contra el patrimonio (Comentarios de Derecho Penal), 10ª Edición, Editorial Porrúa, México, 2001.
- 20) PAVÓN VASCONCELOS, Francisco. Manual de Derecho Penal Mexicano, ed., Porrúa, México, 1991.
- 21) PORTE PETIT, Celestino. Programa de Derecho Penal, 3ª ed. Trillas, México, 1990.
- 22) REQUENA, Carlos. FRAUDE PROCESAL, 1ª ed., PORRÚA, México, 2007.
- 23) REYNOSO DÁVILA, Roberto. Delitos Patrimoniales, 2ª ed. Porrúa, México, 2002.
- 24) SOLER, Sebastián. Derecho Penal Argentino, ed. Tipográfica Editora Argentina Buenos Aires, Argentina, 1992.
- 25) ZAFFARONI, Eugenio Raúl. Derecho Penal Parte General, ed. Porrúa, México, 2001.

LEGISLACIÓN:

- 1) CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, editada por el Instituto Federal Electoral, 6ª edición, 2006.
- 2) LEY DE AMPARO, 2ª edición, editorial. Castillo Ruiz Editores, México, 2004.
- 3) CAVAZOS, Baltasar, et al, Nueva Ley Federal del Trabajo Tematizada y Sistematizada, 31ª ed. México, Editorial Trillas, 2002.
- 4) AGENDA PENAL DEL D.F. 2007, Editorial ISEF, COMPENDIO DE LEYES Y REGLAMENTOS Y OTRAS DISPOSICIONES CONEXAS DE

LA MATERIA. Código Penal para el Distrito Federal, Código de Procedimientos Penales para el Distrito Federal, Código Federal de Procedimientos Penales, Código Penal Federal.

- 5) AGENDA CIVIL DEL D.F. 2007, Editorial ISEF, COMPENDIO DE LEYES Y REGLAMENTOS Y OTRAS DISPOSICIONES CONEXAS DE LA MATERIA. Código Civil para el Distrito Federal.
- 6) AGENDA PENAL DEL D.F. 2007, Editorial ISEF, COMPENDIO DE LEYES Y REGLAMENTOS Y OTRAS DISPOSICIONES CONEXAS DE LA MATERIA.
- 7) AGENDA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL DISTRITO FEDERAL 2007, editorial Ediciones Fiscales ISEF, 2007. Ley de Procedimiento Administrativo del Distrito Federal.

Otras fuentes:

- 1) DÍAZ DE LEÓN Marco Antonio. Diccionario de Derecho Procesal Penal y de sus términos usuales en el proceso penal, 4ª ed., Tomo I, Porrúa, México, 2000.
- 2) PALLARES, Eduardo, Diccionario de Derecho Procesal Civil, Ed. 27ª Editorial Porrúa, México, 2003.
- 4) Diccionario Jurídico 2000, Desarrollo Jurídico Copyright 2000.
- 5) Diarios de Debates de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal del 30 de abril de 2002, 3 de julio de 2002.

6) Dirección de Acceso a la Información Pública del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal.

7) Página de Internet de la Suprema Corte de Justicia de la Nación
WWW.SCJN.GOB.MX